

La consolidación institucional de la Asamblea de Madrid como Parlamento Autonómico (1983-2002)

Sumario: I. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID.—1.1. El singular acceso a la autonomía de la Comunidad de Madrid; procedimiento de elaboración y aprobación de su Estatuto de Autonomía.—1.2. La configuración institucional de la Asamblea de Madrid.—II. LA ESTRUCTURA DE LA ASAMBLEA DE MADRID.—2.1. La opción por el modelo unicameral.—2.2. La composición política de la Cámara.—2.3. La elección de la Cámara: el sistema electoral.—2.3.1. El régimen electoral de la Comunidad de Madrid: la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid.—2.3.2. La configuración del Derecho de sufragio.—2.3.3. La circunscripción electoral.—2.3.4. La Legislatura: caducidad de los asuntos pendientes de sustanciación.—2.3.5. La proporcionalidad de la representación.—2.4. La dinámica de la institución: resultados electorales y relación de Diputados de la Asamblea de Madrid.—2.4.1. La I Legislatura (1983-1987).—2.4.1.A). Resultados electorales de los comicios celebrados el día 8 de mayo de 1983.—2.4.1.B). Relación de Diputados de la I Legislatura.—2.4.2. La II Legislatura (1987-1991).—2.4.2.A). Resultados de las elecciones celebradas el día 2 de julio de 1987.—2.4.2.B). Relación de miembros de la Cámara durante la II Legislatura.—2.4.3. La III Legislatura (1991-1995).—2.4.3.A). Resultados de los comicios electorales celebrados el día 26 de mayo de 1991.—2.4.3.B). Relación de Diputados de la III Legislatura.—2.4.4. La IV Legislatura (1995-1999).—2.4.4.A). Resultados de los comicios electorales celebrados el día 28 de mayo de 1995.—2.4.4.B). Relación de Diputados de la IV Legislatura.—2.4.5. La V Legislatura (1999-2003).—2.4.5.A). Resultados de los comicios electorales celebrados el día 13 de junio de 1999.—2.4.5.B). Relación de Diputados de la Asamblea de Madrid en su V Legislatura.—2.5. La disolución de la Cámara.—III. EL ESTATUTO JURÍDICO DE LA ASAMBLEA DE MADRID: AUTONOMÍA E INVOLABILIDAD DEL PARLAMENTO REGIONAL.—3.1. La autonomía del Parlamento.—3.1.1. La autonomía reglamentaria.—3.1.1.A). Las originarias «Normas Reglamentarias Provisionales de la Asamblea».—3.1.1.B). El Reglamento de 1984.—3.1.1.C). El vigente Reglamento de 1997.—3.1.2. La autonomía financiera.—3.1.3. La autonomía organizativa: el Reglamento de Régimen Interior y el Estatuto de Personal.—3.1.3.A). El Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid.—3.1.3.B). El Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid.—3.1.4. La auto-

* Letrado de la Asamblea de Madrid.

diquía parlamentaria.—3.2. La inviolabilidad de la Cámara.—IV. EL ESTATUTO JURÍDICO DEL DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DE MADRID.—4.1. La condición de Diputado; adquisición, suspensión y pérdida de la misma.—4.2. Causas de inelegibilidad y circunstancias determinantes de la incompatibilidad.—4.3. Inviolabilidad e inmunidad.—4.4. Derechos derivados de la condición de Diputado.—4.4.1. Las percepciones económicas de los Diputados de la Asamblea de Madrid.—4.4.2. Otros derechos y deberes de los Diputados de la Asamblea de Madrid; en especial, la protección social.—V. LA ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID.—5.1. El Pleno de la Asamblea de Madrid.—5.2. Las Comisiones de la Asamblea de Madrid.—5.2.1. La estructura de las Comisiones.—5.2.2. Sesiones celebradas y relación de Comisiones constituidas.—5.2.3. La Mesa de la Asamblea de Madrid.—5.2.4. La Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid.—5.2.5. La Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid.—VI. LAS FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID.—6.1. El elenco funcional.—6.2. La potestad legislativa.—6.3. La competencia presupuestaria.—6.4. El control político.—6.5. Participación en el procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía.—6.6. Otras competencias constitucionalmente establecidas.—6.6.1. Elección del Presidente de la Comunidad de Madrid.—6.6.2. Designación de los Senadores de la Comunidad de Madrid.—6.6.3. La propuesta de iniciativa legislativa ante el Gobierno y las Cortes Generales.—6.6.4. La iniciativa de reforma constitucional.—6.6.5. El planteamiento de recursos de inconstitucionalidad.

I. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID

1.1. El singular acceso a la autonomía de la Comunidad de Madrid; procedimiento de elaboración y aprobación de su Estatuto de Autonomía

La Constitución española de 1978 prevé, en su artículo 144, tres procedimientos singulares de acceso a la autonomía, en virtud de los cuales se habilita a las Cortes Generales, «*por motivos de interés nacional*», su atribución a determinados territorios mediante ley orgánica.

En concreto, a nuestros efectos, el artículo 144.a) de la *lex superior* establece la posibilidad de «*Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143*».

La prescripción constitucional tenía por objeto habilitar la constitución de Comunidades Autónomas uniprovinciales y era especialmente apropiada para ubicar la provincia de Madrid en el mapa autonómico.

El acceso al autogobierno de la Comunidad de Madrid no estuvo, sin embargo, exento de avatares.

Conforme nos narra Piñar Mañas¹, fueron tres las soluciones alternativas que se manejaron para dar respuesta a la autonomía madrileña:

¹ Vid. «Madrid y su encuadre en el “Estado de las Autonomías”», en la obra colectiva de Enrique Alonso García, Luis Ignacio Ortega Álvarez, José Luis Piñar Mañas y Miguel Sánchez Morón, dirigida por Eduardo García de Enterría y Martínez-Carande, *Madrid, Comunidad Autónoma Metropolitana*, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1983, pp. 21 a 29.

Primera, y la que sin duda fue menos tenida en cuenta: conceder un Estatuto especial para «Madrid-Área Metropolitana», incluyendo el resto de la provincia en las Comunidades Autónomas limítrofes. La cuestión fue abordada ya en el proceso constituyente, en relación con el artículo 5 del texto constitucional, pues hubo quien apoyó que en el mismo se hiciese una mención expresa a un Estatuto especial de Madrid. La propuesta, a semejanza, por ejemplo, de México Distrito Federal o de Washington Distrito Federal, tenía por objeto crear una suerte de «Madrid Distrito Federal», confirmando a la Villa de Madrid un régimen particular, derivado del hecho de ser la capital del Estado².

Segunda: incluir la provincia de Madrid en el seno de alguna de las Comunidades castellanas en proceso de gestación, fundamentalmente en Castilla-La Mancha, opción por la que se decantaron inicialmente la práctica totalidad de los representantes parlamentarios de Madrid. Tal es así que el Real Decreto-ley 32/1978, de 31 de octubre, por el que se disponía la constitución del régimen preautonómico para la región castellano-manchega³, estableció, en el apartado 1 de su Disposición Adicional, que *«la provincia de Madrid, previo acuerdo de la mayoría de sus parlamentarios con la Junta de Comunidades, podrá ulteriormente incorporarse a la región castellano-manchega en condiciones de absoluta igualdad con las demás provincias. Se faculta al Gobierno para adaptar el presente Real Decreto-ley a la nueva situación que se produzca»*. Ciertamente es que el propio Preámbulo reconocía, para evitar malas conclusiones precipitadas, que *«la referencia a la provincia de Madrid que en el Real Decreto-ley se contiene, en modo alguno predetermina su incorporación a esta u otra entidad territorial. El carácter específico que le confiere el ser la capital del Estado, su especial dimensión sociológica, política y económica han aconsejado arbitrar la posibilidad de su integración futura, en igualdad de derechos con las restantes provincias, en la Junta de Comunidades»*. El ulterior proceso se desarrollaría, sin embargo, a partir de la idea de que la integración no se produjera en régimen de absoluta igualdad, sino conservando un cierto grado de autogobierno para Madrid, derivado de la existencia del Área Metropolitana y de su condición de capital del Estado. Finalmente, el lógico rechazo de los representantes castellanos comportó desechar la idea, dejándose expedito el camino para la configuración de Madrid como Comunidad Autónoma uniprovincial.

Tercera: constituir Madrid en «Comunidad Autónoma uniprovincial», accediendo la provincia de Madrid al autogobierno sin el establecimiento de un régimen previo de preautonomía.

² Los inconvenientes de la institucionalización de un «Madrid Distrito Federal», puestos ya de relieve en su día por Piñar Mañas, *op. cit.*, p. 24, han sido destacados recientemente por Pedro-José González-Trevijano, «El territorio y la organización territorial de la Comunidad de Madrid», Capítulo 3 de la obra colectiva, coordinada por Enrique Arnaldo Alcubilla y José Joaquín Mollinedo Chocano, *Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid*, editados por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comunidad de Madrid, Madrid, 1999, p. 57.

³ Publicado en el *Boletín Oficial del Estado*, núm. 273, de 15 de noviembre de 1978. Las prescripciones del meritado Real Decreto-ley 32/1978 serían complementadas por el Real Decreto 2692/1978, de 31 de octubre, publicado en el propio *Boletín Oficial del Estado*, núm. 273, de 15 de noviembre de 1978.

En esta última línea, el proceso de constitución de la Comunidad de Madrid, previo acuerdo al respecto por parte de la Diputación Provincial de Madrid, se articuló de conformidad con lo dispuesto por el artículo 144.a) de la Constitución, al autorizar las Cortes Generales, mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional, la constitución de una Comunidad Autónoma de ámbito provincial que no reunía las condiciones del apartado 1 del artículo 143.

La autorización legislativa tuvo lugar mediante la Ley Orgánica 6/1982, de 7 de julio⁴, destacando su Preámbulo la singularidad de que en dicha provincia, de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución, reside la capital del Estado. En virtud del artículo 1:

«Se autoriza a la provincia de Madrid, por razones de interés nacional, para constituirse en Comunidad Autónoma.»

El propio Legislador estatal determinaría el procedimiento de constitución de la Comunidad de Madrid, *ex* artículo 2:

«El proceso autonómico iniciado por la Diputación Provincial al amparo de lo previsto en el artículo 143 de la Constitución, se tramitará en la forma establecida por el artículo 146 de la misma y disposiciones concordantes.»

A partir de dichas prescripciones se presentó un primer Proyecto de Estatuto⁵, que caducaría por la conclusión de la Legislatura estatal.

Constituidas las nuevas Cortes Generales tras las elecciones de 28 de octubre de 1982, el Gobierno Socialista remitió al Congreso de los Diputados un nuevo Proyecto de Estatuto, prácticamente reproducción literal del texto caducado⁶. Sobre la base del Informe elaborado por la Ponencia legislativa constituida al efecto⁷, la Comisión Constitucional del Congreso aprobó su Dictamen⁸. El Pleno del Congreso procedería al debate y votación del Dictamen de la Comisión en su sesión de 25 de enero de 1983⁹. En el trámite en el Senado el texto del Dictamen de la Comisión de Autonomías, Organización y Administración Territorial sería aprobado por el Pleno en su sesión del día 17 de febrero de 1983, con diversas enmiendas respecto del remitido por el Congreso¹⁰. El Congreso de los Diputados volvería a con-

⁴ Cfr. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 173, de 21 de julio de 1982.

⁵ El Proyecto de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid fue publicado en el *Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso*, Serie H, núm. 100-I, de 31 de agosto de 1982.

⁶ Su texto fue objeto de publicación en el *Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso*, Serie H, núm. 5-I, de 3 de diciembre de 1982.

⁷ El Informe de la Ponencia se reproduce en el *Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso*, Serie H, núm. 5-I-1, de 15 de enero de 1983.

⁸ El Dictamen de la Comisión fue publicado en el *Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso*, Serie H, núm. 5-II, de 24 de enero de 1983.

⁹ El texto aprobado se insertó en el *Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso*, Serie H, núm. 5-III, de 29 de enero de 1983.

¹⁰ Resultó publicado en el *Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado*, Serie II, núm. 2(e), de 22 de febrero de 1983.

siderar el texto del Proyecto en su sesión de fecha 22 de febrero de 1983, procediendo a la aprobación de todas las enmiendas introducidas por el Senado y a la ulterior aprobación definitiva del Estatuto¹¹.

Quedó así aprobado el texto del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid mediante la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero¹², surgiendo lo que, certeramente, García de Enterría y Martínez-Carande ha definido como «una Comunidad Autónoma particular, quizá la que exhibe un cortejo de títulos históricos de menor entidad, pero no por eso la que puede invocar en su favor menos razones objetivas»¹³.

El vigente artículo 1 del Estatuto, en su apartado 1, sintetiza el hecho diferencial en que se basa la voluntad fundadora de esta «Comunidad Autónoma particular»:

*«Madrid, en expresión del interés nacional y de sus peculiares características sociales, económicas, históricas y administrativas, en el ejercicio del derecho a la autonomía que la Constitución española reconoce y garantiza, es una Comunidad Autónoma que organiza su autogobierno de conformidad con la Constitución española y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica»*¹⁴.

El meritado cuerpo legal estatal constituye la norma institucional básica en vigor, con las cuatro modificaciones introducidas en orden a ampliar el ámbito competencial de la Comunidad:

- Primero, por la Ley Orgánica 2/1991, de 13 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid¹⁵. Esta reforma es consecuencia de la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, operada por la Ley Orgánica 8/1991, de 13 de marzo. La reforma, resultado del acuerdo adoptado por los principales partidos de ámbito nacional para permitir una racionalización de los procesos electorales, habilita la celebración simultánea de las elecciones autonómicas y municipales, introduciendo

¹¹ La versión definitiva del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid figura en el *Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso*, Serie H, núm. 5-V, de 1 de marzo de 1983.

¹² Cfr. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 51, de 1 de marzo de 1983.

Sobre la posición del Estatuto de Autonomía es obligado remitirse a la monografía de César Aguado Renedo, *El Estatuto de Autonomía y su posición en el ordenamiento jurídico*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1996, con la amplia bibliografía allí considerada.

¹³ Cfr. García de Enterría y Martínez-Carande, en el Prólogo a la obra colectiva *Madrid, Comunidad Autónoma Metropolitana*, op. cit., pp. 12 y 13.

¹⁴ La redacción del precepto transcrito es la introducida por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, ulteriormente citada en el cuerpo del estudio. El texto originario, mucho más lacónico, se limitaba a afirmar lo que sigue: «El pueblo de Madrid, de acuerdo con la voluntad manifestada por sus legítimos representantes en el ejercicio del derecho de autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco del Estado español, que expresa la unidad indisoluble de la nación española.».

Sobre el hecho diferencial madrileño y las peculiaridades que justifican la constitución de la Comunidad Autónoma, véase Tomás Ramón Fernández Rodríguez, «El principio jurídico y político de autonomía en la Comunidad de Madrid», Capítulo 1 de la obra colectiva *Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid*, op. cit., pp. 1 a 15.

¹⁵ El texto fue publicado en el *Boletín Oficial del Estado*, núm. 63, de 14 de marzo de 1991.

do una nueva redacción del apartado 5 del artículo 11 del Estatuto —actual art. 10.7—, en mérito de la cual las elecciones tendrán lugar el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años.

- Segundo, por la Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo¹⁶, que reformó los artículos 26, 27, 28 y 30 de la norma institucional básica, derogando su artículo 31. La reforma tuvo por objeto incorporar al Estatuto las competencias que previamente habían sido transferidas, ex artículo 150.2 de la Constitución, por la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución.
- Tercero, por la Ley 33/1997, de 4 de agosto¹⁷. Esta Ley procedió a la modificación de la Disposición Adicional Primera del Estatuto, en la que se establece la cesión a la Comunidad de Madrid del rendimiento total o parcial de los tributos señalados. Ha de tenerse en cuenta que, conforme al apartado 2 de la meritada Adicional: *«El contenido de esta disposición se podrá modificar mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que será tramitado por el Gobierno como proyecto de ley. A estos efectos, la modificación de la presente disposición no se considerará modificación del Estatuto.»* Prescripción que explica que la reforma no tuviera lugar mediante Ley Orgánica.
- Por último, la modificación más intensa, hasta el punto de que podría calificarse de «reforma global del Estatuto», operada por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio¹⁸, la cual afectó a un elevado número de sus preceptos.

1.2. La configuración institucional de la Asamblea de Madrid

La Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en su vigente redacción, a partir del modelo institucional diseñado por el artículo 152.1 de la Constitución, establece en su artículo 8:

*«Los poderes de la Comunidad de Madrid se ejercen a través de sus instituciones de autogobierno: la Asamblea, el Gobierno y el Presidente de la Comunidad»*¹⁹.

¹⁶ Cfr. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 72, de 25 de marzo de 1994; corrección de errores en el ulterior *Boletín Oficial*, núm. 90, de 15 de abril.

¹⁷ Cfr. *Boletín Oficial del Estado* de 5 de agosto de 1997.

¹⁸ Cfr. *Boletín Oficial del Estado* de 8 de julio de 1998.

¹⁹ La redacción del precepto reproducido se corresponde con la introducida por la ya citada Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, coincidente prácticamente *ad pedem literae* con el artículo 8.1 originario.

Configurada así por la norma institucional básica la estructura de las instituciones de autogobierno, el artículo 9 del Estatuto²⁰ —que principia la regulación efectuada por el Capítulo Primero, «De la Asamblea de Madrid», del Título I, «De la Organización Institucional de la Comunidad de Madrid»—, establece, en primer lugar, la posición de la Asamblea de Madrid en el entramado institucional diseñado, confiriéndole un rol central, al definirla como órgano representativo del pueblo de Madrid, y concreta, a continuación, las funciones de la Cámara, atribuyéndole el ejercicio de la potestad legislativa de la Comunidad, la aprobación y el control de sus Presupuestos, el impulso, orientación y control de la acción del Gobierno, así como el ejercicio de las demás competencias que le atribuyen la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico.

No puede olvidarse, aunque se trate de un mero apunte técnico vaciado de contenido por la praxis, que las previsiones estatutarias son fruto del proceso de mimetismo que, en las diecisiete Comunidades Autónomas que dentro del marco constitucional coexisten en el Estado español —con proyección, incluso, para los supuestos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla—, ha erigido en modelo uniforme el esquema institucional de autogobierno previsto en el apartado 1 del artículo 152 de la Constitución²¹, con el consecuente establecimiento generalizado de una Asamblea Legislativa²².

²⁰ Precepto redactado en virtud de la reforma operada por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, que coincide casi en términos literales con el tenor del originario artículo 9 del Estatuto, y cuyo texto es el que sigue: «La Asamblea representa al pueblo de Madrid, ejerce la potestad legislativa de la Comunidad, aprueba y controla el Presupuesto de la Comunidad, impulsa, orienta y controla la acción del Gobierno y ejerce las demás competencias que le atribuyen la Constitución, el presente Estatuto y el resto del ordenamiento jurídico.»

²¹ Debe destacarse que la articulación uniforme de la organización institucional en todas las Comunidades Autónomas responde a la adopción del criterio reflejado en las recomendaciones del «Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías», de 19 de mayo de 1981 —Comisión que, presidida por Eduardo García de Enterría y Martínez-Carande, estuvo, además, integrada por los profesores Luis Cosculluela Montaner, Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Santiago Muñoz Machado (Secretario de la Comisión), Tomás Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, Miguel Sánchez Morón (Vicesecretario de la Comisión) y Francisco Sosa Wagner—; publicado por el Servicio Central de Publicaciones de la Presidencia del Gobierno, colección «Informe», núm. 32, 4.ª ed., Madrid, 1982; respecto de las cuestiones anteriormente apuntadas véanse sus pp. 24 a 29, y 101 y 102.

El precitado Informe fue complementado con las propuestas elaboradas en materias económicas y financieras recogidas en el «Informe de la Comisión de Expertos sobre financiación de las Comunidades Autónomas», publicado en la citada colección «Informe», núm. 34; por su parte, en el núm. 36 de la misma se publicaron los ulteriores «Acuerdos Autonómicos».

Vid., por todos, en relación con el Informe de la denominada «Comisión Enterría» y con los Pactos subsiguientes, los comentarios de Santiago Muñoz Machado, en su capital obra *Derecho Público de las Comunidades Autónomas*, t. I, Editorial Civitas, S. A., Madrid, 1982, pp. 143 a 153.

²² Al respecto, véase el «Estudio Preliminar: La consolidación de las Instituciones representativas de las Comunidades Autónomas», de la obra de Alfonso Arévalo Gutiérrez, Almudena Marazuela Bermejo y Ana del Pino Carazo, *Los reglamentos de los Parlamentos autonómicos*, editada por el Centro de Estudios Constitucionales y el Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2001, pp. 27 a 83.

El meritado esquema institucional, empero, conforme se deduce del tenor literal del precepto constitucional²³, no estaba inicialmente pensado para ser aplicado a las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos de Autonomía no fueran aprobados por el procedimiento del artículo 151, esto es, para las denominadas Comunidades Autónomas de régimen general. Puede afirmarse, en efecto, que nos encontramos ante un supuesto nítido de mutación constitucional operada, de modo ostensible y deliberado, en virtud de los Pactos Autonómicos de 31 de julio de 1981²⁴.

Lo cierto es, como ha ocurrido con múltiples aspectos relativos al desarrollo del Título VIII de la Constitución española, que las exigencias derivadas de la articulación política del denominado «Estado de las Autonomías» primaron sobre las consideraciones técnico-jurídicas, y las Cortes regionales se encuentran ya en la recta final de su V Legislatura, iniciada tras los comicios electorales celebrados el día 13 de junio de 1999.

Prácticamente veinte años, en efecto, han transcurrido ya desde que —disipadas las propias dudas iniciales sobre la ubicación de la provincia de Madrid en el mapa autonómico e iniciado el peculiar proceso de acceso directo a la autonomía a partir de la anteriormente referida Ley Orgánica 6/1982, de 7 de julio, por la que se autoriza la constitución de la Comunidad de Madrid—, la Asamblea de Madrid celebrara su sesión constitutiva, el día 8 de junio de 1983, en el incomparable marco del Paraninfo de la Universidad Complutense; Paraninfo al cual, por cierto, se vio avocada a retornar en alguna que otra ocasión, «por exigencias del guión», hasta su definitivo traslado, en el verano de 1998, desde el «Caserón de San Bernardo» y a la conclusión de las obras de su actual ubicación —cuya efectiva realización tanto debe a la eficaz gestión de la Letrada D.^a Almudena Marazuela— en el madrileño barrio de Vallecas, dando nombre a la nueva Plaza de la Asamblea de Madrid.

Sin duda, resulta oportuno efectuar un análisis de la actividad desarrollada por la Asamblea autonómica, especialmente si se tiene en cuenta la escasa, por no decir nula, atención que la misma ha suscitado en la doctrina científica²⁵.

²³ El tenor literal de su inciso inicial, en efecto, es el que sigue: «En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior (es decir, el 151) la organización institucional autonómica se basará [...]».

²⁴ Véanse, al respecto, las acertadas consideraciones formuladas por Juan Alfonso Santamaría Pastor, destacando la dualidad interpretativa del precepto constitucional en términos técnicos y en términos políticos, primero en las «Lecciones de Derecho Administrativo» de la Cátedra de García de Enterría relativas a «Las Administraciones Territoriales. La Administración Institucional», editadas por la Sección de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1982, pp. 27 a 29; y, posteriormente, tanto en sus *Fundamentos de Derecho Administrativo*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S. A., Madrid, 1988, pp. 508 y 1083 a 1087, como en sus *Principios de Derecho Administrativo*, 2.^a ed., noviembre 1998, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S. A., Madrid, pp. 494 a 497.

²⁵ Cabe destacar, no obstante, el minucioso análisis de conjunto elaborado durante el transcurso de la I Legislatura por Fernando Sáinz Moreno, «La Asamblea de Madrid», en el colectivo coordinado por Rafael Gómez-Ferrer Morant, *Estudios sobre el Derecho de la Comunidad de Madrid*, pp. 23 a 75, Editorial Civitas S. A., Madrid, 1987, el cual, basado en una perspectiva predominantemente jurídi-

Lo anterior llama especialmente la atención si se tienen presentes tres circunstancias:

Primera, conforme ha destacado López Guerra, el hecho de que en la Comunidad de Madrid las peculiares condiciones políticas en que se desarro-

co-formal, analiza el período comprendido desde su constitución, en junio de 1983, hasta el 31 de diciembre de 1986.

Con un alcance descriptivo y referido ya a la situación vigente a partir de la aprobación del nuevo Reglamento de la Cámara —el 31 de enero de 1997—, puede consultarse Mollinedo Chocano, en el Capítulo 8, «La Asamblea de Madrid. Organización y funcionamiento», de la obra colectiva, anteriormente citada, *Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid*, pp. 131 a 160. Del propio autor, «Las peculiaridades del control parlamentario en la Asamblea de Madrid», en la obra colectiva, coordinada por Ascensión Elvira Perales y María Dolores González Ayala, *Nuevos retos del control parlamentario: Comunidades Autónomas y Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp. 33 a 44. En esta misma obra se recoge, asimismo, un interesante «Debate» sobre las peculiaridades del control parlamentario en las Comunidades Autónomas, moderado por González Ayala y muy centrado en el caso de la Asamblea de Madrid, en el que se reproducen las intervenciones de Blanco Valdés, Trujillo Rincón, Vintró Castell, Arévalo Gutiérrez, Belda, Villanueva González, Álvarez Durante, Sanz Arranz, Astarloa Huarte-Mendicoa y Aguiar de Luque, pp. 129 a 205.

La revista *Asamblea* ha intentado paliar desde su fundación esta laguna, configurando un epígrafe específico «Crónica de Actividad Parlamentaria» en orden a hacer un puntual seguimiento de la actividad de la Cámara que suministre al lector una información ágil y concisa, debidamente sistematizada, de la misma. *Vid.* Arévalo Gutiérrez, «Las leyes de la Asamblea de Madrid», núm. 1, junio 1999, pp. 147 a 188; Arévalo Gutiérrez, «La consolidación de una institución representativa: doce años de andadura de la Asamblea de Madrid (1983-1995)», núm. 2, diciembre 1999, pp. 191 a 225; Arévalo Gutiérrez, «La IV Legislatura de la Asamblea de Madrid», núm. 3, junio 2000, pp. 181 a 204; Arévalo Gutiérrez, «El primer año de la V Legislatura de la Asamblea de Madrid», núm. 4, diciembre 2000, pp. 229 a 253; Esther de Alba Bastarrechea, «La Actividad Parlamentaria del segundo año de la V Legislatura de la Asamblea de Madrid», núm. 5, diciembre 2001, pp. 145 a 173; y Blanca Cid Villagrasa, «Las tácticas parlamentarias del tercer año de la V Legislatura de la Asamblea de Madrid», núm. 6, junio 2002, pp. 157 a 189.

Asimismo, en la propia revista *Asamblea* se contienen diversos trabajos específicos sobre la Asamblea de Madrid de interés. Por un lado, las siguientes «Notas y Dictámenes»: Antonio Lucio Gil, «La Mesa de la Asamblea de Madrid», núm. 1, junio 1999, pp. 69 a 104; Marazuela Bermejo, «El régimen económico y presupuestario de la Asamblea de Madrid», núm. 1, junio 1999, pp. 105 a 143; Marazuela Bermejo, «El régimen económico y presupuestario de la Asamblea de Madrid (II parte)», núm. 2, diciembre 1999, pp. 103 a 138; De Alba Bastarrechea, «El Régimen Jurídico del Personal al servicio de la Asamblea de Madrid», núm. 2, diciembre 1999, pp. 139 a 153; Del Pino Carazo, «Comparecencias ante las Comisiones de la Asamblea de Madrid», núm. 2, diciembre 1999, pp. 155 a 188. De otro, el estudio de Paulina Corominas Etchegaray, «El derecho de petición ante la Asamblea de Madrid», núm. 6, junio 2002, pp. 15 a 24. Por último, cabe hacer referencia a los siguientes trabajos de «Documentación»: Arévalo Gutiérrez, Luis Eduardo González-Santander Gutiérrez y Ángeles Nieto Lozano, «Procesos ante el Tribunal Constitucional contra leyes y actos de la Asamblea de Madrid», núm. 1, junio 1999, pp. 191 a 199; Marazuela Bermejo y Nieto Lozano, «Las Mociones en la Asamblea de Madrid», núm. 3, junio 2000, pp. 207 a 254; González-Santander Gutiérrez, «Los fondos bibliográficos parlamentarios de la Biblioteca de la Asamblea de Madrid: catálogo de monografías», núm. 6, junio 2002, pp. 193 a 318; y Nieto Lozano, Raquel Torres Fernández y Ricardo Sousa Barrera, «Análisis documental de series del Archivo de la Asamblea de Madrid (Parte I)», núm. 6, junio 2002, pp. 319 a 363.

Por otro lado, a efectos documentales, respecto de los datos referidos a la actividad desarrollada en el seno de la Asamblea de Madrid desde 1991, véase *Boletín de Información Parlamentaria*, publicado por la Sección de Biblioteca de la Asamblea de Madrid, especialmente los números que contienen los resúmenes anuales de actividad.

De la misma forma, especial interés reviste la publicación *Memoria de Actividad Parlamentaria* de la Asamblea de Madrid. Los datos que se recogen en el presente trabajo están tomados en su mayoría de dicha publicación.

Desde una perspectiva sociológica resulta también de interés el Capítulo II: «Representación política: diputados y Asamblea», elaborado por Bayón y López Nieto para la obra colectiva *La Comunidad de*

lló la autonomía permiten hablar de «la presencia continuada de un cierto parlamentarismo de consenso, que se manifiesta en formas muy diversas: entre ellas, en una relevancia de la Asamblea poco frecuente en el parlamentarismo autonómico y, más aún, en el parlamentarismo en general»²⁶.

Segunda, el significativo volumen cuantitativo de actividad parlamentaria registrado, especialmente en el ámbito de la fiscalización o control parlamentario; volumen que ha desbordado ampliamente las previsiones más optimistas. Para muestra sirva un botón: el texto originario del Estatuto prescribía, en su artículo 13.4, primer inciso, que «*la Asamblea se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. En el primer supuesto se reunirá durante un máximo de cuatro meses al año, en dos períodos de sesiones, comprendidos entre septiembre y diciembre el primero, y entre febrero y junio el segundo*». Las exigencias de la actividad política determinaron que la prescripción fuera, sin ambages, absolutamente ignorada. El inteligente recurso al que se acudió —un fraude de ley en toda regla—, consistió en interpretar la locución «*durante un máximo de cuatro meses*» como sinónimo de ciento veinte días hábiles distribuidos entre los dos períodos de sesiones estatutariamente dispuestos: es decir, todos los días no feriados de los meses comprendidos entre septiembre y diciembre, primero, y febrero y junio, segundo, con excepción de la última semana de cada mes, declarada inhábil a efectos parlamentarios. Como es imposible poner puertas al campo, la reforma operada por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, procedió a legalizar la práctica, equiparando los períodos de sesiones a los de las Cortes Generales. Así, el vigente artículo 14.1 dispone: «*La Asamblea se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los períodos ordinarios de sesiones serán dos al año: el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio.*» Y todavía en algunos medios de comunicación se realiza, de cuando en cuando, la crítica pueril de la holganza de sus Señorías con semejantes vacaciones parlamentarias, como si la vida de un Parlamento se circunscribiera a la celebración de sesiones (*sic*).

Tercera, y la que mayor relevancia tiene, la trascendencia, desde la óptica jurídico-constitucional, de algunos fenómenos acaecidos en su desarrollo, entre los que, a título de mero ejemplo, pueden destacarse:

- La dinámica de los grupos parlamentarios y, en especial, la del Grupo Mixto durante su II Legislatura —no en balde en los medios de comunicación se llegó a calificar al Parlamento regional como «laboratorio del transfuguismo»—. La referida dinámica, a mayor abundamiento, se encuentra en el origen de la trascendente doctrina constitucional sobre la distribución de puestos en las Comisiones par-

Madrid. *Balance de quince años de experiencia autonómica*, editado por Lourdes López Nieto, Ediciones Istmo, S. A., 1999, pp. 48 a 86.

²⁶ Cfr. Luis López Guerra, «La organización de los poderes públicos autonómicos. La forma de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid», Capítulo 6 de la obra colectiva *Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid*, op. cit., pp. 89 a 103. La cita se recoge de la p. 101, exponiéndose en las pp. 102 y 103 «las peculiares condiciones políticas en que se desarrolló la autonomía madrileña», base del destacado papel de la Asamblea según el autor.

lamentarias y la determinación de las subvenciones de los Grupos Parlamentarios²⁷.

- La distribución del número de Senadores de la Comunidad Autónoma que corresponde proponer a cada Grupo Parlamentario y el procedimiento para su designación que asegure, en todo caso, la adecuada representación proporcional, conforme a lo dispuesto por el artículo 69.5 de la Constitución. La cuestión fue origen, asimismo, de la jurisprudencia constitucional en la materia²⁸.
- La aprobación, sin base estatutaria inicial, de la Ley 5/1990, de 17 de mayo, reguladora de la facultad de disolución de la Asamblea de Madrid por el Presidente de la Comunidad²⁹. La reforma del Estatuto, operada por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, ha venido a convalidar lo dispuesto por la Ley 5/1990, optando el legislador de forma inequívoca por el reconocimiento de la facultad de disolución del Presidente en su artículo 21.
- El peculiar círculo normativo que empezó a trazarse con la aprobación de la Ley 15/1984, de 19 de diciembre, del Fondo de Solidaridad Municipal, conocida también como «Ley del 3 por 100» —habida cuenta de que su contenido normativo básico comportaba la imposición de un recargo de ese porcentaje sobre la cuota líquida del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas que tuvieran su domi-

²⁷ De especial significación, en este sentido, resulta la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional 214/1990, de 20 de diciembre —Ponente: Sr. de la Vega Benayas— (*Boletín Oficial del Estado*, núm. 9, de 10 de enero de 1991), recaída en el recurso de amparo 827/1988, interpuesto por el entonces Diputado de la Asamblea de Madrid (II Legislatura), D. José Luis Ortiz Estévez, contra Acuerdos de la Junta de Portavoces y de la Mesa de la Asamblea de Madrid de 28 de enero y de 2 de febrero de 1988, respectivamente. La meritada Sentencia resolvió la inadmisión del amparo solicitado. Al respecto, *vid.* Arévalo Gutiérrez, González-Santander Gutiérrez y Nieto Lozano, «Procesos ante el Tribunal Constitucional contra leyes y actos de la Asamblea de Madrid», *op. cit.*, pp. 193 y 194.

Con carácter general, aunque el supuesto analizado se refiere específicamente a la IV Legislatura, es provechosa la consulta del «Dictamen de la Secretaría General de la Asamblea de Madrid sobre las repercusiones jurídico-parlamentarias de la creación del Grupo Parlamentario Mixto», publicado por Pablo García Mexía, en el núm. 46 de la *Revista de las Cortes Generales*, Primer Cuatrimestre 1999, con el título de «Problemas jurídico-parlamentarios de la creación de un Grupo Parlamentario Mixto», pp. 189 a 227.

²⁸ Cfr., al respecto, la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional 4/1992, de 13 de enero (*Boletín Oficial del Estado*, núm. 38, de 13 de febrero de 1992), dictada en el recurso de amparo 1724/1991, promovido por el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid, contra los Acuerdos de la Mesa de 8 de julio de 1991 y del Pleno de la misma del día 16 siguiente, relativos a distribución del número de senadores que corresponde a cada Grupo Parlamentario y su designación. La Sentencia denegó el amparo solicitado. Respecto de la misma, *vid.* Arévalo Gutiérrez, González-Santander Gutiérrez y Nieto Lozano, «Procesos ante el Tribunal Constitucional contra leyes y actos de la Asamblea de Madrid», *op. cit.*, p. 194.

²⁹ Sin entrar, en este momento, en la valoración de la norma de referencia, confróntese el reconocimiento efectuado por la misma de la facultad de disolución de la Asamblea de Madrid con los artículos 10.1 y 18.5 del Estatuto de Autonomía, en su redacción originaria, del siguiente tenor literal, respectivamente: «La Asamblea de Madrid es elegida por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara, en el supuesto previsto en el artículo 18.5 del presente Estatuto.», y «Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza de la Asamblea, quedará disuelta, convocándose de inmediato nuevas elecciones.»

- cilio a efectos fiscales en cualquiera de los municipios comprendidos dentro del territorio de la Comunidad de Madrid—, prosiguió con la atípica Ley 4/1985, por la que se suspendió la aplicación de la anterior hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara al respecto, y culminó con la cuadratura del círculo que supuso la Ley 10/1990, de 4 de diciembre, de derogación de la primera —Ley aprobada tras la Sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió el recurso de inconstitucionalidad planteado contra la Ley 15/1984³⁰—.
- El problema no resuelto de la «Ley de Capitalidad»³¹. Es preciso recordar, en efecto, que está pendiente la necesaria articulación de un régimen especial para la villa de Madrid, capital del Estado. Recuérdesse a este respecto que el propio Preámbulo de la meritada Ley Orgánica 6/1982, de 7 de julio, por la que se autoriza la constitución de Madrid como Comunidad Autónoma disponía que la capitalidad «[...] exigirá en el futuro el tratamiento legal adecuado para dar respuesta al especial estatus que concurre en la villa de Madrid»; declaración programática que, en términos prescriptivos, se complementa con lo dispuesto por el artículo 6 del Estatuto de Autonomía, en virtud del cual:

«La villa de Madrid, por su condición de capital del Estado y sede de las Instituciones generales, tendrá un régimen especial, regulado por Ley votada en Cortes. Dicha Ley determinará las relaciones entre las Instituciones estatales, autonómicas y municipales, en el ejercicio de sus respectivas competencias.»

- Algunas opciones cuestionables desde el punto de vista de la técnica legislativa. *Ad exemplum*, cabe citar el recurso generalizado, desde

³⁰ La Sentencia de referencia es la 150/1990, de 4 de octubre (*Boletín Oficial del Estado*, núm. 266, de 6 de noviembre de 1990), dictada en los recursos de inconstitucionalidad acumulados núms. 243 y 257/1985, promovido el primero de ellos por 54 Diputados, representados por el Comisionado D. José María Ruiz Gallardón, y el segundo por el Defensor del Pueblo, contra la Ley de la Asamblea de la Comunidad de Madrid 15/1984, de 19 de diciembre, del Fondo de Solidaridad Municipal de Madrid, cuyo fallo procedió a desestimar los recursos de inconstitucionalidad. Resulta ineludible al considerar la meritada Sentencia hacer referencia a los tres votos particulares formulados por los Magistrados D. Francisco Rubio Llorente, D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer y D. José Gabaldón López, especialmente al primero de ellos, donde el Magistrado disidente, con rotundidad y fértil razonamiento, destacaba la brecha que la decisión de referencia podía abrir sobre la función misma del supremo intérprete de la Constitución, al dejar el juicio de la mayoría del Alto Tribunal «abierta la posibilidad de que todos y cada uno de los dieciocho Cuerpos Legislativos existentes en nuestro país desnaturalicen la función propia de este Tribunal, reintroduciendo (generalizado ya a todo tipo de leyes) el recurso previo, cada vez que la coyuntura política lo haga deseable».

Para una valoración de la Sentencia del Tribunal Constitucional 150/1990 es ineludible la consulta de las consideraciones de María Ángeles Ahumada Ruiz, «Efectos procesales de la modificación legislativa de las leyes sometidas a control de constitucionalidad. La suspensión de leyes “presuntamente” inconstitucionales», en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 11, de 1991 (mayo-agosto), pp. 159 a 185.

³¹ Al respecto véase el planteamiento de Ramón Entrena Cuesta, «La capitalidad de la Comunidad de Madrid», Capítulo 4 de la obra colectiva *Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid*, op. cit., pp. 59 a 69.

1996, a las denominadas «leyes de acompañamiento», que se han convertido en auténticas «leyes anuales de modificación del ordenamiento jurídico autonómico»; la reiterada utilización del expeditivo procedimiento de tramitación de proyectos de ley en lectura única, cerceando el debate entre los grupos parlamentarios; o, con carácter anecdótico, la modificación parcial operada en 1991 del régimen jurídico de «Radio Televisión Madrid» mediante tres leyes puntuales, distintas y separadas, que fueron tramitadas, aprobadas y publicadas oficialmente de forma simultánea³².

- Por último, no puede dejar de destacarse la significativa producción normativa de la Cámara desde el punto de vista cuantitativo³³. El volumen de actividad legislativa, no obstante haber sido una de las últimas Comunidades en constituirse, la sitúa en el panorama comparado sólo detrás del Parlamento de Navarra y del Parlamento de Cataluña: a fecha de 3 de marzo de 2001, de las 3.334 leyes autonómicas aprobadas en el Estado español, 254 —casi un 8 por 100— emanaron de la Asamblea de Madrid³⁴.

La imposibilidad de afrontar *hic et nunc* un análisis exhaustivo de la actividad de la Asamblea de Madrid en su integridad, lo cual, por lo demás, sería más propio de una memoria parlamentaria, nos obliga a centrar nuestra atención en alguno de sus aspectos más relevantes. En el análisis que sigue primaremos los aspectos estructurales, es decir, los que definen la consolidación de la institución representativa como Parlamento autonómico, frente a los estrictamente funcionales, ya reflejados en otras publicaciones institucionales.

II. LA ESTRUCTURA DE LA ASAMBLEA DE MADRID

A semejanza de las restantes Comunidades Autónomas, hay que significar que la estructura de la Asamblea de Madrid no resulta predeterminada por

³² En efecto, el texto originario de la Ley 13/1984, de 30 de junio, de Creación, Organización y Control Parlamentario del Ente Público «Radio Televisión Madrid» (publicado en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 4 de julio de 1984; corrección de errores en el *Boletín Oficial* del siguiente día 12 de julio) fue objeto de modificación parcial por tres leyes que siguieron una tramitación paralela y fueron aprobadas en la misma sesión parlamentaria, resultando editadas todas ellas en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 22 de julio de 1991. En concreto: la Ley 11/1991, de 16 de julio, de modificación del artículo 4.6; la Ley 12/1991, de 16 de julio, de modificación de los artículos 6.2 y 10; y la Ley 13/1991, de 16 de julio, de modificación del artículo 6.1. No ya la legística, sino el sentido común conducen a afirmar la conveniencia de haber procedido aprobando una ley única de modificación de los artículos 4.6, 6.1, 6.2 y 10.

³³ Al respecto, véase Arévalo Gutiérrez, «Las leyes de la Asamblea de Madrid», *op. cit.*

Asimismo, con carácter general, véase Arévalo Gutiérrez, «La fuerza de ley de las leyes emanadas de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas», *Corts. Anuario de Derecho Parlamentario*, núm. 9, 2000, pp. 61 a 113.

³⁴ El dato de referencia lo recojo de Arévalo Gutiérrez, Marazuela Bermejo y Del Pino Carazo, *Los reglamentos de los Parlamentos autonómicos*, *op. cit.*, pp. 66 y 67, en la que se contiene una tabla con precisión en detalle respecto de cada Comunidad Autónoma.

el Estatuto de Autonomía. En efecto, la Ley Orgánica 3/1983, como las respectivas normas institucionales básicas, se limita —en el Capítulo I, «De la Asamblea de Madrid», de su Título I, «De la organización institucional de la Comunidad de Madrid», arts. 9 a 16—, a establecer una serie de prescripciones esenciales, remitiendo al legislador autonómico la concreción de los rasgos definidores de la institución representativa. Empero, en la práctica se ha observado un evidente fenómeno de emulación, el cual ha determinado una considerable —y loable— homogeneidad entre las distintas Comunidades Autónomas³⁵.

2.1. La opción por el modelo unicameral

De la misma forma que las otras dieciséis Comunidades Autónomas que dentro del marco constitucional coexisten en el Estado español, el Parlamento autonómico ha optado por el modelo unicameral³⁶, respondiendo la Cámara autonómica a la singular denominación de «Asamblea de Madrid»³⁷.

La opción por el unicameralismo resulta absolutamente plausible, habida cuenta de que no concurren elementos que justifiquen la existencia de una segunda Cámara autonómica, en cualquiera de sus vertientes.

El artículo 2 del vigente Reglamento —de 1997— ha querido proclamar expresamente la opción, determinando que «*La Asamblea se constituye en Cámara única.*»

La sede de la misma, recuérdese, ha de radicar en la villa de Madrid, en los términos del artículo 5 del Estatuto de Autonomía:

³⁵ Las únicas excepciones, por su carácter especial, la constituyen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, al participar simultáneamente, como bien demuestran las reiteradas referencias normativas que efectúan ambos estatutos, tanto del régimen de la Administración Local como, con alguna que otra limitación esencial —verbigracia, la exclusión de la potestad legislativa—, del propio de un Parlamento autonómico.

³⁶ El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto (*Boletín Oficial del Estado*, núm. 195, de 16 de agosto), es la única norma institucional básica que afirma expresamente dicha opción. Su artículo 18.1 prevé: «*Las Cortes de Aragón tendrán carácter unicameral [...].*»

³⁷ La uniformidad estructural no se ha correspondido, sin embargo, con la homogeneidad nominal. Así, la denominación de Asamblea Legislativa que preveía la Constitución tan sólo se mantiene, de forma parcial, en dos Comunidades: Extremadura —Asamblea de Extremadura— y la Región de Murcia —Asamblea Regional de Murcia—, habiendo sido recientemente abandonada en el caso cántabro la denominación anterior de Asamblea Regional de Cantabria, sustituida a raíz de la última reforma estatutaria. Otras cuatro Comunidades Autónomas han preferido la singular denominación, propia de nuestra tradición histórica, de Cortes: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. La denominación más extendida es la de Parlamento, acogida por las Comunidades de Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja —tras abandonar la que hasta ahora mantenía en exclusiva: Diputación General—, y el País Vasco. A estas ocho Comunidades debe añadirse la Comunidad Foral de Navarra, habida cuenta de que si bien su regulación principia con la rúbrica de «Cortes o Parlamento», el articulado utiliza esta segunda fórmula. Finalmente, resta como singular la opción adoptada por el Principado de Asturias, en el que la institución representativa responde a la locución «Junta General». Por su parte, las instituciones representativas de Ceuta y Melilla comparten la denominación específica de Asamblea de la Ciudad Autónoma.

«La capital de la Comunidad, sede de sus instituciones, es la villa de Madrid, pudiendo sus organismos, servicios y dependencias localizarse en otros municipios del territorio de la Comunidad, de acuerdo con criterios de descentralización, desconcentración y coordinación de funciones.»

De otra parte, puede afirmarse que es indudable que la coexistencia en la Villa y Corte del aparato estatal y, concretamente, de las Cortes Generales, parece aconsejar que la institución representativa del pueblo de Madrid tenga un *nomen iuris* más gráfico, en el sentido de permitir conectar a la ciudadanía con la esencia de su Institución representativa. Ciertamente, *hic et nunc*, la vigente denominación no ha calado en el pueblo de Madrid, razón por la cual no parece exagerado abogar por su modificación en una futura reforma del Estatuto —en la línea, por cierto, que ya han registrado otras Comunidades Autónomas, como Cantabria y La Rioja—, optando por la denominación de «Parlamento de Madrid».

2.2. La composición política de la Cámara

En primer lugar, hay que destacar que el Estatuto de Autonomía, conforme a lo que constituye regla general en el panorama comparado³⁸, no establece una cifra tasada de componentes de la Asamblea de Madrid, limi-

³⁸ En efecto, los Estatutos de autonomía no establecieron una cifra tasada y fija de componentes de sus Asambleas legislativas, limitándose a establecer un número provisional para las primeras elecciones y a remitir a una ley electoral ulterior propia la determinación del número definitivo de Diputados que habrían de integrar la Cámara; o bien, de modo parejo al modelo seguido por la Constitución respecto de la composición del Congreso, determinan un mínimo y un máximo de miembros que deben integrar la Cámara: de 60 a 80 para el caso del Parlamento de Galicia (art. 11.5 del Estatuto); de 90 a 110 en el caso del Parlamento de Andalucía (art. 26.2 del Estatuto); entre 35 y 45 para la Junta General del Principado de Asturias (art. 25.2 de su Estatuto) y el Parlamento de Cantabria (art. 10.4 del Estatuto); algo menor es el margen de representantes, de 32 a 40, dispuesto para el Parlamento de La Rioja por el Estatuto de Autonomía de La Rioja, en su artículo 17.2; de 45 a 55 Diputados pueden constituir la Asamblea Regional de Murcia (art. 24.2 de su Estatuto); 75 a 100 las Cortes Valencianas (art. 12.1 del Estatuto); 60 a 75 las Cortes de Aragón (art. 19 de su Estatuto); 47 a 59 las Cortes de Castilla-La Mancha (art. 10.2 del Estatuto); de 50 a 70 el Parlamento de Canarias (art. 9.3 del Estatuto); y entre 40 y 60 miembros fija como márgenes para el Parlamento de Navarra la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en el artículo 15.2. De forma parcialmente análoga, el Estatuto de Autonomía de Extremadura, en el artículo 27.1, se limita a determinar simplemente el número máximo de Diputados que pueden componer la Asamblea de Extremadura: 65, silenciando toda referencia al posible número inferior.

En general, la cifra exacta de Diputados componentes se acota en virtud de lo que disponen las correspondientes leyes electorales, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población. La excepción a este esquema se encuentra en el País Vasco, para cuyo Parlamento el Estatuto (art. 26.1) determina un número fijo de Diputados: 75, correspondiendo por igual la elección de 25 representantes a cada uno de los Territorios Históricos.

En la actualidad el número de miembros oscila, de acuerdo con las normas electorales de cada Comunidad, entre los 33 Diputados del Parlamento de La Rioja, o los 39 del Parlamento de Cantabria, que serían los Parlamentos con menor número de representantes, hasta los más numerosos, como el Parlamento de Andalucía, integrado por 109 Diputados, o los 135 representantes del Parlamento de Cataluña.

Finalmente, para los casos de las Asambleas de las Ciudades Autónomas el número de Diputados miembros es fijo, cifrándose en ambos supuestos en los 25 Diputados (*vid.* al efecto los arts. 7 del

tándose a remitir a una ley electoral propia la determinación del número de Diputados que integrarán la Cámara; número que se establece genéricamente en el Estatuto, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población. En concreto, el primer inciso de su artículo 10.2 —a semejanza de lo que constituía la prescripción única de dicho precepto y apartado en el texto originario— dispone:

«La Asamblea estará compuesta por un Diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población.»

En función del meritado criterio, y de acuerdo con los datos actualizados del censo de población —en los términos que ulteriormente se especifican— la Asamblea de Madrid ha estado conformada por el siguiente número de Diputados:

- I Legislatura: 94;
- II Legislatura: 96;
- III Legislatura: 101;
- IV Legislatura: 103, y
- V Legislatura: 102.

Presupuesta la exigencia establecida para constituir un Grupo Parlamentario de que concurra un número no inferior a cinco Diputados —tanto en el artículo 21.1 del Reglamento de 1984 como en el artículo 36 del vigente Reglamento—, salvo en la II Legislatura —conformada *ab initio* por cuatro Grupos, a los que se añadió durante su desarrollo un quinto Grupo Mixto—, en las demás los resultados electorales han ofrecido un Parlamento integrado por tres Grupos Parlamentarios, habiéndose registrado en tres ocasiones —I, IV y V Legislaturas— una situación de mayoría absoluta. No puede dejar de indicarse, por último, que también durante la I y IV Legislaturas se constituyó un Grupo Mixto³⁹.

Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta y 3 del Reglamento de su Asamblea, y arts. 7 del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla y 3 del Reglamento Orgánico de la Ciudad de Melilla).

Presupuesto lo anterior, el total de Diputados de cada Parlamento es el que sigue en la actualidad: Parlamento de Andalucía, 109; Cortes de Aragón, 67; Junta General del Principado de Asturias, 45; Parlamento de Canarias, 60; Parlamento de Cantabria, 39; Cortes de Castilla-La Mancha, 47; Cortes de Castilla y León, 84; Parlamento de Cataluña, 135; Asamblea de Extremadura, 65; Parlamento de Galicia, 75; Parlamento de las Islas Baleares, 59; Asamblea de Madrid, 102; Asamblea Regional de Murcia, 45; Parlamento de Navarra, 50; Parlamento de La Rioja, 33; Cortes Valencianas, 89; y Parlamento Vasco, 75. Por su parte, como arriba también indicamos, son 25 los Diputados de las Asambleas de Ceuta y Melilla.

³⁹ Respecto de la situación en la IV Legislatura, véase García Mexía, «Problemas jurídico-parlamentarios de la creación de un Grupo Parlamentario Mixto», en el núm. 46 de la *Revista de las Cortes Generales*, *op. cit.*.

2.3. La elección de la Cámara: el sistema electoral⁴⁰

2.3.1. *El régimen electoral de la Comunidad de Madrid: la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid*

El artículo 152.1 de la Constitución tan sólo determina que la Asamblea Legislativa será «[...] elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las distintas zonas del territorio, [...]».

Por su parte, y en plena coherencia con esa homogeneidad inicialmente apuntada, el Estatuto de la Comunidad de Madrid se limita a completar tan lacónica prescripción, adoptando el sistema definido para las elecciones al Congreso de los Diputados, y remitiendo a una ley electoral propia su concreción, debiendo destacarse las prescripciones del vigente artículo 10 —de las que ulteriormente se hace mérito—, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, coincidentes en su sustancia con los del texto de 1983.

En mérito del artículo 10.4 del Estatuto —el cual amplía la remisión que, referida al procedimiento electoral a seguir, efectuaba el originario artículo 11.3—:

«Una ley de la Asamblea regulará las elecciones, que serán convocadas por el Presidente de la Comunidad, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto.»

Presupuestas las prescripciones estatutarias, y de conformidad con las condiciones básicas fijadas por el Estado —recuérdese que el Título I de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, establece las «Disposiciones comunes a todas las elecciones»—, la Comunidad, al amparo de lo dispuesto por el reproducido artículo 10.4 de su Estatuto, se ha dotado de su propia Ley electoral: la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid⁴¹.

Conforme se explicita en la Exposición de Motivos —debería decir «Preámbulo»— de la Ley 11/1986, concretamente en los párrafos segundo, tercero y cuarto de su apartado I:

«La presente Ley viene, pues, a cumplir el mandato del Estatuto dentro del marco legal que, tanto el propio Estatuto como la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establecen.

El criterio seguido, a la vista de la Disposición Adicional primera de la citada Ley Orgánica, ha sido el de mantener una gran economía normativa, es decir, el criterio de sólo regular aquellos aspectos estrictamente necesarios, derivados del carácter y ámbito de

⁴⁰ Al respecto, Arnaldo Alcubilla, «El régimen electoral de la Comunidad de Madrid», Capítulo 7 de la obra colectiva, ya citada, *Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid*, pp. 105 a 130.

⁴¹ Cfr. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, núm. 306, de 26 de diciembre de 1986; con corrección de errores en el *Boletín Oficial*, núm. 5, de 7 de enero de 1987.

las Elecciones a la Asamblea de Madrid, dejando que en todo lo demás se apliquen los preceptos de la Ley Orgánica 5/1985, que la mencionada Disposición Adicional declara supletorios.

Ello permite que la presente Ley Electoral sea breve y mantenga una homogeneidad con la legislación estatal y con la de otras Comunidades Autónomas —en este mismo sentido se ha de hacer constar que se han tenido en cuenta las soluciones aportadas por la legislación electoral aprobada hasta el momento por las demás Comunidades—, lo que habrá de redundar en la simplicidad y facilidad de interpretación y aplicación de esta Ley.»

La disposición de referencia ha sido objeto de diversas modificaciones parciales, operadas, en concreto, mediante:

- Ley 4/1991, de 21 de marzo, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid⁴². Por medio de la misma, aprobada a punto de culminar la II Legislatura, se procedió a la modificación de los artículos 8.1 y 2 y 17.1 del texto originario.
- Ley 5/1995, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid⁴³. Esta Ley, aprobada en el tramo final de la III Legislatura, procedió a dar nueva redacción a los artículos 8.1 y 2, 11.2, inciso final del artículo 14.3 y artículo 21.3. Asimismo, añadió un nuevo apartado, el 4, al artículo 21.
- Ley 15/1995, de 21 de abril, de modificación del artículo 5 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid⁴⁴. Esta Ley, penúltima de las aprobadas durante la III Legislatura, procedió en su artículo único a modificar el artículo 5 del texto originario, en materia de incompatibilidades; un precepto que desde este momento no ha dejado de sufrir «retoques», siendo objeto de todas las modificaciones ulteriores de la Ley.
- Ley 12/1998, de 9 de julio, por la que se modifica el artículo 5 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid⁴⁵. La considerada Ley, aprobada durante la IV Legislatura, modificó de nuevo el artículo 5, añadiendo los números 4.º, 5.º, 6.º y 7.º.
- Ley 24/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas⁴⁶. Ya en la V Legislatura, y a través del siempre cuestionable recurso a la denominada «Ley de acompañamiento», el artículo 14

⁴² Cfr. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, núm. 71, de 25 de marzo de 1991.

⁴³ Cfr. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, núm. 76, de 30 de marzo de 1995; con corrección de errores en el ulterior *Boletín Oficial*, núm. 93, de 20 de abril.

⁴⁴ Cfr. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, núm. 105, de 4 de mayo de 1995.

⁴⁵ Cfr. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, núm. 164, de 13 de julio de 1998; con corrección de errores en el posterior *Boletín Oficial*, núm. 191, de 13 de agosto.

⁴⁶ Cfr. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, núm. 309, de 30 de diciembre de 1999; con corrección de errores en el *Boletín Oficial*, núm. 31, de 7 de febrero de 2000.

de la misma estableció una nueva redacción del artículo 5.2.b) de la Ley 11/1986.

- Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas⁴⁷. De nuevo en la vigente V Legislatura y, asimismo, a través de la «Ley de acompañamiento» —art. 13.Dos—, se reformó el artículo 5, concretamente el número 10.º de su apartado 2.c). La propia Ley, en su artículo 13.Uno procede a la supresión de la causa de inelegibilidad establecida en su artículo 3.2.d).

Las meritadas prescripciones han de ser complementadas con lo dispuesto por el Decreto 17/1987, de 9 de abril, por el que se regulan las condiciones materiales y aquellos otros aspectos necesarios para la celebración de Elecciones a la Asamblea de Madrid⁴⁸. El mismo fue objeto de modificación por el Decreto 186/1998, de 29 de octubre⁴⁹.

2.3.2. La configuración del Derecho de sufragio

El sufragio, de acuerdo con los postulados de un Estado democrático basado en el valor superior del pluralismo político y en los principios de temporalidad y de libre competencia por el poder público, es, conforme al modelo afirmado en todas las Comunidades Autónomas⁵⁰, universal, libre, igual, directo y secreto, conforme establece el artículo 10.1 del Estatuto.

El derecho de sufragio activo, de acuerdo con el criterio generalizado, se atribuye a los mayores de dieciocho años que estén en pleno uso de sus derechos políticos y que tengan la condición de residente en cualquiera de los municipios de la Comunidad, condición que nuestro Estatuto impone también para ser elegible⁵¹. Así lo establece el vigente artículo 10.8 del Estatuto —como originariamente hacía el artículo 11.6—, del siguiente tenor:

«Serán electores y elegibles todos los madrileños mayores de dieciocho años de edad que estén en pleno goce de sus derechos políticos. La Comunidad Autónoma facilitará

⁴⁷ Cfr. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, núm. 308, de 28 de diciembre de 2001.

⁴⁸ Cfr. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 10 de abril de 1987, con corrección de errores en el posterior *Boletín Oficial* de 20 de abril.

⁴⁹ Cfr. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 11 de noviembre de 1998.

⁵⁰ Vid. artículos 26.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; 18.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón; 25.1 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; 10.1 del Estatuto de Autonomía de Cantabria; 10.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha; 31.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña; 21.1 del Estatuto de Autonomía de Extremadura; 11.1 del Estatuto de Autonomía de Galicia; 24.1 Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia; 15.1 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra; 17.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja; 26.1, *in fine*, del Estatuto de Autonomía del País Vasco; 71 del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta; y 71 del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla.

⁵¹ *Ad exemplum*, artículos 28.4 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; 10.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón; 21.3 del Estatuto de Autonomía de Extremadura; 21 y 22 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares; y 18.8 del Estatuto de Autonomía de La Rioja.

La inclusión del requisito de la vecindad dio lugar a dos recursos de amparo electorales en los que el Tribunal Constitucional terminó concluyendo, en su Sentencia 60/1987, de 20 de mayo (*Boletín Oficial del Estado*, núm. 134, de 5 de junio) que, si ciertamente la Ley Electoral extremeña, en conexión con el artículo 22.3 del Estatuto de Autonomía de dicha Comunidad, «introduce un trato diferente a efectos del ejercicio del derecho de sufragio pasivo para quienes tienen la condición de extremeños y el resto de los

el ejercicio del derecho de voto a los madrileños que se encuentren fuera de la Comunidad de Madrid.»

La Ley 11/1986 dedica a la disciplina del «derecho de sufragio» su Capítulo I, artículos 2 a 4, constituyendo el núcleo de su regulación la disciplina de las causas de inelegibilidad, de las que ulteriormente me ocupo.

2.3.3. *La circunscripción electoral*

La determinación de la circunscripción electoral no responde en el panorama comparado a un criterio uniforme⁵².

En la Comunidad de Madrid queda fijada sobre la unidad administrativa de la provincia. Así lo dispone taxativamente el artículo 10.5 de su Estatuto de Autonomía:

«La circunscripción electoral es la provincia.»

Por su parte, el artículo 18.1 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, establece:

«La circunscripción electoral es la Comunidad de Madrid.»

ciudadanos españoles que no la ostente, no es menos cierto, sin embargo, que tal diferenciación no puede hacerse equivaler a la discriminación que la Constitución prohíbe en su art. 23.2, pues, de conformidad con la constante doctrina de este Tribunal, las singularizaciones normativas no merecen tal reproche cuando muestran un fundamento razonable, atendido al criterio adoptado para la diferenciación y la finalidad perseguida. En efecto, no cabe descalificar como desprovista de razonabilidad la exigencia de que quienes aspiran a acceder a cargo público de Diputado de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Extremadura tengan la condición política de extremeño, ya que esta exigencia resulta justificada teniendo en cuenta la finalidad perseguida por la Ley 2/1987, de procurar una cierta homogeneidad de intereses en el ámbito de la Comunidad Autónoma entre el Cuerpo Electoral y aquellos que ante él se proponen como candidatos».

Poco después, en la Sentencia 107/1990, de 6 de junio (*Boletín Oficial del Estado*, núm. 160, de 5 de julio), el Supremo intérprete constitucional volvía a reconocer, esta vez a vueltas con la Ley electoral andaluza, que la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejercicio de la competencia contemplada en su Estatuto de Autonomía, podía «legislar sobre las normas electorales para la constitución de sus instituciones de autogobierno. Por ello, el mencionado requisito adicional para ostentar el derecho de sufragio activo y pasivo previsto en la Ley de Andalucía 1/1986 es de indudable aplicación a los integrantes de las candidaturas del partido recurrente».

Sobre el particular, *vid.* el planteamiento de Arnaldo Alcubilla, «El régimen electoral de la Comunidad de Madrid», *op. cit.*, pp. 114 a 117, con la bibliografía allí citada. Asimismo, Emilio Pajares Compostizo, «La condición política y el estatuto jurídico de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid», Capítulo 5 de la obra colectiva, ya citada, *Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid*, específicamente pp. 77 a 83.

⁵² Como régimen general se ha impuesto la provincia, bajo esta denominación (arts. 28.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; 18.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón; 10.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha; 11.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-León; 21.2 del Estatuto de Autonomía de Extremadura; y 11.4 del Estatuto de Autonomía de Galicia), o el territorio histórico que adopta el artículo 26.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco en solitario; o, tratándose de las Comunidades uniprovinciales, la Comunidad Autónoma (arts. 10.2 del Estatuto de Autonomía de Cantabria y 17.3 del Estatuto de Autonomía de La Rioja). Otras han sido, por razones obvias, las delimitaciones que han imperado en los territorios insulares (art. 9.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias), y en las Ciudades Autónomas (arts. 7.2 del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta y 8.2 del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla).

2.3.4. La Legislatura: caducidad de los asuntos pendientes de sustanciación

De la misma forma que en los demás Estatutos de Autonomía⁵³, se establece la duración de la Legislatura en un período de cuatro años. Así lo determina el artículo 10.1, en su primer inciso, del Estatuto de Autonomía: «La Asamblea es elegida por cuatro años [...]»; reiterándolo respecto del *status* de los parlamentarios el artículo 10.2, en su inciso final: «El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara en los supuestos previstos en este Estatuto.»

Dicha prescripción se complementa con lo dispuesto por el propio artículo 10, en su apartado 7:

«Las elecciones tendrán lugar el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años, en los términos previstos en la Ley Orgánica que regule el Régimen Electoral General. La sesión constitutiva de la Asamblea tendrá lugar dentro de los veinticinco días siguientes a la proclamación de los resultados electorales.»

El efecto fundamental de la conclusión del mandato parlamentario, por lo que respecta a los asuntos pendientes de sustanciación en la Asamblea, es, como regla general, la caducidad de los mismos. El vigente Reglamento, de 31 de enero de 1997, así lo determina expresamente en su Título XXII y último, «De los asuntos en trámite a la terminación del mandato de la Asamblea», artículos 244 y 245.

La meritada regla general, así como sus excepciones, se establecen en el primero de los preceptos citados, del siguiente tenor:

«Artículo 244. Extinguido el mandato, al caducar el plazo o disolverse la Asamblea, quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara, con las siguientes excepciones:

a) Aquellos de los que, según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, el presente Reglamento y las leyes, corresponda conocer a la Diputación Permanente.

b) Las proposiciones de Ley de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos en los términos previstos en la Ley de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.»

La disposición a la que remite la letra b) del artículo reproducido es la Ley 6/1986, de 25 de junio, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid⁵⁴. El artículo 7 de la misma dispone:

«Los procedimientos de iniciativa legislativa regulados en la presente Ley que estuvieran en tramitación en la Asamblea de Madrid, al disolverse ésta, no decaerán, pero podrán

⁵³ Vid. artículos 26.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; 18.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón; 25.1 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; 10.2 Estatuto de Autonomía de Canarias; 10.3 del Estatuto de Autonomía de Cantabria; 10.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha; 31.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña; 21.1 del Estatuto de Autonomía de Extremadura; 20.2 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares; 24.1 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia; 17.4 del Estatuto de Autonomía de La Rioja; 12.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; y 26.4 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

⁵⁴ Cfr. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 9 de julio de 1986.

retrotraerse al trámite que decida la Mesa de la Cámara sin que sea preciso en ningún caso ejercitar nuevamente la iniciativa.»

2.3.5. La proporcionalidad de la representación

Se recoge en el propio artículo 10.1 del Estatuto la exigencia de proporcionalidad, habiendo optado la vigente Ley electoral, como las restantes Comunidades Autónomas⁵⁵, por la regla *D'Hont*, en claro mimetismo del criterio adoptado por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para el Congreso de los Diputados. En efecto, a tenor del artículo 18.3 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre:

«La atribución de escaños se hará en la forma establecida por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para la atribución de escaños de Diputado del Congreso en las circunscripciones provinciales.»

En este sentido, ha de destacarse que el Estatuto de Madrid introduce, también a semejanza del Congreso, una barrera electoral en absoluto insignificante; en concreto, a tenor del artículo 10.6 —idéntica exigencia imponía el artículo 11.4 del texto originario y reproduce, *ad pedem literae*, el artículo 18.2 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid—:

«Para la distribución de escaños sólo serán tenidas en cuenta las listas que hubieran obtenido, al menos, el 5 por 100 de los sufragios válidamente emitidos.»

Consecuentemente, resulta preciso obtener el 5 por 100 del total de votos regionales válidamente emitidos para poder optar a la distribución de escaños, circunstancia que, como es sabido, prima a las candidaturas más votadas en la atribución de restos⁵⁶.

⁵⁵ Los Estatutos de Autonomía optan por la proclamación expresa de este sistema electoral en algunos supuestos (arts. 28.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; 18.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón; 25.1 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; 9.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias; 31.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña; 10.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha; 11.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; 11.1 del Estatuto de Autonomía de Galicia; 24.1 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia; 15.2 de la Ley Orgánica de Reintegración y Ameyoramiento del Régimen Foral de Navarra; 17.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja; 12.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; y 26.3 del Estatuto de Autonomía del País Vasco).

⁵⁶ En este sentido, ha de destacarse que casi todos los ordenamientos autonómicos suelen introducir, a semejanza de lo estipulado para las elecciones al Congreso de los Diputados, una barrera electoral que suele determinarse bien en el 3 por 100 (para los casos de Castilla-La Mancha, Andalucía, Navarra, el Principado de Asturias, País Vasco tras la reforma electoral de 4 de octubre de 2000, o Aragón, por citar algunos ejemplos); bien en el superior y en absoluto insignificante del 5 por 100 por el que se inclinan Cataluña o la Comunidad Valenciana. Para esta última, al igual que en el supuesto de la Comunidad de Madrid, la especialidad radica en que se recoge expresamente esta barrera, imponiendo una mayor rigidez, no en las leyes electorales propias, sino en el artículo 12.2 de su Estatuto: *«Para poder obtener escaño y ser proclamados electos, los candidatos de cualquier circunscripción deberán haber sido presentados por partidos o coaliciones que obtengan un número de votos superior al 5 por 100 de los emitidos en la Comunidad*

2.4. La dinámica de la institución: resultados electorales y relación de Diputados de la Asamblea de Madrid⁵⁷

2.4.1. La I Legislatura (1983-1987)⁵⁸

2.4.1.A) Resultados electorales de los comicios celebrados el día 8 de mayo de 1983

Conforme se ha indicado, el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía dispone, respecto de la composición de la Cámara, que: «La Asamblea de Madrid estará compuesta por un Diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara en los supuestos previstos en este Estatuto.»

De acuerdo con las previsiones estatutarias, durante su I Legislatura la Asamblea de Madrid, ascendiendo el censo electoral a la cifra de 3.381.610 electores, estuvo integrada por un total de 94 Diputados, esto es, uno por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000.

Los primeros comicios electorales fueron convocados por el Gobierno de la Nación —de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Adicional segunda del texto originario del Estatuto de Autonomía—, mediante Real Decreto 450/1983, de 9 de marzo⁵⁹, celebrándose el día 8 de mayo de 1983. El escrutinio registró los siguientes resultados⁶⁰:

— Número de electores:	3.381.610
— Número de votantes:	2.356.925
— Número de votos válidos:	2.326.390
— Número de votos en blanco:	13.735
— Número de votos nulos:	16.800

Los concretos votos obtenidos por cada una de las tres candidaturas mayoritarias —las que superaron el 5 por 100 de la barrera electoral⁶¹— en las que se concentró el voto de casi el 70 por 100 del censo electoral madrileño, fueron los siguientes:

Autónoma.» Consecuentemente, sea cual sea la vía —legal, autonómica u orgánica estatal—, resultará preciso obtener el porcentaje asignado del total de votos regionales para poder optar a la distribución de escaños.

⁵⁷ Las relaciones nominales de miembros de la Cámara que en el presente epígrafe se reproducen, así como los datos de actividad que ulteriormente se reflejan, responden a la inestimable labor realizada por la actual Sección de Archivo de la Cámara. Consecuentemente, resulta obligado por mi parte dejar constancia expresa de mi agradecimiento a su personal —Ricardo Sousa, Raquel Torres y Manolo García— y especialmente a la Jefe de Sección, D.^a Ángeles Nieto Lozano, infatigable investigadora.

⁵⁸ Al respecto, *vid.* la crónica parlamentaria de Arévalo Gutiérrez, «La consolidación de una institución representativa: doce años de andadura de la Asamblea de Madrid (1983-1995)», *op. cit.*

⁵⁹ El Real Decreto de convocatoria fue objeto de publicación en el *Boletín Oficial del Estado*, núm. 59, de 10 de marzo de 1983.

⁶⁰ Los resultados electorales se recogen de la publicación *Quién es quién en la Asamblea de Madrid*, editada por la Oficina de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid, Depósito Legal: M. 19.610-1983.

⁶¹ Concurrieron a las elecciones otras seis fuerzas políticas, las cuales no superaron la barrera electoral del 5 por 100 de los votos. En concreto: CDS, PDL, ADEI, PCOE-PCEU, Candidatura Coalición de

- Partido Socialista Obrero Español: 1.181.277 votos válidos (50,7 %)
- Coalición Alianza Popular, Partido Demócrata Popular, Unión Liberal: 798.353 votos válidos (34,3 %)
- Partido Comunista de España: 207.058 votos válidos (8,8 %)

Consecuentemente, se registró una situación de mayoría absoluta, constituyéndose en la Cámara tres Grupos Parlamentarios, de acuerdo con el siguiente esquema:

- Partido Socialista Obrero Español: 51 Diputados
- Coalición Alianza Popular, Partido Demócrata Popular, Unión Liberal: 34 Diputados
- Partido Comunista de España: 9 Diputados

2.4.1.B) *Relación de Diputados de la I Legislatura*

En concreto, y por orden alfabético, los 94 miembros fundadores de la Cámara regional fueron los Ilmos. Sres. que a continuación se relacionan, con especificación de la candidatura por la que resultaron electos:

Apellidos, nombre	Candidatura
ADELL FERNÁNDEZ, José Luis	PSOE ⁶²
ALONSO ARRANZ, Máximo	PSOE
ALONSO CASTAÑO, Luis	PSOE
ARGOS GARCÍA, Carlos	AP-PDP-UL ⁶³
BETETA BARREDA, Antonio Germán	AP-PDP-UL
BIDAGOR ALTUNA, Pilar	AP-PDP-UL
BLANCO GASPAS, Vicente	AP-PDP-UL
CABACO LÓPEZ, Francisco	PSOE
CAMPOS CORONA, Isidro Florencio	PSOE
CANO DE LOPE, Virgilio	PSOE
CÁNOVAS DEL CASTILLO FRAILE, Juan Antonio	AP-PDP-UL
CASAS NOMBELA, José Luis	PCE ⁶⁴

Lucha Popular y Liga Comunista (Acuerdo Obrero). De todas ellas interesa destacar el supuesto del Centro Democrático y Social, que obtuvo 73.124 votos, es decir, un 3,1 por 100 del total de votos válidos.

⁶² La referencia, en lo sucesivo, corresponde al Partido Socialista Obrero Español.

⁶³ Las siglas identifican, a partir de aquí, a la coalición Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-Unión Liberal.

⁶⁴ La referencia, en lo que sigue, es al Partido Comunista de España.

Apellidos, nombre	Candidatura
CASTEJÓN NÚÑEZ, Matías	PSOE
CASTELLANOS COLOMO, Enrique	AP-PDP-UL
CASTRO YUSTE, Benjamín	PSOE
CENDRERO UCEDA, Luis Alejandro	PSOE
CIMADEVILLA COSTA, César	PSOE
CORBI MURGUI, Henar	PSOE
CORVO GONZÁLEZ, Manuel	PCE
CRUZ ATIENZA, Elías	AP-PDP-UL
CUERDA RODRÍGUEZ, Mariano de la	AP-PDP-UL
DÍAZ GUERRA, Esteban	AP-PDP-UL
DOMINGO ORTIZ, Elvira	PSOE
EGEA SÁNCHEZ, Esteban	PSOE
ESPINAR GALLEGU, Ramón	PSOE
FEDERICO CORRAL, José María de	AP-PDP-UL
FERNÁNDEZ-GALIANO FERNÁNDEZ, Antonio	AP-PDP-UL
FLORES VALENCIA, Elena	PSOE
GARCÍA ALONSO, José Luis	PSOE
GARCÍA ARMENDÁRIZ, Ana María	AP-PDP-UL
GARCÍA-HIERRO CARABALLO, Dolores	PSOE
GARCÍA MENÉNDEZ, José Ramón	PSOE
GARCÍA REYES, Sergio	PCE
GARCÍA SÁNCHEZ, Eulalia	PSOE
GIL DE LA VINLLA, José	AP-PDP-UL
GÓMEZ ANGULO, Juan Antonio	AP-PDP-UL
GÓMEZ GUTIÉRREZ, Leopoldo	AP-PDP-UL
GÓMEZ MENDOZA, María	PSOE
GÓMEZ PÉREZ, Sócrates	PSOE
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Francisco	PSOE
GÓMEZ LORENTE, Bartolomé	PSOE
GUTIÉRREZ ARAUJO, Antonio	PCE
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Lorenzo	PCE

Apellidos, nombre	Candidatura
HIDALGO UTESA, José Luis	AP-PDP-UL
HUETE MORILLO, Luis María	AP-PDP-UL
LAYDA FERRER, Juan José	PSOE
LEDESMA BARTRET, Francisco Javier	PSOE
LEGUINA HERRÁN, Joaquín	PSOE
LISSAVETZKY DÍEZ, Jaime	PSOE
LÓPEZ CASAS, José Antonio	AP-PDP-UL
LÓPEZ LÓPEZ, José	AP-PDP-UL
MAESTRE MUÑIZ, Luis	PSOE
MARTÍNEZ MARÍN, Ángel Ramón	PSOE
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Adolfo	PSOE
MAYORAL MARQUES, Timoteo	PSOE
MORENO PRECIADOS, Juan Francisco	PCE
NÚÑEZ MORGADES, Pedro	AP-PDP-UL
OEHLING RUIZ, Hermann	AP-PDP-UL
ORTIZ ESTÉVEZ, José Luis	AP-PDP-UL
O'SHEA SUÁREZ-INCLÁN, Cándida	AP-PDP-UL
PEÑA DÍAZ, Eurico de la	AP-PDP-UL
PÉREZ DÍAZ, Carlos	PSOE
PÉREZ GONZÁLEZ, Jesús	PSOE
PÉREZ VÁZQUEZ, José Manuel	AP-PDP-UL
PERINAT Y ELIO, Luis Guillermo	AP-PDP-UL
PEYDRO CARO, Miguel	PSOE
PIN ARBOLEDA, José Ramón	AP-PDP-UL
RAMOS CUENCA, Agapito	PSOE
RAMOS GÁMEZ, Rafael	PSOE
REGUILÓN ÁLVAREZ, José Lucas	PSOE
REINO TORRES, Benito	PSOE
RICO REGO, Manuel	PCE
ROBLES PIQUER, Carlos	AP-PDP-UL
ROCHA RUBÍ, Manuel de la	PSOE

Apellidos, nombre	Candidatura
RODRIGO DE SANTIAGO, Alfredo	AP-PDP-UL
RODRÍGUEZ-LOSADA AGUADO, Eduardo	AP-PDP-UL
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Emilio Ramón	PCE
ROJO SASTRE, Antonio José	PSOE
RONEY ALBAREDA, Carmen	PCE
RUIZ DUERTO, Felipe	AP-PDP-UL
SACRISTÁN ALONSO, Alfonso	PSOE
SÁEZ GONZÁLEZ, Isaac	AP-PDP-UL
SAÍNZ GARCÍA, José Antonio	PSOE
SÁNCHEZ CUENCA, José Emilio	PSOE
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Juan	PSOE
SANTISTEBAN SÁEZ, Jesús	PSOE
SANZ AGÜERO, Marcos	PSOE
SAUQUILLO PÉREZ DEL ARCO, Francisca	PSOE
SEVILLA GARCÍA, Félix	PSOE
SUÁREZ CUESTA, María Antonia	AP-PDP-UL
TORNER MARTÍNEZ, José Luis	PSOE
UREÑA FERNÁNDEZ, Saturnino	PSOE
USERA GONZÁLEZ, Gabriel de	AP-PDP-UL
VICÉN SAN AGUSTÍN, Francisco Javier	PSOE

Como es lógico, durante la I Legislatura se produjeron diversas altas y bajas en la composición de la Cámara. Al respecto ha de tenerse en cuenta que, conforme al artículo 18.4 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid:

«En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un Diputado, el escaño será atribuido al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación.»

Presupuesto lo anterior, tuvieron lugar, en concreto, las siguientes pérdidas de la condición de Diputado y paralelas tomas de posesión de sus sustitutos de acuerdo con el orden de la candidatura:

Pérdidas de la condición	Nombramientos
RAMOS GÓMEZ, Rafael	CASERO NUÑO, Manuel (PSOE)
DE LA PEÑA DÍAZ, Eurico	MONTESINOS MULLERAS, Vicente (AP)
RODRÍGUEZ-LOSADA AGUADO, Eduardo	PRADILLO MORENO DE LA SANTA, Rafael (AP)
RONEY ALBAREDA, Carmen ⁶⁵	GONZÁLEZ ONTANEDA, Juan Antonio (PCE)
MORENO PRECIADOS, Juan Francisco	TEJEIRO MONTINO, Joaquín (PCE)
TEJEIRO MONTINO, Joaquín	TORIBIO CASAS, Francisco (PCE)
TORIBIO CASAS, Francisco	GONZÁLEZ ONTANEDA, Juan Antonio (PCE) ⁶⁶
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Francisco	FERNÁNDEZ MAGANTO, Francisco (PSOE)
ROJO SASTRE, Antonio José	BARRIO DE PENAGOS, Juan Antonio (PSOE)
TORNER MARTÍNEZ, José Luis	BLANCO VELASCO, José Luis (PSOE)
BLASCO GASPAS, Vicente	MARTÍN SÁNCHEZ-BENDITO, Justo Manuel (PSOE)

2.4.2. La II Legislatura (1987-1991) ⁶⁷

2.4.2.A) Resultados de las elecciones celebradas el día 2 de julio de 1987

La II Legislatura, como consecuencia del aumento de población registrado en la Comunidad —3.515.847 electores—, observó un incremento en el número de escaños. De esta forma, de 94 se pasa a 96 Diputados.

Los comicios electorales celebrados el día 2 de julio de 1987 registraron los siguientes resultados ⁶⁸:

— Número de electores:	3.515.847
— Número de votantes:	2.444.031
— Número de votos válidos:	2.426.472
— Número de votos en blanco:	42.196
— Número de votos nulos:	29.995

Hay que destacar la peculiaridad de que en dichas elecciones obtuvieron representación cuatro fuerzas políticas, constituyendo el único supuesto de

⁶⁵ La Diputada Roney Albareda recuperó posteriormente su condición de Diputada, por Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 1 de octubre de 1985, adoptado en cumplimiento de la Sentencia dictada al respecto por la Audiencia Territorial de Madrid. Tras su incorporación pasó al Grupo Parlamentario Mixto, cesando en su condición de Diputado D. Juan Antonio González Ontaneda.

⁶⁶ El Diputado González Ontaneda al tomar posesión de su cargo se integró en el Grupo Parlamentario Mixto.

⁶⁷ Me remito a una crónica parlamentaria anterior del autor de este trabajo: «La consolidación de una institución representativa: doce años de andadura de la Asamblea de Madrid (1983-1995)», *op. cit.*.

⁶⁸ Los resultados electorales se recogen de la publicación *Quién es quién en la Asamblea de Madrid*, editada por el Gabinete de Presidencia de la Cámara, Depósito Legal: M. 7.529-1988.

las cinco Legislaturas autonómicas en que una cuarta formación supera la barrera electoral del 5 por 100. En efecto, en las cuatro restantes tan sólo tres formaciones han obtenido escaños.

Los concretos votos obtenidos por cada una de las candidaturas mayoritarias fueron los siguientes:

- Partido Socialista Obrero Español: 932.878 votos válidos (38,4 %)
- Federación de Partidos de Alianza Popular: 762.102 votos válidos (31,4 %)
- Centro Democrático y Social: 403.440 votos válidos (16,6 %)
- Coalición Izquierda Unida: 181.512 votos válidos (7,4 %)

Consecuentemente, y a diferencia de la I Legislatura, no se registró una mayoría absoluta, constituyéndose en la Cámara cuatro Grupos Parlamentarios, de acuerdo con el siguiente esquema:

- Partido Socialista Obrero Español: 40 Diputados
- Federación de Partidos de Alianza Popular: 32 Diputados
- Centro Democrático y Social: 17 Diputados
- Coalición Izquierda Unida: 7 Diputados

2.4.2.B) *Relación de miembros de la Cámara durante la II Legislatura*

Siguiendo un orden alfabético, los 96 miembros de la Cámara regional que accedieron a la misma como consecuencia de los meritados comicios electorales fueron los Ilmos. Sres. que a continuación se relacionan:

Apellidos, nombre	Candidatura
ALONSO NOVO, Luis	PSOE
ALONSO DE VELASCO, Carlos	CDS ⁶⁹
ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS, Carmen	AP ⁷⁰
ÁLVAREZ DE FRANCISCO, José Luis	AP
ARNELA TERROSO, Juan José	CDS
AZCONA OLONDRIZ, Juan José	IU ⁷¹
BARAJAS AYLLÓN, Ildefonso	CDS

⁶⁹ Las siglas identifican, en lo que sigue, al Partido Centro Democrático y Social.

⁷⁰ La referencia, a partir de ahora, es a la Federación de Partidos de Alianza Popular.

⁷¹ Las siglas, empleadas en lo sucesivo, corresponden a la Coalición Izquierda Unida.

Apellidos, nombre	Candidatura
BARDISA JORDÁ, Ismael	AP
BETETA BARREDA, Antonio Germán	AP
BIDAGOR ALTUNA, María Pilar	AP
CABACO LÓPEZ, Francisco	PSOE
CÁDIZ RUIZ, Abel	CDS
CANO LOPE, Virgilio	PSOE
CÁNOVAS DEL CASTILLO Y FRAILE, Juan Antonio	AP
CASERO NUÑO, Manuel Jesús	PSOE
CASTEDO ÁLVAREZ, Fernando	CDS
CASTEJÓN NÚÑEZ, Matías	PSOE
CASTILLO GORDO, Ángel Luis del	PSOE
CASTRO YUSTE, Benjamín	PSOE
CEBRIÁN ECHARRI, José Vicente	CDS
CENDRERO UCEDA, Luis Alejandro	PSOE
CIMADEVILLA COSTA, César	PSOE
CORTÉS MUÑOZ, Luis Eduardo	AP
CORVO GONZÁLEZ, Manuel Juan	PCE
DAPENA BAQUEIRO, Manuel	CDS
DÍEZ OLAZÁBAL, Pedro	IU
DOMINGO ORTIZ, Elvira	PSOE
DUQUE FERNÁNDEZ DE PINEDO, Eduardo	AP
ESPINAR GALLEGU, Ramón	PSOE
FEDERICO CORRAL, José María	AP
FERNÁNDEZ MARTÍN, Alejandro Lucas	PSOE
FERNÁNDEZ RIOJA, José Luis	PSOE
FERRERO TORRES, Carmen	PSOE
FLORES VALENCIA, Elena	PSOE
GARCÍA ALONSO, José Luis	PSOE
GARCÍA FERNÁNDEZ, Rafael	PSOE
GARCÍA MENÉNDEZ, José Ramón	PSOE

Apellidos, nombre	Candidatura
GARCÍA NÚÑEZ, Francisco Javier	CDS
GARCÍA SÁNCHEZ, Eulalia	PSOE
GÓMEZ MENDOZA, María	PSOE
GÓMEZ PÉREZ, Sócrates	PSOE
HARGUINDEY BANET, Gerardo	CDS
JUSTEL CALABOZO, Manuel	CDS
LANZACO BONILLA, Fernando	CDS
LARA CARBÓ, María Teresa	AP
LARROCA DOLAREA, Ángel	AP
LEDESMA BARTRET, Francisco Javier	PSOE
LEGUINA HERRÁN, Joaquín	PSOE
LISSAVETZKY DÍEZ, Jaime	PSOE
LÓPEZ LÓPEZ, José	AP
LUXÁN MELÉNDEZ, Javier de	CDS
MAESTRE MUÑIZ, Luis	PSOE
MANGADA SAMAÍN, Eduardo	PSOE
MARTÍN-CRESPO DÍAZ, José	AP
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Adolfo	PSOE
MAYORAL MARQUÉS, Timoteo	PSOE
MORAL SANTÍN, José Antonio	IU
MORIÑO ORTEGA, Ana Isabel	AP
MORSO PÉREZ, Laura	CDS
NAVARRO VELASCO, Alfredo	AP
NÚÑEZ MORGADES, Pedro	AP
ORTIZ ESTÉVEZ, José Luis	AP
O'SHEA SUAREZ-INCLÁN, Cándida	AP
PACHECO BENITO, Julio	AP
PARTIDA BRUNETE, Luis Manuel	AP
PEDROCHE NIETO, Jesús	AP
PÉREZ DÍAZ, Carlos	PSOE

Apellidos, nombre	Candidatura
PÉREZ GONZÁLEZ, Jesús	PSOE
PEYDRO CARO, Miguel	PSOE
PIÑEIRO CUESTA, Nicolás	AP
POSADA CHAPADO, Rosa	CDS
RAMOS CUENCA, Agapito	PSOE
ROCHA RUBÍ, Manuel de la	PSOE
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier	AP
RUFILANCHAS SERRANO, Luis	PSOE
RUIZ CASTILLO, Juan Antonio	PSOE
RUIZ GALLARDÓN JIMÉNEZ, Alberto	AP
SACRISTÁN ALONSO, Alfonso	PSOE
SÁNCHEZ CUENCA, José Emilio	PSOE
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Juan	PSOE
SÁNCHEZ-HERRERA HERENCIA, Juan Francisco	CDS
SANTIAGO PRIETO, Bonifacio	AP
SANZ AGÜERO, Marcos	PSOE
SANZ PINACHO, Roberto	AP
SAUQUILLO PÉREZ DEL ARCO, Francisca	PSOE
SEVERIÉN TIGERAS, Gustavo	AP
SOLER ESPIAUBA GALLO, Juan	AP
TORRECILLA MONTAL, Salvador	IU
UREÑA FERNÁNDEZ, Saturnino	PSOE
USERA GONZÁLEZ, Gabriel	AP
VALVERDE BOCANEGRA, Jesús Adriano	AP
VAN-HALEN ACEDO, Juan	AP
VÁZQUEZ MENÉNDEZ, Elena	PSOE
VILALLONGA ELVIRO, Isabel María Teresa	IU
VINDEL LÓPEZ, María Rosa	AP
XIMÉNEZ DE EMBÚN RAMONELL, Joaquín	CDS

Durante la II Legislatura se produjeron, asimismo, diversas altas y bajas. En concreto, las siguientes pérdidas de la condición de Diputado y paralelos nombramientos en los términos del artículo 18.4 de la Ley Electoral:

Pérdidas de la condición	Nombramientos
MAESTRE MUÑIZ, Luis	SANTIESTEBAN SÁEZ, Jesús (PSOE)
MANGADA SAMAÍN, Eduardo	SAÍNZ GARCÍA, José Antonio (PSOE)
VÁZQUEZ MENÉNDEZ, Elena	LAYDA FERRER, Juan José (PSOE)
CANO LOPE, Virgilio	VICÉN SANAGUSTÍN, Javier (PSOE)
GARCÍA FERNÁNDEZ, Rafael	BARRIO DE PENAGOS, Juan Antonio (PSOE)
CORVO GONZÁLEZ, Manuel Juan	OLMOS LÓPEZ, Miguel Ángel (PCE)
GÓMEZ PÉREZ, Sócrates	ALONSO ARRANZ, Máximo (PSOE)
MORSO PÉREZ, Laura	MARTÍN BARROSO, Luis (CDS)
CASTEDO ÁLVAREZ, Fernando	ARILLA PÉREZ, Jesús (CDS) ⁷²
FLORES VALENCIA, María Elena	DE LORENZO GARCÍA, Rafael (PSOE)
CEBRIÁN ECHARRI, José Vicente	TOMÉ MARTÍNEZ, María Teresa (CDS)
CASTRO YUSTE, Benjamín	ROLDÁN BUCERO, Julián (PSOE)
LUXÁN MELÉNDEZ, Javier	ZURRIARRAIN FERNÁNDEZ, Juan (CDS)

2.4.3. La III Legislatura (1991-1995) ⁷³

2.4.3.A) Resultados de los comicios electorales celebrados el día 26 de mayo de 1991

El inicio de la III Legislatura comportó para la Asamblea de Madrid un aumento ciertamente significativo del número de escaños. Así, frente a los 94 Diputados de la I y a los 96 de la II, la III Legislatura estuvo conformada por 101 Diputados, sobre la base de un censo electoral de 3.831.644 electores.

La participación se elevó al 58,79 por 100, es decir, 2.252.743 electores, representando la abstención el 41,21 por 100, esto es, 1.578.901 electores.

⁷² Durante el transcurso de la Legislatura el Diputado Arilla Pérez se incorporó al Grupo Parlamentario Mixto.

⁷³ Vid. la crónica parlamentaria de Arévalo Gutiérrez, «La consolidación de una institución representativa: doce años de andadura de la Asamblea de Madrid (1983-1995)», *op. cit.*

Los comicios electorales volvieron a determinar un Parlamento integrado por tan sólo tres formaciones políticas, las cuales obtuvieron los siguientes resultados⁷⁴:

— Partido Popular:	955.994 votos válidos (42,62 %)
— Partido Socialista Obrero Español:	820.219 votos válidos (36,56 %)
— Izquierda Unida:	270.011 votos válidos (12,04 %)

Consecuentemente, se registró una situación de mayoría simple, aunque la dinámica de los pactos políticos comportó que, en este caso, el partido gobernante no fuera el más votado, constituyéndose en la Cámara tres Grupos Parlamentarios, de acuerdo con el siguiente esquema:

— Partido Popular:	47 Diputados
— Partido Socialista Obrero Español:	41 Diputados
— Izquierda Unida:	13 Diputados

2.4.3.B) *Relación de Diputados de la III Legislatura*

En concreto, y por orden alfabético, los 101 miembros integrantes de la Cámara regional durante su III Legislatura fueron los Ilmos. Sres. que a continuación se relacionan:

Apellidos, nombre	Candidatura
ABAD BÉCQUER, Fernando	PSOE
ALONSO ARRANZ, Máximo	PSOE
ALONSO NOVO, Luis	IU
ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS, Carmen	PP ⁷⁵
ÁLVAREZ DE FRANCISCO, José Luis	PP
ARGÜELLES SALAVERRÍA, Pedro	PP
BARDISA JORDÁ, Ismael	PP
BARRIO DE PENAGOS, Juan Antonio	PSOE
BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ, José Antonio	PP

⁷⁴ Los resultados electorales se recogen de la completa publicación *Revista de Documentación Parlamentaria*, editada por la Sección de Biblioteca dependiente de la Dirección de Análisis y Documentación de la Asamblea de Madrid, concretamente de su núm. 1, de marzo de 1992.

⁷⁵ Las siglas identifican, en lo sucesivo, al Partido Popular.

Apellidos, nombre	Candidatura
BETETA BARREDA, Antonio Germán	PP
BURGOS BETETA, Tomás	PP
BUSÓ BORÚS, Pilar	PP
CABACO LÓPEZ, Francisco	PSOE
CALVO POCH, Pedro	PP
CANDIL MARTÍN, Juan Antonio	IU
CARDENETE ROS, Salvador	PP
CASADO GONZÁLEZ, Tomás	PP
CASERO NUÑO, Manuel Jesús	PSOE
CASTEJÓN NÚÑEZ, Matías	PSOE
CASTILLO GORDO, Ángel Luis del	PSOE
CIERVA Y HOCES, Blanca Nieves de la	PP
CIFUENTES CUENCAS, Cristina	PP
COBO VEGA, Manuel	PP
CORBALÁN MARLASCA, Pablo Luis	PSOE
CORREA RODRÍGUEZ, Hilario	PSOE
CORTÉS MUÑOZ, Luis Eduardo	PP
CORVO GONZÁLEZ, Manuel Juan	PSOE
DÍEZ OLAZÁBAL, Pedro	IU
DOMINGO ORTIZ, Elvira	PSOE
DOZ ORRIT, Francisco Javier	IU
DUQUE FERNÁNDEZ DE PINEDO, Eduardo	PP
ESPINAR GALLEGO, Ramón	PSOE
ESTEBAN MARTÍN, Laura de	PP
FEDERICO Y CORRAL, José María de	PP
FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, Paloma	PP
FERNÁNDEZ MARTÍN, Alejandro Lucas	PSOE
FERNÁNDEZ RIOJA, José Luis	PSOE
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, María Pilar	PSOE
FERRERO TORRES, Carmen	PSOE
GARCÍA ALONSO, José Luis	PSOE

Apellidos, nombre	Candidatura
GARCÍA ESCUDERO, Pío	PP
GARCÍA FERNÁNDEZ, Eduardo	PSOE
GARCÍA-HIERRO CARABALLO, María Dolores	PSOE
GARCÍA MENÉNDEZ, José Ramón	PSOE
GARCÍA SÁNCHEZ, Eulalia	PSOE
GARCÍA-SISÓ PARDO, María Teresa	PP
GILABERTE FERNÁNDEZ, Adolfo	IU
GÓMEZ GARCÍA, Valentín	PSOE
JIMÉNEZ RAMOS, Guillermo	PP
LABARGA BUSTOS, Berta	PSOE
LARA CARBÓ, María Teresa de	PP
LEDESMA BARTRET, Javier	PSOE
LEGUINA HERRÁN, Joaquín	PSOE
LISSAVETZKY DÍEZ, Jaime	PSOE
LÓPEZ BLANCO, Asunción	IU
LÓPEZ LÓPEZ, José	PP
LÓPEZ VIEJO, Alberto	PP
LORENZO GARCÍA, Rafael de	PSOE
LUCAS GIMÉNEZ, Fermín	PP
LUXÁN MELÉNDEZ, Adolfo de	IU
MARTÍN-CRESPO DÍAZ, José	PP
MARTÍNEZ PARDO, María Teresa	IU
MATO ADROVER, Ana	PP
MAYORAL MARQUÉS, Timoteo	PSOE
MORAL SANTÍN, José Antonio	IU
MORENO CASAS, José Luis	PP
NAVARRO CORONADO, José Luis	PP
NEVADO BUENO, María Teresa	IU
NÚÑEZ MORGADES, Pedro	PP
O'SHEA SUÁREZ-INCLÁN, Cándida	PP
PACHECO BENITO, Julio	PP

Apellidos, nombre	Candidatura
PARTIDA BRUNETE, Luis Manuel	PP
PEDROCHE NIETO, Jesús	PP
PÉREZ GONZÁLEZ, Jesús	PSOE
PIÑEDO SIMAL, Adolfo	PSOE
RAMOS CUENCA, Agapito	PSOE
RÍO GARCÍA DE SOLA, Ignacio del	PP
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Manuel José	PP
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier	PP
ROMERO VERDUGO, Felisa	PSOE
RUIZ CASTILLO, Juan Antonio	PSOE
RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ, Alberto	PP
RUIZ REIG, Jaime Ramón	IU
SACRISTÁN ALONSO, Alfonso	PSOE
SAÍNZ GARCÍA, José Antonio	PSOE
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Juan	PSOE
SANTIAGO PRIETO, Bonifacio de	PP
SANTIESTEBAN SÁEZ, Jesús	PSOE
SANZ AGÜERO, Marcos	PSOE
SANZ PINACHO, Roberto	PP
SAUQUILLO PÉREZ DEL ARCO, Francisca	PSOE
SERRANO BELTRÁN, José Teófilo	PSOE
SERRANO FERNÁNDEZ, María	PSOE
SOLER-ESPIAUBA GALLO, Juan	PP
TORRALBA GONZÁLEZ, Carmen	PP
TORRE Y MONTORO, José María de la	PP
TORRECILLA MONTAL, Salvador	IU
UTANDE MARTÍNEZ, Fernando	PP
VALVERDE BOCANEGRA, Jesús Adriano	PP
VAN-HALEN ACEDO, Juan	PP
VILLALONGA ELVIRO, Isabel	IU

Durante la III Legislatura se produjeron diversas altas y bajas en la composición de la Cámara regional, en los términos del artículo 18.4 de la Ley Electoral. En concreto, las siguientes pérdidas de la condición de Diputado y paralelos nombramientos de sustitutos:

Pérdidas de la condición	Nombramientos
SANZ AGÜERO, Marcos	CHAZARRA MONTIEL, Antonio (PSOE)
DUQUE FERNÁNDEZ, Eduardo	MUÑOZ ABRINES, Pedro (PP)
CORTÉS MUÑOZ, Luis Eduardo	AVILÉS TRIGO, Antonio (PP)
MATO ADROVER, Ana	DEL OLMO FLÓREZ, Luis (PP)
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Pilar	LAYDA FERRER, Juan José (PSOE)
SERRANO BELTRÁN, Teófilo	FERNÁNDEZ BONILLA, Tomás (PSOE)
SAUQUILLO PÉREZ DEL ARCO, Francisca	MAZA ALCÁZAR, Luis Miguel (PSOE)
PACHECO BENITO, Julio	MONTABES CALLE, Miguel (PP)
ESTEBAN MARTÍN, Laura	GARCÍA ROMERO, Paloma (PP)
PÉREZ GONZÁLEZ, Jesús	RUIZ MUÑOZ, Pedro (PSOE)
CORBALÁN MARLASCA, Pablo Luis	PARRA GELLIDA, Ernelando (PSOE)

2.4.4. La IV Legislatura (1995-1999) ⁷⁶

2.4.4.A) Resultados de los comicios electorales celebrados el día 28 de mayo de 1995

Los comicios electorales, convocados por Decreto 30/1995, de 3 de abril ⁷⁷, se celebraron el día 28 de mayo de 1995, registrándose los siguientes resultados:

— Número de electores:	4.129.852
— Número de votantes:	2.907.141
— Número de votos de candidatura:	2.857.414
— Número de votos en blanco:	38.763
— Número de votos válidos:	2.896.177
— Número de votos nulos:	10.964

Los 2.857.414 votos de candidatura se repartieron entre un total de 16 formaciones políticas, del siguiente modo:

⁷⁶ Vid. Arévalo Gutiérrez, «La IV Legislatura de la Asamblea de Madrid», *op. cit.*

⁷⁷ Publicado en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, núm. 80, de 4 de abril de 1995.

Candidaturas	Votos obtenidos
Partido Popular	1.476.442
Falange Española Independiente	1.060
Plataforma Humanista	1.834
Plataforma de los Independientes de España	5.368
Unidad Ciudadana	2.086
Los Verdes-Grupo Verde	21.239
Partido Regionalista Independiente Madrileño	3.136
Izquierda Unida	464.167
Partido Socialista Obrero Español	860.726
Unidad Regional Independiente	1.636
Partido Obrero Revolucionario	2.066
Extremadura Unida	2.379
Falange Española de las JONS	1.853
Los Verdes Alternativos	10.638
Coalición Nuevo Partido Socialista	731
Partido Comunista de los Pueblos de España	2.053

De lo anterior⁷⁸ se colige que sólo tres formaciones superaron la barrera electoral del 5 por 100 de los votos válidos establecida por la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid: el Partido Popular —51,7 por 100—, el Partido Socialista Obrero Español —30,2 por 100— e Izquierda Unida —16,3 por 100—. Se confirmó así la estructura del sistema de partidos en la Comunidad de Madrid, articulado sobre la base de tres formaciones políticas. Recuérdese que tan sólo en la II Legislatura este esquema encontró su excepción, al acceder al Parlamento autonómico una cuarta formación, el Centro Democrático y Social.

En concreto, el número de Diputados de las tres formaciones parlamentarias, que se constituyeron por Acuerdo de la Mesa de 26 de junio de 1995, fue el siguiente:

- Grupo Parlamentario Popular: 54 escaños
- Grupo Parlamentario Socialista: 32 escaños
- Grupo Parlamentario Izquierda Unida: 17 escaños

⁷⁸ Los datos electorales que se reproducen corresponden al Acuerdo de la Junta Electoral Central de 25 de octubre de 1995, por el que se ordena la publicación de los resultados habidos en las elecciones de la Asamblea de Madrid, celebradas el 28 de mayo de 1995, de acuerdo con el acta de la Junta Electoral Provincial de Madrid de proclamación de electos. Fuente: *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, núm. 261, del jueves 2 de noviembre de 1995, pp. 25 y 26.

Téngase presente que el número de Diputados de la IV Legislatura, 103, ha sido el más elevado, en virtud de los datos del censo de población, frente a los 94 de la I, los 98 de la II, los 101 de la III e, incluso, los 102 de la vigente V Legislatura.

Los meritados datos electorales determinaron una importante modificación cualitativa del panorama político de la Comunidad de Madrid. En efecto, por primera vez en el Parlamento de la Comunidad de Madrid concurría una situación de mayoría absoluta favorable al Partido Popular, lo que permitió que esta fuerza política formase un gobierno homogéneo en solitario. Recuérdese que durante la I Legislatura también se había registrado una mayoría absoluta, en aquel caso favorable al Partido Socialista Obrero Español, el cual gobernó desde 1983 hasta 1987 en virtud de la misma, manteniéndose en el gobierno posteriormente durante las siguientes dos Legislaturas —II y III— merced a los pactos alcanzados con Izquierda Unida.

Se quebraba, pues, por primera vez, la posibilidad de que el Partido Socialista Obrero Español recibiera el encargo de formar gobierno, lo que determinó que Joaquín Leguina Herrán, primer y hasta entonces único Presidente de la Comunidad de Madrid, fuera reemplazado en dicha responsabilidad por Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez; cuya lista electoral, recuérdese, había obtenido ya mayor número de votos en los comicios celebrados el 26 de mayo de 1991, si bien, al no alcanzar la mayoría absoluta —42,62 por 100 de los votos válidos— y llegar a un acuerdo de gobierno las fuerzas de la izquierda, no recibió en aquel momento del Presidente de la Asamblea el encargo de solicitar la confianza de la Cámara.

2.4.4.B) *Relación de Diputados de la IV Legislatura*

Siguiendo un orden alfabético, los 103 miembros de la Cámara regional que accedieron a la misma como consecuencia de los referidos comicios electorales fueron los Ilmos. Sres. que a continuación se relacionan, con indicación de la candidatura de la que formaron parte:

Apellidos, nombre	Candidatura
ABAD BÉCQUER, Fernando	PSOE
ABOÍN ABOÍN, Sonsoles Trinidad	PP
ALBA GARCÍA, Margarita	PSOE
ALMAZÁN VICARIO, M. ^a Helena	PSOE
ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS, María del Carmen	PP

Apellidos, nombre	Candidatura
ÁLVAREZ DE FRANCISCO, José Luis	PP
ÁLVAREZ PÁEZ, Myriam	PSOE
ARGÜELLES SALAVERRÍA, Pedro	PP
BARDISA JORDÁ, Ismael	PP
BARRIO DE PENAGOS, Juan Antonio	PSOE
BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ, José Antonio	PP
BETETA BARREDA, Antonio Germán	PP
BIEHN CAÑEDO, Luisa María Teresa	IU
BILBATÚA PÉREZ, Miguel Ángel	IU
BURGOS BETETA, Tomás Pedro	PP
BUSÓ BORÚS, Pilar	PP
CABACO LÓPEZ, Francisco	PSOE
CALVO Y POCH, Pedro Luis	PP
CANDIL MARTÍN, Juan Antonio	IU
CANO DE LOPE, Virgilio	PSOE
CASADO GONZÁLEZ, Tomás	PP
CHAZARRA MONTIEL, Antonio	PSOE
CIERVA Y HOCES, Blanca Nieves de la	PP
CIFUENTES CUENCA, Cristina	PP
COBO VEGA, Manuel	PP
CORBI MURGUI, Henar	PSOE
DÍAZ SANZ, Virginia	IU
ESPADAS LÓPEZ-TERRADAS, Francisco Javier	PP
ESPINAR GALLEGO, Ramón	PSOE
FEDERICO CORRAL, José María de	PP
FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, Paloma	PP
FERNÁNDEZ MARTÍN, Alejandro Lucas	PSOE
FERRERO TORRES, Carmen	PSOE
FRANCO PARDO, José Manuel	PSOE

Apellidos, nombre	Candidatura
GAMO SÁNCHEZ, Mariano	IU
GARCÍA-ESCUADERO MÁRQUEZ, Pío	PP
GARCÍA-HIERRO CARABALLO, Dolores	PSOE
GARCÍA MARTÍNEZ, Armando	PSOE
GARCÍA ROMERO, Paloma	PP
GARCÍA ROMERO-NIEVA, María Esther	PP
GARCÍA SÁNCHEZ, Eulalia	PSOE
GARCÍA-SISO PARDO, María Teresa	PP
GILABERTE FERNÁNDEZ, Adolfo	IU
GÓMEZ MORENO, Jorge	PSOE
GONZÁLEZ IZQUIERDO, Marina María	IU
GUTIÉRREZ-VIERN ESPADA, Luis Ángel	PP
HUETE MORILLO, Luis María	PP
LARA CARBÓ, María Teresa de	PP
LEDESMA BARTRET, Javier	PSOE
LEGUINA HERRÁN, Joaquín	PSOE
LISSAVETZKY DÍEZ, Jaime	PSOE
LÓPEZ LÓPEZ, José	PP
LÓPEZ NAVARRO, María Isabel	PSOE
LUCAS GIMÉNEZ, Fermín	PP
LUXÁN MELÉNDEZ, Adolfo de	IU
MARTÍN BARRIOS, María Luz	PSOE
MARTÍN-CRESPO DÍAZ, José	PP
MARTÍN VASCO, Benjamín	PP
MAYOR OREJA, Carlos María	PP
MAZA ALCÁZAR, Luis Miguel	PSOE
MELÉNDEZ GONZÁLEZ, Ginés	PSOE
MISIEGO GASCÓN, Julio	IU
MORENO CASAS, José Luis	PP
MUÑOZ ABRINES, Pedro	PP

Apellidos, nombre	Candidatura
MYERS BROWN, Sandra	PP
NARANJO ESCOBAR, Juan Andrés	PP
NIETO CICUÉNDEZ, José Luis	IU
NOLLA ESTRADA, Modesto	PSOE
NÚÑEZ MORGADES, Pedro	PP
OLMO FLÓREZ, Luis del	PP
ONGIL CORES, María Gádor	PP
O'SHEA SUÁREZ-INCLÁN, Cándida	PP
PAÍÑO CAPÓN, Carlos	IU
PARRO DEL PRADO, Esteban	PP
PARTIDA BRUNETE, Luis Manuel	PP
PEDROCHE NIETO, Jesús	PP
PÉREZ MARTÍNEZ, Ángel	IU
PIÑEDO SIMAL, Adolfo	PSOE
POSADA CHAPADO, Rosa María	PP
RAMOS CUENCA, Agapito	PSOE
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier	PP
ROMÁN UGARTE, José María	PP
ROSÓN FERREIRO, Victorino Ramón	PP
RUIZ CASTILLO, Juan Antonio	PSOE
RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ, Alberto	PP
RUIZ REIG, Jaime Ramón	IU
SABANDO SUÁREZ, Pedro Feliciano	PSOE
SÁNCHEZ PERAL, María Luisa	IU
SÁNCHEZ SESEÑA, Luis Miguel	IU
SANZ ARRANZ, Juan Ramón	IU
SANZ PEINADO, Alejandro	PP
SANZ PINACHO, Roberto	PP
SETIÉN MARTÍNEZ, Julio	IU

Apellidos, nombre	Candidatura
SOLER-ESPIAUBA GALLO, Juan	PP
TAPIA SÁEZ, Jorge	PP
TROITIÑO PELAZ, Manuel	PP
UTANDE MARTÍNEZ, Fernando	PP
VALVERDE BOCANEGRA, Jesús Adriano	PP
VAN-HALEN ACEDO, Juan	PP
VÁZQUEZ MENÉNDEZ, Elena	PSOE
VILLANUEVA GONZÁLEZ, Miguel Ángel	PP
ZAPATA LLERENA, Saturnino	PSOE
ZÚÑIGA PÉREZ-LEMAUR, Jesús	PSOE

Durante la IV Legislatura se produjeron diversas altas y bajas en la composición política de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18.4 de la Ley Electoral. En concreto, las siguientes pérdidas de la condición de Diputado y paralelos nombramientos, con especificación de las fechas y publicaciones oficiales pertinentes.

Diputado que causa baja			Grupo	Sustituto		
Apellidos, nombre	Baja	Publicación		Apellidos, nombre	Alta	Publicación
ÁLVAREZ DE FRANCISCO, José Luis	04-07-1995	BOAM 1, 24-07-1995	PP	PICARDO FERRANDO, Elia	06-07-1995	BOAM 1, 24-07-1995
ARGÜELLES SALAVERRÍA, Pedro	28-05-1996	BOAM 52, 11-07-1996	PP	CEPEDA RAMOS, Javier Ramón	06-06-1996	BOAM 48, 20-06-1996
BARDISA JORDÁ, Ismael	11-02-1997	BOAM 85, 20-02-1997	PP	REVUELTA IGLESIAS, Joaquín Antonio	13-02-1997	BOAM 86, 27-02-1997
BERMÚDEZ DE CASTRO, José Antonio	20-03-1996	BOAM 35, 21-03-1996	PP	VINDEL LACALLE, Francisco	21-03-1996	BOAM 52, 11-07-1996
BILBATÚA PÉREZ, Miguel Ángel	01-04-1997	BOAM 96, 10-04-1997	IU	PÉREZ HERRERO, José	10-04-1997	BOAM 96, 10-04-1997
BURGOS BETETA, Tomás	20-03-1996	BOAM 35, 21-03-1996	PP	BERZAL ANDRADE, José Manuel	21-03-1996	BOAM 52, 11-07-1996
ESPINAR GALLEGO, Ramón	31-10-1995	BOAM 11, 02-11-1995	PSOE	NEIRA SALAZAR, Jesús	16-11-1995	BOAM 52, 11-07-1996
GARCÍA-HIERRO CARABALLO, Dolores	20-03-1996	BOAM 36, 29-03-1996	PSOE	GÓMEZ GARCÍA, Valentín	11-04-1996	BOAM 52, 11-07-1996
GARCÍA-SISO PARDO, M.ª Teresa	30-04-1996	BOAM 41, 09-05-1996	PP	LIÉBANA MONTIJANO, M.ª Pilar	16-05-1996	BOAM 45, 31-05-1996
GILABERTE FERNÁNDEZ, Adolfo	09-02-1999	BOAM 201, 11-02-1999	IU	ARROYO FERNÁNDEZ, Sonia	04-03-1999	BOAM 206, 18-03-1999
HERRERA ANTONAYA, José Francisco	11-02-1997	BOAM 85, 20-02-1997	PP	MUÑOZ GRACIA, Miguel Ángel	13-02-1997	BOAM 86, 27-02-1997
LARA CARBÓ, M.ª Teresa de	28-05-1996	BOAM 45, 31-02-1996	PP	VÉLEZ HIJAS, M.ª Pilar Luisa	06-06-1996	BOAM 48, 20-06-1996
LEGUINA HERRÁN, Joaquín	04-07-1995	BOAM 1, 24-07-1995	PSOE	MONTEGRIFO FERNÁNDEZ, Francisco	06-07-1995	BOAM 1, 24-07-1995
LUCAS GIMÉNEZ, Fermín	28-04-1998	BOAM 162, 07-05-1998	PP	MAGÁN TORRES, Alejandro	07-05-1998	BOAM 163, 14-05-1998
MORENO CASAS, José Luis	04-07-1995	BOAM 1, 24-07-1995	PP	SÁNCHEZ LÁZARO-CARRASCO, Fernando	06-07-1995	BOAM 1, 24-07-1995
NARANJO ESCOBAR, Juan Andrés	16-05-1996	BOAM 49, 17-06-1996	PP	HAERING ZABALA, Luis	23-5-1996	BOAM 46, 06-06-1996
NÚÑEZ MORGADES, Pedro	21-05-1996	BOAM 45, 31-05-1996	PP	HERRERA ANTONAYA, Francisco	23-05-1996	BOAM 46, 06-06-1996
PÉREZ HERRERO, José	27-05-1997	BOAM 107, 29-05-1997	IU	MARÍN CALVO, José Guillermo ⁷⁹	05-06-1997	DSS 419, 05-06-1997
SANZ PEINADO, Alejandro	04-07-1995	BOAM 1, 24-07-1995	PP	LOZANO MARTÍN, Margarita África	06-07-1995	BOAM 1, 24-07-1995
TAPIA SÁEZ, Jorge	24-02-1998	BOAM 152, 26-02-1998	PP	VIÑUELA CORDERO, Fernando Francisco	05-03-1998	BOAM 154, 12-03-1998
VALVERDE BOCANEGRA, Jesús	20-10-1998	BOAM 182, 29-10-1998	PP	DUQUE CUESTA, Miguel Ángel	22-10-1998	BOAM 185, 05-11-1998

⁷⁹ El Diputado José Guillermo Marín Calvo accede a la condición de Diputado por renuncia anticipada de D.ª Inés Sábanés Nadal.

2.4.5. La V Legislatura (1999-2003) ⁸⁰

2.4.5.A) Resultados de los comicios electorales celebrados el día 13 de junio de 1999

Los comicios electorales, convocados por Decreto 6/1999, de 19 de abril ⁸¹, se celebraron el día 13 de junio de 1999, registrándose los siguientes resultados:

— Número de electores:	4.281.075
— Número de votantes:	2.606.325
— Número de votos de candidatura:	2.539.154
— Número de votos en blanco	54.341
— Número de votos válidos:	2.593.495
— Número de votos nulos	12.830

Los 2.539.154 votos de candidatura se repartieron entre un total de 20 formaciones, del siguiente modo:

Candidaturas	Votos obtenidos
Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid	199.488
Unión Comunidad de Madrid	2.532
Tierra Comunera-Partido Nacionalista Castellano	1.553
Partido Regional Independiente Madrileño	2.042
Partido Popular	1.324.596
Partido Unidad Ciudadana	1.778
Los Verdes-Grupo Verde	15.597
Partido Demócrata Español	2.686
Unión Centrista-Centro Democrático y Social	8.379
Partido Humanista	2.492
Partido Roji-Verde	1.432
Unidad Regional Independiente	903
La Falange	3.810

⁸⁰ Véanse Arévalo Gutiérrez, «El primer año de la V Legislatura de la Asamblea de Madrid», *op. cit.*; De Alba Bastarrechea, «La Actividad Parlamentaria del segundo año de la V Legislatura de la Asamblea de Madrid», *op. cit.*; y Cid Villagrasa, «Las tácticas parlamentarias del tercer año de la V Legislatura de la Asamblea de Madrid», *op. cit.*

⁸¹ Publicado en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, núm. 92, de 20 de abril de 1999.

Candidaturas	Votos obtenidos
Coalición PSOE-Progresistas	944.819
Falange Española Independiente	2.349
Los Verdes	17.793
Partido de la Ley Natural	1.393
Partido de El Bierzo	1.415
Partido Comunista de los Pueblos de España	3.109
Progresistas Federales	988

De lo anterior⁸² se colige que sólo tres formaciones superaron la barrera electoral del 5 por 100 de los sufragios válidamente emitidos establecida por el artículo 18.2 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid. En concreto, las tres formaciones que rebasaron el listón electoral fueron el Partido Popular, con un porcentaje del 51,7 por 100, la Coalición Partido Socialista Obrero Español-Progresistas, que obtuvo un porcentaje del 30,2 por 100, e Izquierda Unida, con el porcentaje del 16,3 por 100.

Se consagró así la estructura del sistema de partidos en la Comunidad de Madrid, articulado sobre la base de tres formaciones políticas, junto a las que concurrieron a los comicios electorales otras de carácter manifiestamente marginal —teniendo en cuenta el número de electores y de votos obtenidos anteriormente referidos—, como lo prueba el hecho de que ninguna de ellas obtuviera 20.000 votos, superando tan sólo tres la cifra de 5.000.

El meritado sistema tripartito parece estar sólidamente implantado en la Comunidad. Recuérdese que tan sólo en la II Legislatura este esquema encontró su excepción, al acceder al Parlamento autonómico una cuarta formación, el Centro Democrático y Social. En todo caso, lo que resulta manifiestamente claro es que la idiosincrasia del pueblo de la Comunidad de Madrid no es favorable a las orientaciones regionalistas.

Téngase presente que el número de Diputados de la V Legislatura, 102, junto con el de la IV Legislatura, 103, ha sido el más elevado, en virtud de los datos del censo de población, frente a los 94 de la I, los 98 de la II y los 101 de la III.

Presupuesto lo anterior, el número de Diputados obtenidos por las tres formaciones parlamentarias —que se constituyeron en Grupo Parlamentario

⁸² Los datos electorales que se reproducen corresponden al Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Madrid por el que se ordena la publicación del acta de proclamación de los resultados de las elecciones a la Asamblea de Madrid convocadas por Decreto 6/1999, de 19 de abril, y celebradas el día 13 de junio de 1999. Fuente: *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, núm. 154, del jueves 1 de julio de 1999, pp. 21 y 22.

por Acuerdo de la Mesa de la Cámara en su primera sesión, celebrada con fecha de 2 de julio de 1999—, fue el siguiente:

— Grupo Parlamentario Popular:	55 escaños
— Grupo Parlamentario Socialista:	39 escaños
— Grupo Parlamentario Izquierda Unida:	8 escaños

En cuanto a la orientación de las tres formaciones que componen el sistema de partidos de la Cámara, ha de destacarse que los meritados datos electorales determinaron la consolidación de la modificación cualitativa del panorama político de la Comunidad de Madrid operada tras los comicios electorales de 1995, es decir, los que determinaron la composición de la Asamblea de Madrid durante su IV Legislatura.

En efecto, al igual que en la IV Legislatura, el Parlamento de la Comunidad de Madrid se articula sobre la base de una mayoría absoluta favorable al Partido Popular, permitiendo a esta fuerza política formar un gobierno homogéneo en solitario. Recuérdesse que durante la I Legislatura también se había registrado una mayoría absoluta, en aquel caso favorable al Partido Socialista Obrero Español, el cual gobernó desde 1983 hasta 1987 en virtud de la misma, manteniéndose en el gobierno posteriormente durante las siguientes dos Legislaturas —II y III— merced a los pactos alcanzados con Izquierda Unida; especialmente durante la III, en cuyos comicios —celebrados el 26 de mayo de 1991— había obtenido mayor número de votos el Partido Popular, si bien, al no alcanzar la mayoría absoluta —42,62 por 100 de los votos válidos— y llegar a un acuerdo de gobierno las fuerzas de la izquierda, no recibió su candidato el encargo de solicitar la confianza de la Cámara por parte del Presidente de la Asamblea.

De hecho, los datos de las últimas elecciones, con alguna variante no determinante de una alteración del sistema de fuerzas parlamentarias, constituyen una práctica reproducción de los correspondientes a la IV Legislatura. La formación mayoritaria, el Partido Popular, ha pasado de 54 a 55 escaños. El Partido Socialista, manteniendo su posición de segunda fuerza parlamentaria, ha observado un incremento, pasando de contar con 32 miembros de la Cámara a disponer de 39. Y la oposición minoritaria ha observado una sustancial reducción de su representación parlamentaria, superior al 50 por 100: de los 17 escaños ha pasado a los 8 actuales.

2.4.5.B) *Relación de Diputados de la Asamblea de Madrid en su V Legislatura*

Siguiendo un orden alfabético, y teniendo en cuenta que de los 103 miembros que conformaron la Cámara regional durante la IV Legislatura se ha pasado, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población, a la cifra de 102, los Ilmos. Sres. Diputados que originariamente conformaron la Asamblea de Madrid son los que a continuación se relacionan, con indicación de la candidatura de la que formaron parte:

Apellidos, nombre	Candidatura
ABOÍN ABOÍN, Sonsoles Trinidad	PP
ACEBES CARABAÑO, Alicia	PSOE-P ⁸³
ADRADOS GAUTIER, María Paloma	PP
ALMAZÁN VICARIO, Helena	PSOE-P
ALMEIDA CASTRO, María Cristina	PSOE-P
ÁLVAREZ DURANTE, María Luisa	PSOE-P
ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS, María del Carmen	PP
ARROYO VENEROSO, Ana	PSOE-P
BERZAL ANDRADE, José Manuel	PP
BETETA BARREDA, Antonio Germán	PP
BUENESTADO EXPÓSITO, Miguel	PSOE-P
BUSÓ BORÚS, Pilar	PP
CABACO LÓPEZ, Francisco	PSOE-P
CABRERA ORELLANA, José	PP
CALVO POCH, Pedro Luis	PP
CARMONA SANCIPRIANO, Antonio	PSOE-P
CHAZARRA MONTIEL, Antonio	PSOE-P
CIERVA Y DE HOCES, Blanca Nieves de la	PP
CIFUENTES CUENCAS, María Cristina	PP
COBO VEGA, Manuel	PP
CONTRERAS LORENZO, Francisco	PSOE-P
CORTÉS MUÑOZ, Luis Eduardo	PP
DÍEZ OLAZÁBAL, Pedro	PSOE-P
ECHEGOYEN VERA, Enrique	PSOE-P
ECHEVERRÍA ECHÁNIZ, José Ignacio	PP
ENSEÑAT DE CARLOS, Silvia	PP
FEDERICO CORRAL, José María de	PP
FERMOSEL DÍAZ, Jesús	PP

⁸³ La referencia, en lo que sigue, corresponde al Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.

Apellidos, nombre	Candidatura
FERNÁNDEZ GORDILLO, Antonio	PSOE-P
FERNÁNDEZ MARTÍN, Alejandro Lucas	PSOE-P
FRANCO PARDO, José Manuel	PSOE-P
GARCÍA ÁLVAREZ, Caridad	IU
GARCÍA PEÑA, Pilar	PSOE-P
GARCÍA ROJAS, Carmen	PSOE-P
GARCÍA ROMERO, Paloma	PP
GARCÍA-ESCUADERO MÁRQUEZ, Pío	PP
GARRIDO HERNÁNDEZ, Francisco	PSOE-P
GÓMEZ MORENO, Jorge	PSOE-P
GONZÁLEZ ACEITUNO, Sagrario	PSOE-P
GONZÁLEZ BLÁZQUEZ, Franco	IU
GONZÁLEZ GARCÍA, María de la Paz	PP
GONZÁLEZ MONUX, Elena	PP
HERNÁNDEZ GUARDIA, Antonio	PP
HUETE MORILLO, Luis María	PP
IGLESIAS FERNÁNDEZ, Óscar	PSOE-P
IRIBERRI HARO, Victorino José	PP
LIÉBANA MONTIJANO, María del Pilar	PP
LISSAVESTZKY DÍEZ, Jaime	PSOE-P
LÓPEZ COLLADO, Carlos	PP
LÓPEZ LÓPEZ, José	PP
MARÍN CALVO, José Guillermo	IU
MARTÍN BARRIOS, María Luz	PSOE-P
MARTÍN IRAÑETA, María del Carmen	PP
MARTÍN VASCO, Benjamín	PP
MARTÍN-CRESPO DÍAZ, José	PP
MARTÍNEZ LÓPEZ, María del Pilar	PP
MARTÍNEZ TEN, Carmen	PSOE-P
MAYOR OREJA, Carlos María	PP

Apellidos, nombre	Candidatura
MONTERRUBIO RODRÍGUEZ, Óscar	PSOE-P
MORAGA VALIENTE, Álvaro	PP
MORILLO CASALS, Pablo	PP
MOYA NIETO, Encarnación	PSOE-P
MUÑOZ ABRINES, Pedro	PP
NARROS MANZANERO, José Luis	PP
NAVARRO MUÑOZ, Adolfo	PSOE-P
NEVADO BUENO, María Teresa	PSOE-P
NOLLA ESTRADA, Modesto	PSOE-P
OLLER SÁNCHEZ, Francisca	PSOE-P
OLMO FLOREZ, Luis del	PP
ONGIL CORES, María Gador	PP
PARRO DEL PRADO, Esteban	PP
PARTIDA BRUNETE, Luis Manuel	PP
PEDROCHE NIETO, Jesús	PP
PERAL GUERRA, Luis	PP
PÉREZ HUYSMANS, Miguel Ángel	PP
PÉREZ MARTÍNEZ, Ángel	IU
PIÑEDO SIMAL, Adolfo	PSOE-P
PLAZA CARPIO, Álvaro	PSOE-P
POSADA CHAPADO, Rosa María	PP
REVENGA SÁNCHEZ, Julián	PSOE-P
RODRÍGUEZ GABUCIO, Dolores	PSOE-P
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier	PP
RUANO SÁNCHEZ, María Dolores	IU
RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ, Alberto	PP
SABANDO SUÁREZ, Pedro Feliciano	PSOE-P
SAINZ DE MURIETA RODEYRO, Emilio Eusebio	PP
SÁNCHEZ FIERRO, Julio César	PP
SÁNCHEZ GATELL, Eduardo	PSOE-P

Apellidos, nombre	Candidatura
SÁNCHEZ PERAL, María Luisa	IU
SANZ AGÜERO, Marcos	PSOE-P
SANZ ARRANZ, Juan Ramón	IU
SANZ PINACHO, Roberto	PP
SETIÉN MARTÍNEZ, Julio	IU
TAMAYO BARRENA, Eduardo	PSOE-P
TRABADO PÉREZ, Colomán	PP
TROITIÑO PELAZ, Manuel	PP
UTANDE MARTÍNEZ, Fernando	PP
UTRILLA PALOMBI, Mario	PP
VAN-HALEN ACEDO, Juan	PP
VÁZQUEZ MENÉNDEZ, Elena	PSOE-P
VILLANUEVA GONZÁLEZ, Miguel Ángel	PP
VINDEL LACALLE, Francisco	PP

Respecto de la relación de Diputados anteriormente reproducida, durante el período analizado de la V Legislatura se produjeron diversas altas y bajas⁸⁴. En concreto, las siguientes pérdidas de la condición de Diputado y paralelos nombramientos, respecto de los cuales, en el presente supuesto, se especifican sus fechas y datos de publicación oficial, tanto en el *Boletín Oficial de la Asamblea* como, en relación con las altas y por lo que se refiere a la toma de posesión en sesión plenaria mediante el oportuno juramento o promesa, en el *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*.

⁸⁴ La relación originaria de los Sres. Diputados que constituyen la Cámara de la V Legislatura se contiene en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 1, de 22 de julio de 1999, pp. 3 y 4.

Diputado que causa baja			Sustituto			
Apellidos, nombre	Baja	Publicación	Grupo	Apellidos, nombre	Alta	Publicación
PERAL GUERRA, Luis	16-07-1999 R. 4409	BOAM 2, 29-07-1999	PP	FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, Paloma	22-09-1999	BOAM 9, 07-10-1999 DSSAM 20, 22-09-1999
LÓPEZ LÓPEZ, José	31-01-2000 R. 539	BOAM 30, 17-02-2000	PP	LOZANO MARTÍN Margarita África	10-02-2000	BOAM 31, 24-02-2000 DSSAM. 117, 10-02-2000
LISSAVETZKY Díez, Jaime	31-03-2000 R. 2588	BOAM 37, 06-04-2000	PSOE-P	SÁEZ LAGUNA, María Teresa	13-04-2000	BOAM 40, 04-05-2000 DSSAM 152, 13-04-2000
SÁNCHEZ FIERRO, Julio César	18-05-2000 R. 3268	BOAM 43, 25-05-2000	PP	CASADO GONZÁLEZ, Tomás	01-06-2000	BOAM 52, 06-07-2000 DSSAM 184, 01-06-2000
BETETA BARREDA, Antonio	05-06-2000 R. 3513	BOAM 45, 08-06-2000	PP	OFICIALDEGUI ALONSO DE CELADA, Eduardo	14-06-2000	BOAM 50, 29-06-2000 DSSAM 200, 14-06-2000
GARCÍA PEÑA, Pilar	12-02-2001		PSOE-P	ÁLVAREZ PÁEZ, Myriam	19-02-2001	BOAM 87, 15-03-2001 DSSAM 87, 15-03-2001
MARTÍNEZ TEN, Carmen	18-07-2001	BOAM 108, 27-07-2001	PSOE-P	SÁNCHEZ OCAÑA, Felisa	10-08-2001	BOAM 111, 27-09-2001 DSSAM 444, 19-09-2001
CASADO GONZÁLEZ, Tomás	15-07-2002		PP	SAN VICENTE SANCHEO, Antonio ⁸⁵	24-07-2002	BOAM 172, 12-09-2002 DSSAM 710, 10/11-09-2002

⁸⁵ El Diputado San Vicente Sancho toma posesión por renuncia anticipada de D.^a Eva María Pavo López.

2.5. La disolución de la Cámara

La Asamblea de Madrid se disuelve *hic et nunc* por tres motivos:

1.º La disolución natural de la Cámara.

El primero de los motivos de disolución, causa normal y ordinaria, es el agotamiento de la Legislatura, esto es, la expiración del mandato parlamentario. Así lo determinan los apartados 1 y 2 del vigente artículo 10 del Estatuto, anteriormente reproducidos, fijando su extensión en cuatro años ⁸⁶.

2.º La disolución sancionadora de carácter automático ⁸⁷.

En segundo lugar, se disuelve la Cámara, como sanción, por la falta de designación del Presidente de la Comunidad en el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura tras la celebración de los comicios electorales. La prescripción del artículo 18.5 del Estatuto, que comporta como efecto la convocatoria inmediata de nuevas elecciones, tiende de esta forma a fomentar la adopción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria.

3.º La disolución por ejercicio de la facultad atribuida al Presidente del Gobierno ⁸⁸.

⁸⁶ Me remito al respecto a lo anteriormente indicado en el epígrafe II.3.4.

⁸⁷ Cuatro son las posiciones adoptadas por los distintos estatutos de autonomía frente a la vía de la disolución sancionatoria:

a) La de los Parlamentos que no reconocen la disolución estatutariamente, sin remitir a normativa alguna, de tal forma que de producirse la falta de acuerdo se desembocaría en una espinosa cuestión práctica. Éste es el caso del Parlamento gallego, a tenor del artículo 15.3 de su Estatuto, y de las Cortes Valencianas, conforme al artículo 15.2 de su Estatuto.

b) La de aquellos Estatutos que no establecen la disolución de sus Parlamentos, si bien sus textos remiten, en general, a una ley ulterior la forma de elección del Presidente. Es el caso del artículo 36 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y del artículo 33 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

c) Los Parlamentos que rechazan la disolución automática, supuesto que registra dos variantes:

c.1) Aquellos en que, para evitar el vacío de gobierno y sus posibles consecuencias, han preferido resolver la ausencia de pacto entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria invirtiendo al candidato de la fuerza política que haya obtenido mayor número de escaños. En esta línea se encuentran el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 37.3, y el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en su artículo 29.3.

c.2) Las Cámaras en que se designa al candidato de la fuerza política que hubiere obtenido un número mayor de votos. Es el caso de las Asambleas legislativas de Ceuta y Melilla, conforme los artículos 15 de sus respectivos Estatutos.

d) Finalmente, el cuarto modelo agrupa a los Estatutos que expresamente han admitido la disolución sancionatoria, que son la mayoría: artículos 17.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, 22.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón, 17.3 del Estatuto de Autonomía de Cantabria, 23.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, 27.2 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, 31.4 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, 30.5 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, 17.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y 18.5 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. En este grupo ha de incluirse, asimismo, y tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2002, la Ley Orgánica de ReinTEGRACIÓN y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, a tenor de la nueva redacción de los apartados 3 y 4 del artículo 29.

⁸⁸ Dos son en este caso las soluciones que han asumido estatutariamente las distintas Comunidades:

a) Por un lado, han preferido silenciar esta atribución los ordenamientos del País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Canarias, la Comunidad Foral de Navarra y las Islas Baleares, a las que deben sumarse, con las salvedades derivadas de su especialidad, Ceuta y Melilla.

Finalmente, se ha admitido vía estatutaria, a partir de la reforma operada por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, la facultad de disolución del Presidente de la Comunidad.

Frente a la regulación originaria, que en absoluto debe interpretarse como una omisión, sino como el resultado de una opción consciente, el vigente artículo 21 regula de forma detallada y pormenorizada la facultad de disolución, atribuida al Presidente, quien la ejerce bajo su exclusiva responsabilidad, si bien previa deliberación no vinculante del Gobierno. La principal característica de dicha disciplina radica en que la nueva Cámara tendrá un mandato limitado por el término natural de la Legislatura originaria; es decir, el tiempo que reste hasta la conclusión de los cuatro años, teniendo lugar las elecciones, en todo caso, el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años. Dispone en concreto el precepto de referencia:

«1. El Presidente de la Comunidad de Madrid, previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución de la Asamblea con anticipación al término natural de la legislatura. La disolución se formalizará por Decreto, en el que se convocarán a su vez elecciones, conteniéndose en el mismo los requisitos que exija la legislación electoral aplicable.

2. El Presidente no podrá acordar la disolución de la Asamblea durante el primer período de sesiones de la legislatura, cuando reste menos de un año para la terminación de la legislatura, cuando se encuentre en tramitación una moción de censura o cuando esté convocado un proceso electoral estatal. No procederá nueva disolución de la Asamblea antes de que transcurra un año desde la anterior.

3. En todo caso, la nueva Cámara que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandato limitado por el término natural de la legislatura ordinaria.»

Con dicha prescripción se ha dado cobertura a lo dispuesto por la Ley 5/1990, de 17 de mayo, reguladora de la Facultad de Disolución de la Asamblea de Madrid por el Presidente de la Comunidad⁸⁹, que, en el momento de su aprobación —y sin perjuicio de cualquier otro criterio

b) Por otra parte, otros Estatutos han admitido de forma expresa este instituto, propio de la forma parlamentaria de gobierno, así: Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, artículo 25.3; Estatuto de Autonomía de Cantabria, artículo 23; Estatuto de Autonomía de La Rioja, artículo 17.6; Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, artículo 27.4; Estatuto de Autonomía de Aragón, artículo 23.2; y Estatuto de Autonomía de Extremadura, artículo 34; a este grupo se han adherido, después de sus últimas reformas, además del considerado Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (art. 21), el Estatuto de Autonomía de Castilla y León (art. 17.3) y la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (art. 30.3). En el caso de Castilla y León, como en el de la Comunidad de Madrid, la remozada redacción estatutaria comporta abandonar su atribución mediante una norma propia *praeter* Estatuto (ha venido, así, a darse cobertura a lo dispuesto por la Ley de las Cortes de Castilla y León 1/1996, de 27 de marzo, reguladora de la Cuestión de Confianza y de la Facultad del Presidente de la Junta de Disolución de las Cortes de Castilla y León que, en el momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara debía reputarse manifiestamente inconstitucional). Esta modalidad de disolución, frente a la regulación originaria —que en absoluto debe interpretarse como una omisión, sino como el resultado de una opción consciente—, se regula en los vigentes Estatutos de Autonomía de forma detallada y pormenorizada. La principal característica de dicha disciplina radica en que las nuevas Cámaras tendrán un mandato limitado por el término natural de la legislatura originaria.

⁸⁹ Cfr. *Boletín Oficial de la Comunidad* de Madrid de 29 de mayo de 1990.

mejor fundado en Derecho»—, debía reputarse una norma *praeter* Estatuto y manifiestamente inconstitucional por antiestatutaria⁹⁰. No a otra conclusión ha de llegarse si se ponderan los artículos 10.1 y 18.5 del Estatuto de Autonomía, en su redacción originaria, del siguiente tenor literal, respectivamente: «*La Asamblea de Madrid es elegida por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara, en el supuesto previsto en el artículo 18.5 del presente Estatuto*», y «*si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza de la Asamblea, quedará disuelta, convocándose de inmediato nuevas elecciones*». A mayor abundamiento, la propia Exposición de Motivos —donde debía decir Preámbulo— de la Ley 5/1990, reconoce en su primer párrafo que «*el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid no otorga expresamente al Presidente del Consejo de Gobierno la facultad de disolver anticipadamente la Asamblea*». Asimismo, a efectos hermenéuticos, debe recordarse la recomendación formulada por el «*Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías*», sobre cuyo peso en el proceso de articulación del sistema autonómico no es preciso insistir. En virtud del mismo: «*Todas las Comunidades Autónomas que se constituyan deben contar con Asamblea Legislativa. El órgano ejecutivo no podrá disolver la Asamblea en ningún caso y ésta sólo mediante un voto de censura constructivo podrá sustituir a aquél*»⁹¹.

III. EL ESTATUTO JURÍDICO DE LA ASAMBLEA DE MADRID: AUTONOMÍA E INVOLABILIDAD DEL PARLAMENTO REGIONAL

3.1. La autonomía del Parlamento

Es principio consustancial a la propia esencia de las instituciones parlamentarias en el marco de un Estado de Derecho el reconocimiento de autonomía para la disciplina de su organización y funcionamiento internos. La Asamblea de Madrid, en su condición de institución representativa del pueblo de Madrid, goza, en efecto, de autonomía para el desarrollo de sus funciones.

A este respecto, han de destacarse dos prescripciones capitales.

⁹⁰ De forma matizada, Luis Aguiar de Luque, partiendo de la ausencia de potestad de disolución de la Asamblea por el Presidente de la Comunidad, entiende que la Ley 5/1990 parte de una cuestionable hermenéutica de las disposiciones estatutarias, situándose en la línea de «apurar la forzada interpretación de los silencios estatutarios». Vid. «El Gobierno de la Comunidad de Madrid», Capítulo 10 de la obra colectiva *Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid*, op. cit., pp. 194 y 195.

⁹¹ Cfr. «Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías», op. cit., p. 101.

De un lado, el Estatuto de Autonomía realiza un expreso reconocimiento de la autonomía reglamentaria⁹². Así lo afirmaba ya el artículo 13 del texto originario y, de forma más precisa, se prescribe en el vigente artículo 12:

«1. La Asamblea se dotará de su propio Reglamento, cuya aprobación y reforma serán sometidas a una votación final sobre su totalidad, que requerirá el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los Diputados.

2. El Reglamento determinará, de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto, las reglas de organización y funcionamiento de la Asamblea, especificando, en todo caso, los siguientes extremos:

a) Las relaciones entre la Asamblea y el Gobierno.

b) El número mínimo de Diputados necesario para la formación de los Grupos Parlamentarios.

c) La composición y funciones de la Mesa, las Comisiones y la Diputación Permanente, de manera que los Grupos Parlamentarios participen en estos órganos en proporción al número de sus miembros.

d) Las funciones de la Junta de Portavoces.

e) La publicidad de las sesiones y el quórum y mayorías requeridos.

f) El procedimiento legislativo común y los procedimientos legislativos que, en su caso, se establezcan.

g) El procedimiento de elección de los Senadores representantes de la Comunidad de Madrid.»

Por su parte, el artículo 16.2 del propio Estatuto de Autonomía dispone:

«El Reglamento establecerá las iniciativas parlamentarias que permitan a la Asamblea ejercer el control ordinario del Gobierno y obtener del mismo y de la Administración de la Comunidad la información precisa para el ejercicio de sus funciones. El Reglamento regulará, asimismo, el procedimiento a seguir para la aprobación por la Asamblea, en el ejercicio de sus funciones de impulso, orientación y control de la acción de gobierno, las resoluciones o mociones de carácter no legislativo.»

Se establece, consecuentemente, una reserva material en favor de dicho cuerpo normativo, al cual le corresponde regular la organización y el funcionamiento de la Asamblea; los tradicionales *interna corporis acta*.

⁹² La mayoría de los Estatutos de Autonomía realizan un expreso reconocimiento de la autonomía reglamentaria: artículos 27.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; 28.1 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; 13.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; 12.1 del Estatuto de Autonomía de Galicia; 24.7 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares; 16.1 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra; 27.1, párrafo segundo, del Estatuto de Autonomía del País Vasco; 12.1 del Estatuto de Autonomía de Cantabria; 18.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja; 27.1 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia; 14.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; 14.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón; 12.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias; 19.1.d) del Estatuto de Autonomía de Extremadura; 9.1 y 12.1.g) del Estatuto de Autonomía de Ceuta; y 9.1 y 12.1.g) del Estatuto de Autonomía de Melilla; en el Estatuto de Autonomía de Cataluña no se reconoce explícitamente, si bien diversos preceptos hacen referencia al Reglamento del Parlamento, como los artículos 32.1 y 34.2; por su parte, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se encuentra en la misma situación, por ejemplo, su artículo 11.

De otro, prescripción ciertamente significativa en este sentido es la constituida por el artículo 84 del vigente Reglamento de la Cámara, norma, no se olvide, que «goza» del rango de ley. En efecto, el meritado precepto, que principia la regulación de los medios materiales y personales de la Asamblea, dispone taxativamente en su apartado 1 lo siguiente:

«La Asamblea goza de personalidad jurídica propia para el cumplimiento de sus fines y ejerce sus funciones con autonomía administrativa en la organización y gestión de sus medios personales y materiales.»

Ningún precepto análogo existe en la disciplina reglamentaria de los demás Parlamentos autonómicos —como tampoco respecto de las dos Cámaras que conforman las Cortes Generales—, constituyendo, por ende, el reconocimiento expreso de la personalidad jurídica propia del Parlamento una auténtica singularidad en nuestro ordenamiento comparado.

3.1.1. *La autonomía reglamentaria*

Presupuesta la afirmación de la autonomía reglamentaria que realiza el reproducido artículo 12 del vigente Estatuto, la relevancia del Reglamento parlamentario como norma jurídica básica de la actividad de la Cámara comporta la exigencia de una mayoría cualificada para su aprobación y reforma, exigiéndose, en una votación final sobre su totalidad, el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los Diputados.

La Disposición Adicional segunda del vigente Reglamento dispone, en este sentido:

«1. La reforma del presente Reglamento se tramitará por el procedimiento legislativo común previsto en el mismo para las proposiciones de ley de los Diputados y de los Grupos Parlamentarios, excluyéndose en todo caso los trámites de criterio y conformidad del Consejo de Gobierno.

2. La aprobación de las proposiciones de reforma del Reglamento requerirá el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del texto.»

3.1.1.A) *Las originarias «Normas Reglamentarias Provisionales de la Asamblea»*

La labor de conformación normativa de su organización y funcionamiento internos fue abordada por el Parlamento autonómico en su I Legislatura.

En su sesión constitutiva, de 8 de junio de 1983, la Asamblea de Madrid, a modo de Reglamento Provisional, aprobó la Resolución número 1 del Pleno, comprensiva de las «Normas Reglamentarias Provisionales de la Asamblea», que rigieron el funcionamiento de la institución durante su primer período de sesiones.

Las precitadas *Normas Reglamentarias Provisionales* —producto de un borrador cuya redacción se encomendó al Letrado de la Cámara D. José Maldonado Samper—, constituían en realidad una reproducción de las prescripciones del Reglamento del Congreso de los Diputados. Se iniciaba así una tendencia, similar a la registrada en las demás instituciones autonómicas⁹³, que ha orientado el funcionamiento de la institución hasta nuestros días, desconocedora de las peculiaridades, tanto desde el punto de vista competencial como funcional, de la Asamblea de Madrid. Ciertamente, el criterio adoptado pudo ser correcto en el momento constitutivo —«para echar a andar»—, y desde luego lo era desde el punto de vista estrictamente técnico jurídico, pero adolece en su esencia de serios inconvenientes para su posterior aplicación, consecuencia de una forzada analogía con el Congreso⁹⁴.

3.1.1.B) *El Reglamento de 1984*

Posteriormente, en ejercicio de las facultades conferidas a la Asamblea por el originario artículo 13.2 del Estatuto de Autonomía, se procedió a la aprobación por Resolución del Pleno, en la sesión celebrada el 18 de enero de 1984, del Reglamento de la Asamblea de Madrid⁹⁵, texto vigente hasta la IV Legislatura —resultando derogado con la entrada en vigor del actual Reglamento de 30 de enero de 1997—.

El Reglamento de 1984 era un texto de extensión media, integrado por 172 artículos, estructurados en doce Títulos, una Disposición Adicional, tres Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y tres Disposiciones Finales.

En líneas generales, su estructura y normativa eran fiel reflejo del proceso de mimetismo respecto del Reglamento del Congreso de los Diputados observado en los Parlamentos regionales, respondiendo numerosos preceptos *ad pedem literae* a lo dispuesto en los *interna corporis* del Congreso. Este hecho provocó disfuncionalidades nada desdeñables, no sólo por el acentuado carácter plurifuncional inherente a la Cámara regional, sino, entre otros aspectos, por la inadecuación de los mecanismos de control previstos a la realidad y estructura de los órganos sometidos al mismo, así como por la propia articulación de los grupos parlamentarios.

⁹³ La única excepción la constituye el Parlamento de Navarra, cuyo Reglamento manifestó su predilección por el modelo del Reglamento del Senado.

⁹⁴ Es cierto que el vigente Reglamento, mucho más detallista, ha intentado subsanar algunas deficiencias; pero no menos cierto es que en el futuro habrá de efectuarse una regulación más acorde con las necesidades específicas de la Cámara autonómica, y en el proceso de elaboración de dicha regulación —sin perjuicio de la indefectible perspectiva política— ha de reconocerse un papel determinante a los Servicios Jurídicos de la Cámara —justamente el que no se reconoció en el proceso de reforma que concluyó con la aprobación del Reglamento en vigor—.

⁹⁵ El texto fue publicado en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, núm. 83, de 6 de abril.

3.1.1.C) *El vigente Reglamento de 1997*

En sesión plenaria, de carácter extraordinario, celebrada con fecha de 30 de enero de 1997, la Cámara se dotó de una nueva norma reguladora de su organización y funcionamiento internos, la cual, a efectos de su entrada en vigor, fue publicada en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 82, de 31 de enero de 1997.

El nuevo Reglamento, aprobado de forma un tanto apresurada y sin haberse solicitado el parecer de los Servicios Jurídicos de la Cámara, es un texto extenso y detallista, conformado por 245 artículos, dos Disposiciones Adicionales, tres Transitorias, tres Derogatorias y dos Finales. Los 245 artículos se agrupan en títulos, hasta un total de 23, computado el Título Preliminar. Algunos de los títulos, concretamente el II, el IV, el VI, el VII, el X, el XI, el XIII, el XIV, el XIX y el XX, se dividen en capítulos, estructurándose determinados capítulos en secciones.

En su conjunto, y no obstante algunos defectos que pueden percibirse *icto oculi*, el Reglamento mejora la disciplina hasta entonces vigente, incorporando el contenido de algunas normas interpretativas previamente en vigor. No obstante, no puede dejar de indicarse que su vocación detallista en extremo introduce en ciertos aspectos un grado de rigidez ajeno a la ductilidad inherente a la vida parlamentaria.

De su contenido sustantivo ha de destacarse que se potencian los instrumentos de control-fiscalización, aunque, como es sabido, su potenciación nunca es suficiente en un Estado intervencionista. Y es que en los mismos reside hoy, sin lugar a dudas, la propia operatividad de la institución parlamentaria⁹⁶.

Conforme se indicó con anterioridad, la Disposición Adicional segunda determina que la tramitación de su eventual reforma se desarrollará por el procedimiento legislativo común previsto para las proposiciones de ley de los Diputados y de los Grupos Parlamentarios, excluyéndose en todo caso los trámites de criterio y conformidad del Consejo de Gobierno.

Finalmente, no puede dejar de hacerse referencia a la singular Transitoria tercera, cuya mera lectura produce sonrojo⁹⁷. Afortunadamente, en un Estado de Derecho los órganos competentes del Poder Judicial ya han tenido

⁹⁶ Me remito al epígrafe VIII, «La función de control político como núcleo de la actividad de los Parlamentos autonómicos», del Estudio Preliminar de la obra de Arévalo Gutiérrez, Marazuela Bermejo y Del Pino Carazo, *Los Reglamentos de los Parlamentos autonómicos*, op. cit., pp. 72 a 83.

Asimismo, especial interés reviste el «Debate» sobre las peculiaridades del control parlamentario en las Comunidades Autónomas reproducido en la obra colectiva *Nuevos retos del control parlamentario: Comunidades Autónomas y Unión Europea*, op. cit., pp. 129 a 205.

⁹⁷ La meritada Transitoria —que pretendía dar cobertura a cualesquiera determinaciones en materia de personal adoptadas con carácter previo, confiriendo a las mismas «valor, fuerza y rango» de ley autonómica y, por ende, sustrayéndolas del control contencioso-administrativo que culmina en nuestro sistema la garantía de la legalidad de la actuación administrativa—, es del siguiente tenor literal: «Hasta la aprobación por el Pleno del Estatuto del Personal de la Asamblea de Madrid a que se refiere el artículo 87 del presente Reglamento, el régimen jurídico del personal al servicio de la Cámara será el establecido en el Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid, aprobado mediante Acuerdo de la Mesa de 6 de septiembre de 1988 y reformado por Acuerdos de la Mesa de 10 de junio de 1991 y de 18 de mayo de 1995, considerándose

ocasión de ponderar su exacta virtualidad que, en ningún caso, puede servir de cobertura para la convalidación de actos nulos de pleno derecho adoptados con anterioridad a su entrada en vigor. Al respecto me remito a la Sentencia de 14 de septiembre de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en los recursos 2.221/1995 y 599/1996, así como a la ulterior Sentencia, del propio órgano jurisdiccional, de 22 de septiembre de 1999, dictada en los recursos 1.579/1995 y 1.624/1995.

3.1.2. *La autonomía financiera*

Si esencial a la institución parlamentaria es la disciplina de su organización y funcionamiento internos, no menos lo es la capacidad de adoptar sus propias decisiones en materia financiera, axioma indefectible que han de respetar los ejecutivos de manera irrefragable, y al que no pueden renunciar las Cámaras so pena de perder no sólo uno de sus mayores privilegios: la independencia funcional, sino la garantía de su libertad, al no existir *in esse* poder sin poder económico. En este mismo sentido, muy certeramente, se ha afirmado que: «Mal podrán los cuerpos representativos ejercer sus funciones constitucionales» —para el caso que nos ocupa, añadimos, «o estatutarias»— «si en este extremo estuviesen sujetos a la voluntad de los órganos que formalmente le están sometidos. Las Cámaras difícilmente podrían controlar y fiscalizar al Gobierno y a la Administración Pública si no contasen con los recursos materiales y financieros precisos. Una limitación en este aspecto les colocaría bajo la voluntad de estas otras instancias llamadas precisamente a ser controladas. Como suprema institución estatal, corresponde a las Asambleas Legislativas determinar el volumen de ingresos necesarios para ejercer sus tareas. Al no haber instancia superior, es impensable otra forma de fijar su Presupuesto: una dejación en este punto equivaldría a la propia renuncia a este carácter supremo»⁹⁸.

Curiosamente, y a diferencia de la autonomía reglamentaria, esta vertiente del principio de autonomía parlamentaria no aparece expresamente consagrada por el Estatuto de Autonomía⁹⁹. En su defecto, el Reglamento

en cuanto tal y a dichos efectos ratificado y vigente como parte integrante de este Reglamento, con su mismo valor, fuerza y rango.»

⁹⁸ Cfr., Fernando Santaolalla López, «Derecho Parlamentario Español», Madrid, 1990, pp. 68 y 69.

⁹⁹ Nada atribuye en esta materia la Constitución a las Asambleas Legislativas, y la regulación de los estatutos puede sistematizarse en dos grandes grupos:

a) En primer lugar, el de los Estatutos que no reconocen expresamente la autonomía financiera de las Cámaras, disciplinando exclusivamente la aprobación por éstas de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Se trata de un total de ocho Estatutos, en concreto: Estatuto de Autonomía de Andalucía, artículos 27.3, 30.4 y 63; Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, artículos 19.1 y 24.6; Estatuto de Autonomía de Cataluña, artículo 49; Estatuto de Autonomía de Madrid, artículos 16.3.a) y 61; Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, artículos 22, 27.1 y 46; Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, artículos 11.a) y 55; Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta, artículos 12.1.e) y 40; y Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, artículos 12.1.e) y 40.

de la Cámara aprobado en 1997, como ha demostrado cumplidamente Marazuela Bermejo¹⁰⁰, con una regulación prolija se ocupa de afirmar de modo inequívoco dicho principio. Por todos, me remito a sus artículos 49.1.f), 55.2, 84 y 89 a 95, limitándome aquí a destacar que el proyecto de Presupuesto de la Asamblea es elaborado y aprobado anualmente por la Mesa de la Cámara, integrándose, como Sección independiente, en el correspondiente Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

3.1.3. *La autonomía organizativa: el Reglamento de Régimen Interior y el Estatuto de Personal*

Las Asambleas Legislativas ejercen sus funciones con autonomía administrativa en la organización y gestión de sus medios personales y materiales. A estos efectos, han de disponer de los medios propios necesarios para el cumplimiento de sus funciones, especialmente de servicios de asesoramiento, técnicos y de documentación.

Lo anterior teniendo presente, en todo caso, que la naturaleza de la relación que vincula al personal con la Cámara en que prestan sus servicios

b) En segundo término se encuentran los Estatutos que explícitamente reconocen a los Parlamentos la aprobación de sus Presupuestos a la vez que la de los generales de la Comunidad, además de alguna que otra materia importante, así: Estatuto de Autonomía de Aragón, artículos 14.1, 12.1 y 55; Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, artículos 28.1, 23.1, 24.10 y 47.1; Estatuto de Autonomía de Canarias, artículos 12.7, 13.b), 60.1.c) y 61.1; Estatuto de Autonomía de Cantabria, artículos 8.1, 9.6, 12.2 y 56; Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, artículos 9.2.b), 11.2 y 51; Estatuto de Autonomía de Castilla y León, artículos 13.4, 15.2 y 50; Estatuto de Autonomía de Extremadura, artículos 20.c), 19.c) y 60.a); Estatuto de Autonomía de Galicia, artículos 10.1.b), 12.2 y 53.1; Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, artículos 11 y 16.1; Estatuto de Autonomía de La Rioja, artículos 18.tres, 16.1, 19.Uno.d) y 56; y Estatuto de Autonomía del País Vasco, artículos 25.1, 27.1, párrafo final, y 44.

Además de la autonomía presupuestaria, los Parlamentos se procuran, por la funcionalidad que aporta, la autonomía financiera o económica, más amplia, en la que se engloba la autonomía patrimonial. Nadie puede poner en duda la necesidad de contratar no sólo medios personales, sino, además, materiales. Sin embargo, casi todos los Parlamentos adolecen de importantes lagunas en la atribución de la base de esta proyección del principio de autonomía, que no es otra que la personalidad jurídica, sólo proclamada expresamente de manera inequívoca y ciertamente significativa por el artículo 84 del vigente Reglamento de la Asamblea de Madrid; norma, no se olvide, que goza del rango de ley.

¹⁰⁰ Poco, si es que algo cabe, es posible añadir al sólido y documentado trabajo, ya citado, de Marazuela Bermejo, publicado con el título «El régimen económico y presupuestario de la Asamblea de Madrid» en dos partes. La primera en el núm. 1 de la revista *Asamblea*, junio 1999, pp. 105 a 143. La segunda en el núm. 2 de la propia revista, diciembre 1999, pp. 103 a 138. Al mismo me remito en absoluto.

Asimismo, con un carácter general, *vid.* el estudio comparado de Marazuela Bermejo y Del Pino Carazo, «El procedimiento de elaboración y aprobación de los Presupuestos de las Cámaras», en la obra colectiva *I Jornadas Parlamentarias de la Asamblea de Madrid. «Parlamento y Presupuestos*, editadas por la Asamblea de Madrid y el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2002, pp. 31 a 83. En el propio volumen se contienen otras aportaciones de notable interés, destacando, a nuestros efectos, los trabajos de Sáinz Moreno, «La Autonomía financiera y patrimonial de las Cámaras», pp. 7 a 20; Santamaría Pastor, «El Régimen jurídico y la naturaleza de los Presupuestos de las Cámaras. Relaciones con los Presupuestos Generales: el principio de legalidad», pp. 21 a 30; y José Antonio Vóboras Jiménez, «Las modificaciones de los Presupuestos de las Cámaras», pp. 85 a 94.

es de carácter estatutario, como es propio del régimen general de la función pública, sin perjuicio de la prestación de determinados servicios en régimen laboral. La singularidad radica en que la relación de sujeción especial del funcionario lo es en este singular supuesto con la Administración Parlamentaria y no con el aparato servicial que es propio del Ejecutivo en los sistemas de nuestro entorno cultural. El Parlamento, en este ámbito, desarrolla, consecuentemente, una actividad materialmente administrativa, no funciones inherentes a su condición de poder legislativo¹⁰¹. De lo anterior se colige que el control de la actividad desarrollada corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme proclama de forma inequívoca el artículo 1.3.a) de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Esta autonomía administrativa, que el artículo 72 de la Constitución afirma en relación con las Cortes Generales, no goza de idéntico reconocimiento expreso en la norma suprema para las instituciones autonómicas. Tampoco los Estatutos han consagrado de forma uniforme esta prerrogativa de las Cámaras, razón por la cual ha de interpretarse su reconocimiento implícito, es decir, entendiendo que las Cámaras, con base en su autonomía reglamentaria, pueden disciplinar sobre su personal. Así lo han entendido los distintos reglamentos parlamentarios.

En este marco, conforme determina el artículo 84 del vigente Reglamento de la Asamblea de Madrid —y previamente establecía el art. 57 del Reglamento de 1984—, la Asamblea ejerce sus funciones con autonomía administrativa en la organización y gestión de sus medios personales y materiales. A estos efectos, dispondrá de los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones, especialmente de servicios de asesoramiento, técnicos y de documentación.

En la disciplina de los servicios administrativos la norma capital está constituida por el Reglamento de Régimen Interior. Dispone al respecto el artículo 85 del Reglamento de la Asamblea:

«1. Corresponderá a la Mesa la regulación del régimen interior de los servicios administrativos de la Asamblea mediante la aprobación del oportuno Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid.

2. El Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid regulará la organización, funcionamiento y procedimiento de la Secretaría General y de las demás unidades de la Cámara, así como la actividad materialmente administrativa que aquélla desarrolle.»

Y añade el artículo 86 respecto de la Secretaría General:

«1. A la Secretaría General, con el carácter de unidad funcional central, corresponderá la asistencia, asesoramiento y apoyo técnico y jurídico de los órganos parlamentarios, así

¹⁰¹ Vid., con carácter general, el ya clásico estudio de Luis María Díez-Picazo Giménez, «La autonomía administrativa de las Cámaras Parlamentarias», *Cuadernos de los Studia Albornotiana*, núm. 2, Zaragoza, 1985, pp. 65 y ss.

como la gestión y ejecución de la actividad materialmente administrativa de la Asamblea bajo la dirección del Presidente.

2. Al frente de la Secretaría General se encontrará el Secretario General, asistido por los Letrados integrados en aquélla.

3. El Secretario General será nombrado por el Presidente, previa designación por la Mesa, a propuesta del propio Presidente, de entre el personal funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Letrados de la Asamblea de Madrid, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o de las Cortes Generales.»

Por su parte, en cuanto al régimen jurídico del personal, el artículo 87, introduciendo un grado de rigidez inusitado en el procedimiento de aprobación y reforma del Estatuto del Personal —el cual ni siquiera se exige en el modelo del Congreso y del Senado—, dispone:

«1. Corresponderá al Pleno la regulación del régimen jurídico del personal al servicio de la Asamblea mediante la aprobación del oportuno Estatuto del Personal de la Asamblea de Madrid.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el Estatuto del Personal de la Asamblea de Madrid será aprobado por el Pleno con arreglo al procedimiento legislativo previsto en el presente Reglamento para la tramitación de proyectos de ley en lectura única, correspondiendo en tal caso la iniciativa al respecto a la Mesa.

3. La reforma del Estatuto del Personal de la Asamblea de Madrid se llevará a cabo conforme al mismo procedimiento seguido para su aprobación.»

Complementa sus prescripciones el Reglamento con el artículo 88, que atribuye a la Mesa de la Cámara, a propuesta de la Secretaría General, la aprobación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria de la Asamblea.

Presupuestas las prescripciones reglamentarias, la Asamblea de Madrid ha disciplinado su propia organización mediante las siguientes normas:

3.1.3.A) *El Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid*

Inicialmente la Asamblea de Madrid se rigió en materia de régimen interior por las Normas Provisionales de 17 de octubre de 1984¹⁰², las cuales fueron posteriormente sustituidas por el Reglamento de 8 de noviembre de 1986¹⁰³.

Dicho cuerpo normativo fue, a su vez, derogado y sustituido por el Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid aprobado por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 6 de septiembre de 1988¹⁰⁴.

¹⁰² Cfr. *Boletín Oficial de la Asamblea*, núm. 62, de 30 de octubre de 1984.

¹⁰³ Cfr. *Boletín Oficial de la Asamblea*, núm. 188, de 27 de noviembre de 1986.

¹⁰⁴ Cfr. *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 54, de 14 de septiembre de 1988; corrección de errores en el *Boletín*, núm. 56, de 22 de septiembre de 1988.

Tras el profundo y amplio proceso de reforma administrativa de la Cámara acometido por la Mesa desde el comienzo de la V Legislatura, previa aprobación por el Pleno del nuevo Estatuto de Personal, la reforma global se concretó en el vigente Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid, aprobado, conforme al artículo 85.1 del Reglamento parlamentario, por Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de fecha 3 de diciembre de 2001¹⁰⁵. El citado Acuerdo procedió a la derogación del precedente Reglamento de 1988, entrando en vigor con fecha de 5 de diciembre de 2001.

De este cuerpo normativo interesa destacar el tenor de su artículo 1.1, donde se procede a la afirmación expresa de la autonomía de la Cámara, en los siguientes términos:

«La Asamblea de Madrid tiene autonomía en la organización de su gobierno y régimen interior y goza de personalidad jurídica propia en la gestión administrativa, económica, financiera y de personal, así como en las demás funciones que le estén legalmente atribuidas, rigiéndose por lo dispuesto en el presente Reglamento.»

3.1.3.B) *El Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid*

La Asamblea se rigió en materia de personal *ab initio* por el Estatuto de Personal de 17 de febrero de 1987¹⁰⁶.

El meritado texto fue sustituido por el ulterior Estatuto de Personal aprobado por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de fecha 6 de septiembre de 1988¹⁰⁷.

Tras la aprobación del vigente Reglamento en 1997, el referido texto del Estatuto, con una técnica ciertamente discutible desde el punto de vista jurídico y sin la debida actualización, fue transformado en nuevo Estatuto de Personal en virtud del Acuerdo del Pleno de la Asamblea de Madrid de 26 de abril de 1999¹⁰⁸. Tan sorprendente transformación tiene su origen en las, cuando menos, desafortunadas prescripciones contenidas en el artículo 87 y la Disposición Transitoria tercera del Reglamento de la Asamblea de Madrid de 1997 —a las que anteriormente se ha hecho referencia—. Nada más y nada menos que dichas prescripciones predican del Estatuto de Personal el mismo «valor, fuerza y rango» que es propio del Reglamento de la Cámara (*sic*). Al margen de la dudosa virtualidad de pretender excluir

¹⁰⁵ El texto vigente del Reglamento de Régimen Interior está publicado en el *Boletín Oficial de la Asamblea*, núm. 126, de 4 de diciembre de 2001.

¹⁰⁶ El Estatuto de Personal de 1987 fue publicado en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 207, de 11 de marzo de 1987.

¹⁰⁷ Cfr. *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 54, de 14 de septiembre de 1988. El propio texto fue ulteriormente publicado en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, núm. 226, de 22 de septiembre de 1988.

¹⁰⁸ El Acuerdo plenario de referencia fue objeto de publicación en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 214, de 26 de abril de 1999.

Para el análisis de la disciplina establecida por el mismo puede consultarse De Alba Bastarrechea, «El régimen jurídico del personal al servicio de la Asamblea de Madrid», *op. cit.*

el control de la jurisdicción contencioso-administrativa, no alcanzo a encontrar ulterior funcionalidad, resultando ciertamente susceptible de crítica la rigidez que en su procedimiento de aprobación y modificación se introduce, en lugar de atribuir dicha competencia a la Mesa de la Cámara.

Como culminación del proceso de reforma organizativa afrontado por la Mesa de la Cámara desde el inicio de la V Legislatura —previa encomienda de una auditoría externa de personal— y conforme a lo dispuesto por el reiterado artículo 87 del Reglamento en vigor, el Pleno de la Cámara adoptó, con fecha de 28 de noviembre de 2001, Acuerdo por el que se aprueba la reforma global del Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid.

El texto en vigor, que procedió a la derogación del precedente —de 26 de abril de 1999—, se reproduce en el número 124 del *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, de 29 de noviembre de 2001, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

Conforme declara su propia Exposición de Motivos, la profunda reordenación de la función pública parlamentaria adoptada se orienta en cuatro líneas fundamentales:

«a) La consecución de una mayor vinculación del personal de la Cámara al servicio efectivo de los Diputados de la Asamblea, diseñando desde una perspectiva global los instrumentos personales y organizativos adecuados para el cumplimiento de esta finalidad, que tendrá su concreción más visible en la creación de una Oficina de Atención al Diputado suficientemente dotada.

b) La racionalización de los distintos regímenes funcionariales, integrando en Cuerpos y Escalas jerárquicamente organizadas las antiguas plazas singulares que habían alcanzado un alto grado de dispersión, creando así nuevos Cuerpos y Escalas y procediendo a la integración en los mismos también de funcionarios pertenecientes a Cuerpos generalistas al considerar más adecuado promover, en determinados supuestos, vías de especialización.

c) La simplificación de los órganos de dirección administrativa de la Cámara, mediante la reducción de su número y la mayor definición de sus cometidos, reforzando la función directiva de la Secretaría General.

d) La potenciación de los servicios informáticos y audiovisuales de la Asamblea para promover una progresiva y adecuada implantación en la Cámara de los instrumentos, sistemas y equipos de las nuevas tecnologías.»

El artículo 3 del vigente Estatuto de Personal establece el régimen de Derecho supletorio en los siguientes términos:

«Para lo no previsto en el Estatuto de Autonomía, Reglamento de la Asamblea, en el presente Estatuto y en el Reglamento de Régimen Interior y normas o acuerdos que los desarrollen, regirá supletoriamente, en primer lugar la legislación de la Comunidad de Madrid sobre función pública y, en segundo lugar, la legislación del Estado.»

Como normas complementarias de la anterior me limito a destacar las dos siguientes:

- Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, en su sesión de fecha 28 de mayo de 1997, sobre Vacaciones, Permisos y Licencias del Personal de la Asamblea de Madrid¹⁰⁹.
- Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, adoptado en su sesión de 24 de octubre de 2002, sobre «Horario del Personal al Servicio de la Asamblea de Madrid»¹¹⁰, articulado sobre la base de una jornada de trabajo de treinta y seis horas y treinta minutos semanales, distribuida de acuerdo con el tipo de horario a que esté sujeto el personal.

3.1.4. La autodiquía parlamentaria

Asimismo, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas gozan del privilegio de la autodiquía o autojusticia, esto es, la facultad de determinar sus propios recursos internos, parlamentarios y administrativos, que son resueltos por los órganos internos correspondientes.

Que este principio, de crucial relevancia, no es, sin embargo, omnímodo y todopoderoso, lo demuestra el hecho de que ha debido plegarse a otro principio constitucional de carácter superior, el principio de legalidad que sustenta el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales de terceros, cuya eventual lesión abre la vía de la fiscalización y control de los actos por no resultar *proprio modo* un acto interno ajeno al control por parte de los otros dos Poderes y, en especial, del Judicial. Como es de sobra conocido, tanto en el aspecto puramente parlamentario como en los aspectos propiamente administrativos, ha tenido ocasión el Tribunal Constitucional de sentar una frondosa y desigual doctrina¹¹¹.

En el supuesto específico de la Asamblea de Madrid la autodiquía parlamentaria se afirma en el artículo 81 del vigente Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid, el cual dispone al respecto:

- «1. Ponen fin a la vía administrativa las Resoluciones del Presidente y los Acuerdos de la Mesa.
2. Las Resoluciones de la Secretaría General y los actos definitivos de las autoridades inferiores son recurribles en alzada ante la Mesa.
3. El Recurso Extraordinario de Revisión se interpondrá cuando proceda ante la Mesa de la Asamblea.
4. La reclamación administrativa previa a la vía judicial civil se dirigirá al Presidente y la previa a la vía judicial laboral a la Secretaría General.

¹⁰⁹ El Acuerdo de referencia fue objeto de publicación en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 108, de 6 de junio de 1997.

¹¹⁰ El vigente Horario del Personal fue objeto de publicación en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 180, de 25 de octubre de 2002.

¹¹¹ La cuestión considerada es tratada, entre otros temas, en el excelente trabajo de Del Pino Carazo, «El recurso de amparo contra actos parlamentarios de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas»; en *Asamblea*, núm. 3, junio 2000, en especial pp. 93 y ss., con la bibliografía allí analizada.

5. *Los actos administrativos de la Asamblea de Madrid serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en los términos, condiciones y formalidades contenidos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.»*

Presupuesto lo anterior, agotada la vía administrativa previa, la facultad para conocer de los actos que emanan de los órganos de gobierno de la Asamblea de Madrid en materia de régimen patrimonial y de personal corresponde, en única instancia, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, conforme a lo dispuesto por el artículo 74.1.c) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en mérito del cual, la referida Sala conocerá de los recursos que se deduzcan en relación con *«los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial»*.

En este orden de ideas, ha de recordarse que la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tras determinar en su artículo 1.3.c) que dicho orden jurisdiccional conocerá de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al Derecho público adoptados por los órganos competentes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, prescribe explícitamente dicha competencia en su artículo 10.c)¹¹².

3.2. La inviolabilidad de la Cámara

De forma paralela a la autonomía, y directamente derivada de la especial protección que históricamente requirieron los Parlamentos frente a la Corona, se proclama la inviolabilidad de la institución representativa.

Ciertamente, en la actualidad, más que como reserva y garantía frente a los ataques de otro Poder, se configura la inviolabilidad como una garantía del propio orden, en este caso, estatutario, asegurando, con ello, la estabilidad y el orden de la comunidad política. Así es afirmada en los distintos Estatutos de Autonomía, los cuales, con la excepción de los casos de Ceuta, Melilla

¹¹² Al margen de la competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente para conocer de los actos que emanan de los órganos de gobierno de las Cámaras en materia de régimen patrimonial y de personal, que el artículo 12.c) atribuye al Tribunal Supremo respecto de los actos y disposiciones de las Cortes Generales, tampoco ha sido ajeno el Tribunal Constitucional a ejercer el control sobre ciertos actos materialmente administrativos presuntamente lesivos de los derechos de terceros; al efecto, considérense los siguientes autos y sentencias del Tribunal Constitucional: ATC 241/1984, ATC 254/1984, ATC 536/1984, ATC 255/1985, STC 296/1985, STC 139/1988, ATC 219/1989, STC 214/1990, STC 15/1992, ATC 46/1993 y STC 121/1997.

y, precisamente, de la Comunidad de Madrid, se limitan a su mera declaración¹¹³.

El Reglamento de la Asamblea de Madrid, en su artículo 5, ha venido a subsanar lacónicamente la omisión estatutaria: «*La Asamblea es inviolable.*»

La protección parlamentaria, no obstante lo anterior, queda especialmente garantizada no por las respectivas normas institucionales básicas, sino por otra Ley Orgánica, el vigente Código Penal de 23 de noviembre de 1995, a través de la tipificación de diversas figuras delictivas recogidas en el mismo:

- a) Dentro del Título XXI, «Delitos contra la Constitución», en el Capítulo I, «Rebelión», determina el artículo 472: «*Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: 4.º Disolver [...] cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias.*» Sin poder detenernos en su consideración, someramente, indicaremos que los artículos 471 a 484 detallan más específicamente otros aspectos del tipo, como el elemento subjetivo, los sujetos, la participación y las penas.
- b) Dentro del mismo Título XXI, en el Capítulo III, «De los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes», el Código Penal incorpora la Sección 1.ª bajo la rúbrica «Delitos contra las Instituciones del Estado», donde se describen diversos tipos cuya finalidad es, en esencia, garantizar la inviolabilidad de los Parlamentos autonómicos, obviamente incluida la Asamblea de Madrid:

Artículo 493: «*Los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes [...] de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años.*»

Artículo 494: «*Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes [...] de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento.*»

Artículo 495: «*1. Los que, sin alzarse públicamente, portando armas u otros instrumentos peligrosos, intentaren penetrar en las sedes [...] de la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, para presentar en persona o colectivamente peticiones a los mismos, incurrirán en la pena de prisión*

¹¹³ Al respecto, *vid.* artículos 25.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; 12.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón; 23.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; 11.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias; 8.2 del Estatuto de Autonomía de Cantabria; 9.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha; 10.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; 30.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña; 19.1 del Estatuto de Autonomía de Extremadura; 10.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia; 19.2 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares; 21.2 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia; 13.1 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra; 16.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja; 10 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; y 25.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

de tres a cinco años. 2. La pena prevista en el apartado anterior se aplicará en su mitad superior a quienes promuevan, dirijan o presidan el grupo.»

Artículo 496: «El que injuriare gravemente [...] a una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, hallándose en sesión, o a alguna de sus Comisiones en los actos públicos en que las representen, será castigado con la pena de multa de doce a dieciocho meses. El imputado de las injurias descritas en el párrafo anterior quedará exento de pena si se dan las circunstancias previstas en el artículo 210.»

Artículo 497: «1. Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año quienes, sin ser miembros [...] de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, perturben gravemente el orden de sus sesiones. 2. Cuando la perturbación del orden de las sesiones a que se refiere el apartado anterior no sea grave, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses.»

Artículo 499: «La autoridad o funcionario público que quebrantare la inviolabilidad de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, será castigado con las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, sin perjuicio de las que pudieran corresponderle si el hecho constituyera otro delito más grave.»

IV. EL ESTATUTO JURÍDICO DEL DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DE MADRID

4.1. La condición de Diputado; adquisición, suspensión y pérdida de la misma

Celebrados los comicios electorales, y aunque los derechos y prerrogativas son efectivos desde el momento mismo en que el Diputado es proclamado «electo», para la adquisición de la «condición de parlamentario autonómico» se exige la presentación en la Secretaría General de la Cámara de la credencial expedida por la Junta Electoral y cumplimentar la pertinente declaración, a efectos del examen de incompatibilidades, reflejando los datos relativos a profesión y cargos públicos que desempeñe.

Además, para adquirir la «condición plena de Diputado», el Estatuto de la Comunidad de Madrid, en su artículo 11.2 —como ya hacía el originario artículo 12.4—, exige expresamente la prestación de promesa o juramento de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Adquirida la condición, entra en vigor el régimen jurídico establecido tanto por el Reglamento de la Cámara como por la Ley 8/1986, de 23 de julio, del Estatuto del Diputado¹¹⁴, a tenor de cuyo artículo 1, *in fine*, «la condición y dignidad de Diputado de la Asamblea de Madrid es la de representante de los ciudadanos madrileños en la Asamblea de Madrid».

¹¹⁴ Cfr. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 30 de julio de 1986; con corrección de errores en el ulterior *Boletín Oficial* de 4 de agosto de 1986.

De conformidad con su artículo 4, los Diputados tendrán el tratamiento de «Ilustrísima», salvo el Presidente, a quien se confiere el tratamiento de «Excelencia».

En la meritada Ley se regulan, entre otros extremos, los signos que permiten mostrar externamente la condición y dignidad de Diputado, esto es, a tenor del artículo 5, el Carné, la Medalla y la Insignia de Diputado.

Respecto del Carné, el artículo 6 dispone:

«El carné de Diputado, firmado por el Presidente de la Asamblea, contendrá, como mínimo, el nombre, firma y foto del Diputado y el número de su Documento Nacional de Identidad, con especificación de la legislatura.»

Por lo que respecta a la Medalla, a tenor del artículo 7:

«La Medalla de Diputado tendrá el diseño que se especifica en el Anexo, figurando en el reverso el nombre del mismo y la legislatura. Se usará mediante un cordón rojo carmesí, y un pasador de hebilla.

El Diputado recibirá del Presidente de la Asamblea la Medalla al adquirir reglamentariamente la condición plena de Diputado, pudiendo usarla en todos los actos oficiales en que esté presente hasta que se extinga o se pierda tal condición.»

Por último, en relación con la Insignia, el artículo 8 establece:

«La Insignia del Diputado se confeccionará de acuerdo con el modelo previsto en una Resolución del Presidente de la Asamblea.

El Diputado recibirá la Insignia al tiempo de la Medalla, pudiendo usarla a discreción hasta que se extinga o pierda su condición de Diputado.»

En el supuesto de que, celebradas tres sesiones plenarias, no adquiera su condición plena, quedarán suspendidos los derechos y prerrogativas del Diputado electo hasta que dicha adquisición se produzca —así lo establecía el originario art. 6 del Reglamento, de 18 de enero de 1984, y lo impone el vigente art. 12.3 del Reglamento de 1997—.

Además del supuesto de suspensión de la condición de Diputado a que acaba de hacerse referencia, dicha medida excepcional —a tenor del art. 19 del Reglamento de 1984, así como del artículo 13 del Reglamento en vigor, de 1997— procede:

Primero, como consecuencia del incumplimiento de los deberes inherentes a la disciplina parlamentaria, en los términos establecidos en los artículos 34 y 35 del Reglamento;

Segundo, cuando, siendo firme un auto de procesamiento, el Diputado se halle en situación de prisión provisional, mientras dure la misma; y,

Tercero, cuando una sentencia firme condenatoria lo imponga o cuando su cumplimiento implique imposibilidad de ejercer la función parlamentaria.

En todo caso, la suspensión requiere la pertinente declaración formal por la Mesa de la Cámara.

La pérdida de la condición, como hemos visto, se produce, a tenor de lo dispuesto por el artículo 10.1 del Estatuto originario —art. 10.2 del texto en vigor—, como consecuencia de la disolución de la Cámara o, en todo caso, cuatro años después de la elección, sin perjuicio de la prórroga en sus funciones de los miembros, titulares y suplentes, de la Diputación Permanente hasta la constitución de la nueva Cámara. Asimismo, ha de tenerse presente que la condición de Diputado también se pierde por las tres causas siguientes —a tenor del art. 20 del Reglamento de 1984, coincidente, en lo sustantivo, con el art. 14 del vigente—:

- 1.º Decisión judicial firme que anule la elección o la proclamación de Diputado;
- 2.º Fallecimiento o incapacitación del Diputado, declarada ésta por decisión judicial firme; y
- 3.º Renuncia hecha personalmente por el Diputado ante la Mesa de la Asamblea, entendiéndose cumplido el requisito con la remisión de un escrito al órgano rector.

4.2. Causas de inelegibilidad y circunstancias determinantes de la incompatibilidad

En cuanto al régimen de incompatibilidades, así como respecto de las causas de inelegibilidad, el Estatuto, en su artículo 11.4 —art. 12.1 del texto originario—, se limita a remitirse a la Ley electoral.

En concreto, la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid, establece en su artículo 3.2 las causas de inelegibilidad, determinado su artículo 5 las circunstancias que determinan la incompatibilidad con el mandato parlamentario.

En cuanto a las primeras, cuya calificación, a tenor del artículo 4.1 procede respecto de quienes incurran en alguna de las causas legalmente establecidas el mismo día de la presentación de su candidatura o en cualquier momento posterior hasta la celebración de las elecciones, el artículo 3.2 dispone:

«Son inelegibles:

- a) *Los incursos en cualquiera de las causas contenidas en el Capítulo II del Título I de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.*
- b) *El Presidente y los miembros del Gobierno de la Nación y sus Secretarios de Estado.*
- c) *Los Senadores, salvo los elegidos por la Comunidad de Madrid, tanto en elección directa como en aplicación del artículo 14.12 del Estatuto de Autonomía.*
- d) ¹¹⁵.

¹¹⁵ La letra d) del artículo 3.2 fue suprimida por el artículo 13.Uno de la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 28 de diciembre de 2001).

- e) *El Director General del Ente Público Radio Televisión Madrid y los Directores de sus sociedades.*
- f) *Los parlamentarios de las Asambleas de otras Comunidades Autónomas, y los miembros de sus Instituciones Autonómicas que por mandato legal deban ser elegidos por la Asamblea Legislativa respectiva.*
- g) *Los Presidentes y los miembros de los Consejos de Gobierno de las demás Comunidades Autónomas, así como los cargos de libre designación de los mismos.*
- h) *Los que ejerzan funciones o cargos conferidos y remunerados por un Estado extranjero.»*

Respecto de las incompatibilidades, sin entrar aquí en las peculiaridades propias de los Diputados que opten por el régimen de dedicación exclusiva —apartados 4, 5 y 6— el artículo 5 establece con carácter general, en sus tres primeros apartados, lo que sigue:

- «1. *Todas las causas de inelegibilidad recogidas en el artículo 3 lo son también de incompatibilidad.*
- 2. *Son además incompatibles:*
 - a) *Los comprendidos en los apartados a), b), c) y d) del número 2 del artículo 155 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.*
 - b) *Los miembros del Consejo de Administración del Ente Público “Radio Televisión Madrid”.*
 - c) *Los siguientes Altos Cargos de la Administración Pública de la Comunidad de Madrid, salvo que ostenten la condición de miembros del Gobierno:*
 - 1.º *Los Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos de las distintas Consejerías.*
 - 2.º *El Interventor General de la Comunidad de Madrid.*
 - 3.º *El Tesorero General de la Comunidad de Madrid.*
 - 4.º *El Director del Gabinete de Presidencia y los Jefes de Gabinete de las distintas Consejerías.*
 - 5.º *Los Gerentes, Presidentes ejecutivos, Directores Generales y Consejeros delegados de los organismos autónomos, empresas públicas y entes públicos de la Comunidad de Madrid.*
 - 6.º *Los Gerentes, Presidentes ejecutivos, Directores Generales y Consejeros delegados de las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de la Comunidad de Madrid.*
 - 7.º *Los demás cargos directivos, ejecutivos o no, de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, o de las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de la Comunidad de Madrid, cualquiera que sea su rango y denominación, cuando así lo establezca la normativa específica que les sea de aplicación.*
 - 8.º *El Presidente y Directores Generales o cargos directivos con rango de Director General o superior de los Consorcios y cualesquiera otros organismos con personalidad jurídica propia en los que participe la Administración Pública de la Comunidad de Madrid o cualquiera de sus organismos autónomos, entes, empresas o sociedades propias o de participación mayoritaria.*
 - 9.º *Todos aquellos titulares de puestos de libre designación o de confianza del Gobierno o de la Administración institucional de la Comunidad de Madrid con rango igual o superior al de Director General.*

10.º Los titulares de cualquier otro puesto de trabajo de la Comunidad de Madrid, cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe mediante Decreto del Gobierno¹¹⁶.

3. La condición de Diputado de la Asamblea de Madrid, sin régimen de dedicación exclusiva, es compatible con el ejercicio de actividades privadas, excepto con las siguientes, que serán incompatibles para todos los Diputados de la Asamblea de Madrid, con independencia de su régimen de dedicación:

a) Las actividades de gestión, defensa, representación, mandato, dirección y asesoramiento ante la Administración Pública de la Comunidad de Madrid, sus Entes y Organismos Autónomos, de asuntos cuya tramitación, informe o decisión corresponda a aquélla o a éstos. Se exceptúan las actividades de representación y administración del patrimonio personal o familiar en el ejercicio de un derecho reconocido por las leyes, así como el disfrute de los beneficios que se deriven de la aplicación automática de una disposición de carácter legal.

b) La actividad de contratista o fiador de obras, servicios, suministros o asistencias de carácter público o que implique cualquier relación de naturaleza contractual, prestacional, de concierto o convenio que se remunere con fondos o avales de la Comunidad de Madrid, así como formar parte de los órganos de dirección, gestión, representación o asesoramiento de empresas o sociedades mercantiles que se dediquen a dichas actividades.

c) La participación superior al 10 por 100 del capital en las empresas o sociedades mercantiles a que se refieren los apartados b) y c) de este número. Si dicha participación se verificase durante el mandato del Diputado como consecuencia de atribución patrimonial por actos mortis causa, el mismo procederá a encomendar la administración del patrimonio afectado a una entidad de gestión de valores y activos financieros registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el contrato de encomienda de gestión se darán a la entidad contratante las instrucciones generales a que habrá de ajustar su actuación durante el mandato del Diputado y hasta dos años después de su finalización, sin que durante dicho tiempo puedan aceptarse instrucciones personales del mismo ni de ninguna otra persona. La infracción de lo dispuesto en este apartado se pondrá en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.»

4.3. Inviolabilidad e inmunidad

Los parlamentarios autonómicos —que no están ligados por mandato imperativo alguno— gozan durante su mandato de los tradicionales privilegios de inviolabilidad e inmunidad, si bien ésta es parcial, como ha precisado genéricamente el Tribunal Constitucional —por todas, me remito a su Sentencia de 12 de noviembre de 1981—, habida cuenta de que no se exige previa autorización del Parlamento autonómico, el conocido supli-

¹¹⁶ El apartado 2 del artículo 5 responde a la redacción operada por el artículo 14 de la Ley 24/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 30 de diciembre de 2001), si bien la redacción del núm. 10.º de la letra c) fue introducida por el artículo 13.Dos de la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 28 de diciembre de 2001).

catorio, para ser procesados, mas sí se exige para la detención o retención, salvo en caso de flagrante delito¹¹⁷.

El artículo 11 del Estatuto, en sus apartados 5 y 6 —prácticamente en los mismos términos literales que introdujeron los apartados 2 y 3 del artículo 12 del texto originario—, dispone al respecto lo que sigue:

«5. Los Diputados gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

6. Durante su mandato los miembros de la Asamblea no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.»

El Reglamento de 1984 reiteraba los términos estatutarios en sus artículos 16 y 18 —inmunidad— y 17 —inviolabilidad—, ocupándose de dichas prerrogativas los vigentes artículos 23 —inviolabilidad— y 24 —inmunidad— del Reglamento de 1997.

En todo caso, ha de ponderarse que estos privilegios parlamentarios no sólo quedan garantizados por el Estatuto y el Reglamento parlamentario. De forma mucho más enérgica el Código Penal describe varios tipos delictivos para quien atente contra las funciones del Diputado, afectando, de uno u otro modo, su libertad de opinión y la libertad frente a las detenciones o retenciones:

Artículo 488: «Los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios,

¹¹⁷ Todos los Estatutos, salvo en los supuestos de Ceuta y Melilla, establecen expresamente lo pertinente: Estatuto de Autonomía de Andalucía, artículo 26.3; Estatuto de Autonomía de Aragón, artículo 17.5 y 6; Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, artículo 26.2; Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, artículo 23.1; Estatuto de Autonomía de Canarias, artículo 10.3; Estatuto de Autonomía de Cantabria, artículo 11.1; Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, artículo 10.3; Estatuto de Autonomía de Castilla y León, artículo 12.3; Estatuto de Autonomía de Cataluña, artículo 31.2; Estatuto de Autonomía de Extremadura, artículo 24.1; Estatuto de Autonomía de Galicia, artículo 11.3; Estatuto de Autonomía de Madrid, artículo 11.5 y 6; Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, artículo 25.2; Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, artículos 13.2 y 14; Estatuto de Autonomía del País Vasco, artículo 26.6; Estatuto de Autonomía de La Rioja, artículo 17.7; y Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, artículo 12.3. Ha de precisarse que en el caso de la Región de Murcia su Estatuto determina que a efectos de la inviolabilidad las funciones del parlamentario se entienden asumidas desde el acto de su proclamación como Diputado.

Asimismo, los Estatutos de Autonomía se hacen eco del aforamiento de los miembros de las Cámaras autonómicas, que sólo pueden ser inculcados, apresados y procesados: en caso de delitos cometidos en el territorio de la Comunidad por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad correspondiente (arts. 74.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y 26.6 del Estatuto de Autonomía del País Vasco); o, en todos los casos, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo si los hubiere cometido fuera de los límites de la Comunidad.

coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años.»

Artículo 500: «La autoridad o funcionario público que detuviere a un miembro [...] de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma fuera de los supuestos o sin los requisitos establecidos por la legislación vigente incurrirá, según los casos, en las penas previstas en este Código, impuestas en su mitad superior, y además en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a doce años.»

Artículo 501: «La autoridad judicial que inculpare o procesare a un miembro de [...] de una Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma sin los requisitos establecidos por la legislación vigente, será castigada con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de diez a veinte años.»

4.4. Derechos derivados de la condición de Diputado

4.4.1. Las percepciones económicas de los Diputados de la Asamblea de Madrid

Ab initio rigió en la Cámara autonómica, como en la mayoría de los Parlamentos regionales, el absurdo criterio de que los Diputados no podían obtener una retribución fija por su labor. Así lo prescribía el originario artículo 10.5 del Estatuto de Autonomía, en cuya virtud: «Los Diputados no percibirán una retribución fija por su cargo representativo, sino únicamente las dietas que se determinen por su ejercicio.»

Se trata de uno de los errores más ingenuos derivados de los Acuerdos Autonómicos de 1981, el cual ha lastrado de forma significativa el funcionamiento de nuestras instituciones representativas. Y no ya sólo porque el establecimiento de una retribución fija y digna es la única garantía para poder disponer de una clase política cuyo tono supere la mediocridad, permitiendo la oportuna «profesionalización» del trabajo político —profesionalización que, unida a un correcto régimen de responsabilidades, comportaría a medio plazo una verdadera economía de recursos públicos—, sino porque, desde el punto de vista operativo, la realidad demostró como la afirmación frente a dicho criterio de la percepción de dietas por asistencia a las sesiones parlamentarias generó una inflación en el trabajo parlamentario; inflación que, en absoluto, encontraba correspondencia con el volumen, profundidad y relevancia de los temas considerados, ni, a mayor abundamiento, comportaba una economía de los recursos públicos.

Como ya afirmé en otro lugar¹¹⁸, la descomunal aberración que suponía el régimen retributivo de los miembros de la Cámara regional vigente durante la I, II y III Legislaturas dio lugar incluso a figuras esperpénticas, como las reuniones de la Junta de Portavoces de las respectivas Comisiones.

Tan sólo a finales de la III Legislatura, y ya en pleno proceso de reconsideración de las prescripciones estatutarias, la Mesa, con una inteligente

¹¹⁸ Vid. Arévalo Gutiérrez, «Las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas», en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 43, enero-abril 1995, p. 128.

interpretación sugerida por los Servicios Jurídicos de la Cámara, articuló el coloquialmente conocido en los medios de comunicación como sistema del «dietón». El mismo permitió —junto con el establecimiento de un calendario cíclico de sesiones de las Comisiones— reorientar la perversa situación imperante. La vía de escape —articulada mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 14 de noviembre de 1994, por el que se modificó el acuerdo sobre cuantía y modalidades de las percepciones de los Diputados, con efectos de 1 de enero de 1995¹¹⁹— consistió en primar la asistencia a las sesiones plenarias de la Cámara. De esta manera, al incrementarse, muy notablemente, la dieta por asistencia a dichas sesiones, la presencia en los plenos celebrados mensualmente venía a cubrir la media de lo que constituían las retribuciones de los miembros de la Cámara. A los datos que ulteriormente se relacionan basta referirse para acreditar la minoración que dichas medidas comportaron del volumen de actividad —cuantitativa, es decir, en número de sesiones, que no cualitativa— de las Comisiones de la Cámara, así como de sus Mesas.

Afortunadamente la lógica se impuso y la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, con el consenso de todos los grupos parlamentarios —tanto en la tramitación de la iniciativa en la Asamblea de Madrid como, ulteriormente, en el *iter legis* en las Cortes Generales—, sustituyó la prohibición del originario artículo 10.5, admitiendo el nuevo artículo 11.3 la percepción de retribuciones periódicas. En efecto, al amparo del artículo 11.3 del Estatuto de Autonomía, en su vigente redacción, «*Los Diputados percibirán una asignación, que será fijada por la Asamblea*». El Reglamento de la Cámara, aprobado el 31 de enero de 1997, dispone en su artículo 20 lo que sigue:

- «1. Los Diputados percibirán una asignación económica suficiente, que les permita cumplir eficaz y dignamente su función.
2. La Mesa fijará cada año la cuantía de las asignación económica de los Diputados y sus modalidades, dentro de las correspondientes consignaciones presupuestarias, garantizando en todo caso su adecuada relación con la responsabilidad y dedicación de los Diputados.
3. La asignación económica de los Diputados estará sujeta a las normas tributarias de carácter general que resulten de aplicación.»

4.4.2. Otros derechos y deberes de los Diputados de la Asamblea de Madrid; en especial, la protección social

Al margen de lo hasta aquí comentado, los Diputados de la Cámara gozan de los derechos y están sometidos a los deberes inherentes a su condición, en términos análogos a los que rigen en cualquier otra institución parlamentaria.

¹¹⁹ El Acuerdo fue publicado en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 197, de 24 de noviembre de 1994.

El elenco de derechos y deberes —al margen de lo dispuesto sobre su condición y dignidad por la citada Ley 8/1986, de 23 de julio, del Estatuto del Diputado— se recogía en los artículos 7 a 15 del Reglamento de 1984, refiriéndose a los mismos los artículos 15 a 21 y 25 a 30 del vigente Reglamento de 1997.

De este modo, entre los primeros, destacan, básicamente: primero, el derecho de asistir con voz y voto a las sesiones de los órganos parlamentarios en que estén integrados —art. 16—; segundo, el de formar parte, al menos, de una Comisión —art. 17—; tercero, la facultad de recabar cuantos datos, informes y documentos obrantes en la Administración precisen para el desempeño de su función —art. 18—; y, cuarto, el derecho a recibir las actas y documentos de los órganos de la Asamblea, salvo las que correspondan a actuaciones que tengan carácter secreto —art. 19—. Entre los segundos, correlato lógico de los derechos, cabe destacar: el deber de asistencia a las sesiones del Pleno y de las comisiones de que formen parte —art. 25—; el deber de acatar las normas inherentes a la cortesía y a la disciplina parlamentarias, así como el deber de sigilo —art. 26—; estando sometidos a ciertas limitaciones complementarias, como la prohibición de invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio de cualquier actividad mercantil, industrial o profesional —art. 27—.

Como mero apunte, quizás convenga hacer una mención específica al régimen de protección social, objeto reciente de una notable revisión, tendente a equiparar la situación aplicable a los parlamentarios autonómicos con la vigente para el supuesto de los Diputados del Congreso de los Diputados.

En efecto, el artículo 10 del Reglamento de 1984 determinaba:

«1. Correrá a cargo del Presupuesto de la Asamblea el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social y a las mutualidades de aquellos Diputados que, como consecuencia de su dedicación parlamentaria, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, dejen de prestar el servicio que motivaba su afiliación o pertenencia a aquéllas.

2. La Asamblea de Madrid deberá realizar con las entidades gestoras de la Seguridad Social los conciertos precisos para cumplir lo dispuesto en el apartado anterior y para afiliarse, en el régimen que proceda, a los Diputados que así lo deseen y que con anterioridad no estuvieran dados de alta en la Seguridad Social.

3. Lo establecido en el apartado 1 se extenderá, en el caso de funcionarios públicos que por su dedicación parlamentaria estén en situación de excedencia, a las cuotas de clases pasivas.»

Dicha prescripción se enmarcaba en la línea establecida por la Orden Ministerial de 7 de diciembre de 1981, por la que se regulaba la suscripción de Convenio especial con las entidades gestoras de la Seguridad Social por los Gobiernos y Parlamentos de las Comunidades Autónomas en favor de sus miembros. Esta Orden presentaba notables disparidades con la ulterior Orden Ministerial de 29 de julio de 1982, relativa a los Diputados y Senadores de las Cortes Generales, la cual contenía una regulación mucho más generosa para los parlamentarios nacionales.

Con el cambio del régimen retributivo, esto es, el paso de las dietas a la retribución mensual fija, la protección social lógicamente también debía verse afectada. En este sentido, el vigente artículo 21 del Reglamento de la Asamblea dispone:

«1. La Asamblea de Madrid podrá suscribir convenios especiales con las entidades gestoras de la Seguridad Social en favor de aquellos Diputados que, como consecuencia de su dedicación parlamentaria, causen baja en el correspondiente régimen de la Seguridad Social en el que previamente estuvieran afiliados y en situación de alta, así como, en su caso, en favor de aquellos Diputados que no estuvieran previamente afiliados o en situación de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social y, como consecuencia asimismo de su dedicación parlamentaria, lo soliciten.

En los términos previstos en los convenios especiales que eventualmente se suscriban, correrá a cargo del Presupuesto de la Asamblea el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social de los Diputados a los que se refiere el párrafo anterior.

2. Lo establecido en el párrafo segundo del apartado anterior se extenderá, en el caso de funcionarios públicos que como consecuencia de su dedicación parlamentaria se encuentren en situación de excedencia o servicios especiales, al abono de las cuotas de clases pasivas y de las cotizaciones a las mutualidades funcionariales obligatorias.

3. La Mesa podrá disponer el abono, a cargo del Presupuesto de la Asamblea, de las cotizaciones a las mutualidades profesionales de aquellos Diputados que, como consecuencia de su dedicación parlamentaria, dejen de realizar la actividad que motivara su pertenencia a las mismas.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la Mesa podrá establecer un régimen complementario de asistencia social de los Diputados a cargo del Presupuesto de la Asamblea.»

Con posterioridad a la aprobación del nuevo Reglamento de la Cámara, el Consejo de Ministros acordó el Decreto por el que se modifica la regulación relativa a la suscripción del Convenio especial con la Administración de la Seguridad Social por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas en favor de sus miembros, expedido por S. M. el Rey como Real Decreto 705/1999, de 30 de abril¹²⁰. El meritado Real Decreto, conforme precisa su propia Introducción, tiene como objetivo poner fin a algunas de las disparidades existentes entre el régimen de los parlamentarios autonómicos y el de los parlamentarios nacionales, equiparando en lo posible el contenido y alcance de las dos modalidades de Convenio especial. De hecho se produce una equiparación total en cuanto a la inclusión en el régimen general de Seguridad Social y a la voluntariedad, aunque la equiparación no se extiende a la contingencia de desempleo.

Al amparo del mismo la Asamblea de Madrid y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales otorgaron el vigente Convenio, de fecha 28 de mayo de 1999, por medio del cual se formaliza la protección dispensada por el Régimen General de la Seguridad Social a los miembros de la Cámara.

¹²⁰ El texto del Decreto se insertó en el *Boletín Oficial del Estado*, núm. 104, de 1 de mayo de 1999.

V. LA ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID

La Asamblea de Madrid, a semejanza de las instituciones del género, se articula internamente en diversos órganos funcionales o de trabajo y órganos de dirección o gobierno¹²¹. Ha de reseñarse que dichos órganos han sido expresamente recogidos en el vigente texto del Estatuto de Autonomía, concretamente en su artículo 13, del siguiente tenor:

- «1. La Asamblea elegirá de entre sus miembros al Presidente, a la Mesa y a la Diputación Permanente.
2. Los Diputados de la Asamblea se constituirán en Grupos Parlamentarios, cuyos Portavoces integrarán la Junta de Portavoces, que se reunirá bajo la presidencia del Presidente de la Asamblea.
3. La Asamblea funcionará en Pleno y por Comisiones.»

5.1. El Pleno de la Asamblea de Madrid

El Pleno de la Cámara es, por su propia esencia, el órgano supremo de la Asamblea de Madrid —así lo declara expresamente el artículo 77.1 del vigente Reglamento—, en el que están presentes todos sus miembros. Consecuentemente, es al Pleno a quien corresponden las atribuciones y competencias establecidas estatutaria, legal o reglamentariamente, en cuanto órgano decisorio por excelencia.

Su regulación estatutaria y reglamentaria es ciertamente parca, limitándose a establecer su régimen de convocatoria y la distribución de escaños en el salón de sesiones —arts. 52 y 53 del Reglamento de 1984 y Capítulo V, «Del Pleno», del Título IV, «De la organización de la Asamblea», arts. 77 y 78, del Reglamento de 1997, prácticamente coincidentes en su literalidad—.

- «Artículo 77.1. El Pleno es el órgano supremo de la Asamblea.
2. El Pleno será convocado por el Presidente, a iniciativa propia o a petición, al menos, de un Grupo Parlamentario o de la quinta parte de los Diputados.»
- «Artículo 78.1. Los Diputados tomarán asiento en el salón de sesiones en la forma que distribuya la Mesa, oída la Junta de Portavoces, conforme a su adscripción a Grupos Parlamentarios, y ocuparán siempre el mismo escaño.
2. Habrá en el salón de sesiones un banco especial destinados a los miembros del Consejo de Gobierno.

¹²¹ Como regla general cabe indicar que todos los Estatutos de Autonomía reconocen el funcionamiento de la Cámara en Pleno y Comisiones (así, por ejemplo: arts. 27.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; 32.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña; 12.3 del Estatuto de Autonomía de Galicia; y 27.1, *in fine*, del Estatuto de Autonomía del País Vasco); e igualmente, por lo general, mencionan otros órganos internos relevantes: el Presidente, la Mesa y la Diputación Permanente (arts. 32.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña; 11.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha; 14.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón; 27.1 del Estatuto de Autonomía del País Vasco; 27.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; y 14.1 Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana).

3. *Sólo tendrán acceso al salón de sesiones, además de los Diputados y de los miembros del Consejo de Gobierno, los funcionarios de la Asamblea en el ejercicio de su cargo y quienes estén expresamente autorizados por el Presidente.»*

El Pleno de la Cámara ha desarrollado una actividad ciertamente intensa, como lo acreditan las 556 sesiones celebradas desde el comienzo de su andadura. La distribución de dichas sesiones ha respondido a una dinámica homogénea, resultando similar en las distintas legislaturas; en concreto, de acuerdo con el siguiente detalle por legislatura y año:

- I Legislatura: 108 sesiones plenarias, incluida su sesión constitutiva, celebrada con fecha de 8 de junio de 1983¹²². El desarrollo de las mismas se corresponde con el siguiente detalle anual:
 - 1983: 16 sesiones, de las cuales ha de destacarse la sesión de investidura del Presidente Leguina, celebrada los días 13 y 14 de junio de 1983¹²³.
 - 1984: 24 sesiones.
 - 1985: 30 sesiones.
 - 1986: 30 sesiones.
 - 1987: 8 sesiones.
- II Legislatura: 116 sesiones plenarias, a partir de su sesión constitutiva, que tuvo lugar con fecha de 2 de julio de 1987¹²⁴. El detalle anual de su desarrollo es el siguiente:
 - 1987: 17 sesiones, incluida la sesión de investidura del Presidente de la Comunidad, celebrada con fecha de 16, 17 y 20 de julio¹²⁵.
 - 1988: 29 sesiones.
 - 1989: 28 sesiones.
 - 1990: 35 sesiones.
 - 1999: 7 sesiones.
- III Legislatura: 128 sesiones plenarias, desde la celebración de su sesión constitutiva, con fecha de 20 de junio de 1991¹²⁶. Computadas por años, resulta lo que sigue:

¹²² La misma se reproduce en el *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 1, de 14 de junio de 1983.

¹²³ La sesión de investidura de referencia se reproduce en el *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 2, de 25 de junio de 1983.

¹²⁴ La sesión constitutiva de la II Legislatura se recoge en el *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 1, de 27 de julio de 1987.

¹²⁵ La sesión de investidura de la II Legislatura se recoge en el *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 2, de 2 de septiembre de 1987.

¹²⁶ La meritada sesión se reproduce en el *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 1, de 28 de junio de 1991.

- 1991: 16, de las cuales destaca la sesión de investidura del Presidente de la Comunidad, tercera y última ocasión en que resultó investido Joaquín Leguina, celebrada con fecha de 10 de julio ¹²⁷.
- 1992: 36.
- 1993: 33.
- 1994: 34.
- 1995: 9.
- IV Legislatura: 117 sesiones plenarias, incluida su sesión constitutiva, celebrada con fecha de 22 de junio de 1995 ¹²⁸. El desarrollo de las mismas se corresponde con el siguiente detalle anual:
 - 1995: 13 sesiones, comprendida la sesión de investidura del Presidente de la Comunidad, celebrada con fecha de 27 y 28 de junio ¹²⁹, en la cual, por primera vez, obtuvo la confianza parlamentaria Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez.
 - 1996: 31 sesiones.
 - 1997: 34 sesiones.
 - 1998: 30 sesiones.
 - 1999: 9 sesiones.
- Durante la presente Legislatura, la V, desde su constitución en sesión de 30 de junio de 1999 hasta el 30 de junio de 2002 ¹³⁰, el número de sesiones plenarias celebradas ha sido de 87, incluida la sesión de investidura, de nuevo, del Presidente Ruiz-Gallardón, celebrada los días 6 y 7 de julio de 1999 ¹³¹.

Las sesiones referidas, como regla general, se han celebrado en sesión vespertina todos los jueves de los meses comprendidos en cada uno de los dos períodos de sesiones anuales —febrero a junio y septiembre a diciembre—, con excepción del último jueves de cada mes, al ser semana inhábil a efectos parlamentarios.

De dichos debates, al margen de los registrados en las sesiones constitutivas y en las de investidura, así como de los que anualmente tienen lugar con ocasión de la Ley de Presupuestos —«el esqueleto del Estado desprovisto de toda ideología embellecedora»—, especial relevancia, por su proyección pública, tienen los que, también con carácter anual —con excepción del primer año de la Legislatura; lo que resulta perfectamente lógico si se tiene en cuenta la inmediata celebración de elecciones y el eventual cambio de Gobierno—, se celebran, al inicio del período de sesiones ordinarias com-

¹²⁷ El debate que tuvo lugar en la sesión de investidura de la III Legislatura fue publicado en el *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 16, de 1 de agosto de 1991.

¹²⁸ La misma se reproduce en el *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 1, de 22 de junio de 1995.

¹²⁹ La sesión de investidura de la IV Legislatura se recoge en el *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 2.

¹³⁰ La sesión constitutiva de la V Legislatura se reproduce en el *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 1, de 30 de junio de 1999.

¹³¹ Reproducida en *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 2, de 6 y 7 de julio de 1999.

prendido entre septiembre y diciembre, sobre la orientación política general del Consejo de Gobierno, más conocidos en los medios de comunicación social como «debates sobre el estado de la Región». Su disciplina específica se contiene en el Título XVI del Reglamento, artículos 218 y 219.

Por último, cabe destacar, como singularidad de la Cámara autonómica, la proliferación en la práctica parlamentaria de sesiones monográficas sobre distintos temas de interés público para la Comunidad, hasta el punto de que este tipo de debates en Pleno accedieron al Reglamento de 1997, el cual dedica a su disciplina el Título XV: «De los debates monográficos», artículos 216 y 217. En mérito de los referidos preceptos cualquier grupo parlamentario puede formular la solicitud para su celebración, resolviendo la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces. El debate puede concluir con la defensa y ulterior votación de las propuestas de resolución que estimen oportuno formular los Grupos Parlamentarios.

5.2. Las Comisiones de la Asamblea de Madrid

5.2.1. La estructura de las Comisiones

La Cámara, además de en Pleno, funciona, de acuerdo con un lógico principio de división del trabajo, en Comisiones. Estos órganos funcionales desarrollan una notable labor de preparación del trabajo del Pleno de la Cámara, habiendo adquirido en la práctica un notable protagonismo político, propiciado por la publicidad de sus sesiones¹³².

Su regulación reglamentaria —arts. 40 a 51 del Reglamento de 1984 y Capítulo IV, «De las Comisiones», del Título IV, «De la organización de la Asamblea», arts. 62 a 76 del Reglamento de 1997— parte de la distinción entre:

- A) Las Comisiones Permanentes, que a su vez pueden ser Legislativas —configuradas básicamente de acuerdo con la estructura orgánica departamental del Consejo de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto por el art. 72.2.a) del Reglamento de 1997— y No Legislativas.

En el seno de estas Comisiones pueden constituirse Ponencias encargadas de realizar un «Informe» sobre un asunto concreto dentro del ámbito material de competencias de la Comisión Permanente en cuestión, el cual, una vez elaborado, será elevado a aquélla para su aprobación como «Dictamen».

Para la presente Legislatura —V—, la Mesa de la Cámara, en su sesión de 9 de julio de 1999, previo parecer favorable de la Junta de Portavoces, procedió a establecer la relación de Comisiones —trece, inicialmente—, con distribución de competencias entre las mismas. En su ulterior sesión de 14 de julio, oída la Junta de Portavoces,

¹³² Sobre el funcionamiento de estos órganos, véase Del Pino Carazo, «Comparecencias ante las Comisiones de la Asamblea de Madrid», *op. cit.*

la Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 del vigente Reglamento, procedió a la determinación de la composición numérica y por grupos de las Comisiones Permanentes Legislativas, cifrado en 17, a tenor de la siguiente proporción: Grupo Parlamentario Popular: 9 Diputados; Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas: 6 Diputados; y Grupo Parlamentario Izquierda Unida: 2 Diputados.

Por lo que respecta a la Comisión Permanente No Legislativa de Vigilancia de las Contrataciones, prevista reglamentariamente de forma expresa por el artículo 72.2.b) —que le encomienda el conocimiento de las iniciativas y asuntos no legislativos relacionados directamente con la actividad contractual de la Administración Pública de la Comunidad de Madrid—, en mérito del referido Acuerdo de la Mesa de la Cámara, su composición es de 9 miembros, de acuerdo con la siguiente proporción: Grupo Parlamentario Popular: 3 Diputados; Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas: 3 Diputados; y Grupo Parlamentario Izquierda Unida: 3 Diputados. En mérito del Acuerdo de la Mesa de 14 de julio de 1999, los acuerdos de la Comisión se adoptarán siempre en función del criterio del voto ponderado, según el número de Diputados con que cada Grupo Parlamentario cuente en el Pleno, siempre que sea idéntico el sentido en que hubieran votado todos los miembros de la Comisión pertenecientes a un mismo Grupo Parlamentario. Ulteriormente, conforme se detalla, se ha constituido con el mismo carácter la Comisión de Control del Ente Público de Radio Televisión Madrid.

- B) Las Comisiones No Permanentes, que se constituyen *ad hoc* para un asunto concreto, disolviéndose a la conclusión de sus trabajos; en todo caso, además, desaparecen preceptivamente al concluir la Legislatura.

Estos órganos funcionales pueden configurarse como Comisiones de Investigación, constituidas por el Pleno de la Cámara a propuesta de dos quintas partes de los miembros de la Asamblea, y como Comisiones de Estudio, creadas por el Pleno a propuesta de la Mesa y previo parecer favorable de la Junta de Portavoces, pudiendo tener la propuesta origen en la propia iniciativa de la Mesa o a instancias de un Grupo Parlamentario o de la quinta parte de los miembros de la Asamblea.

5.2.2. Sesiones celebradas y relación de Comisiones constituidas

Durante las cuatro legislaturas ya vencidas, las distintas Comisiones de la Cámara han desarrollado una actividad ciertamente intensa, como lo acredita el número de sesiones celebradas, de acuerdo con el siguiente detalle:

- I Legislatura: 462 sesiones de Comisión.

Las Comisiones existentes durante la Legislatura constitutiva fueron 11, de las cuales 8 tuvieron el carácter de Comisiones Permanentes Legislativas¹³³, 1 el de Comisión Permanente No Legislativa y 2 la naturaleza de Comisión no Permanente. En concreto, las siguientes, con detalle del número de sesiones celebradas por cada una:

- Comisión de Presidencia y Gobernación: 78 sesiones.
- Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda: 121 sesiones.
- Comisión de Trabajo, Industria y Comercio: 31 sesiones.
- Comisión de Urbanismo, Vivienda y Obras Públicas: 71 sesiones.
- Comisión de Cultura y Enseñanza, que pasó a denominarse, desde el 16 de abril de 1986, Comisión de Educación y Cultura: 36 sesiones.
- Comisión de Salud y Bienestar Social: 30 sesiones.
- Comisión de Agricultura y Ganadería: 31 sesiones.
- Comisión de Reglamento, Incompatibilidades y Peticiones: 35 sesiones.
- Comisión de Derechos Humanos, constituida como Comisión Permanente No Legislativa con fecha de 12 de junio de 1984¹³⁴: 11 sesiones.
- Comisión de Seguridad Ciudadana, constituida como Comisión No Permanente, celebró su sesión constitutiva con fecha de 10 de abril de 1984¹³⁵: 15 sesiones.
- Comisión de Asuntos Europeos, constituida como Comisión No Permanente, celebró su sesión constitutiva con fecha de 22 de mayo de 1986¹³⁶: 3 sesiones.

- II Legislatura: el número de sesiones celebradas prácticamente se duplicó, ascendiendo a la cifra de 797, sin computar las celebradas por las Comisiones de Investigación.

De igual modo, el número de Comisiones se incrementó cuantitativamente de forma muy significativa en la II Legislatura. Dicho fenómeno es consecuencia tanto de la creación de diversas Comisiones de Investigación como del cambio de la estructura de las Comisiones Permanentes Legislativas durante la Legislatura, lo que determinó una reforma de la estructura originaria.

¹³³ El *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 4, de 14 de julio de 1983, recoge el Acuerdo de constitución y composición de las Comisiones Permanentes Legislativas de la Asamblea en su I Legislatura.

¹³⁴ El Acuerdo de constitución se recoge en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 45, de 17 de mayo de 1984, reproduciéndose la sesión constitutiva en el *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 134, de 17 de julio de 1984.

¹³⁵ El Acuerdo de creación figura en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 45, de 17 de mayo de 1984, reproduciéndose la sesión constitutiva en el *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 104, de 9 mayo de 1984.

¹³⁶ La sesión constitutiva se reproduce en el *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 423, de 8 de julio de 1986.

Por lo que respecta a las Comisiones Permanentes Legislativas¹³⁷, el elenco es el que sigue, con detalle de la cifra total de sesiones celebradas:

- Comisión de Presidencia y Gobernación, ulteriormente constituida como Comisión de Presidencia y Asuntos Institucionales, mediante Acuerdo de la Mesa de fecha de 4 de febrero de 1988: 44 sesiones.
- Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, constituida como Comisión de Presupuestos y Hacienda con fecha 4 de febrero de 1988: 176 sesiones.
- Comisión de Trabajo, Industria y Comercio, que fue suprimida en la reforma operada en 1988: 2 sesiones.
- Comisión de Urbanismo, Vivienda y Obras Públicas, la cual con fecha 4 de febrero de 1988 se constituye como Comisión de Política Territorial: 64 sesiones.
- Comisión de Educación y Cultura, que se constituyó como Comisión de Educación, Cultura y Deportes con fecha de 4 de febrero de 1988: 102 sesiones.
- Comisión de Salud y Bienestar Social, que pasó a constituirse como Comisión de Salud e Integración Social con fecha de 4 de febrero de 1988: 69 sesiones.
- Comisión de Agricultura y Ganadería: 35 sesiones.
- Comisión de Reglamento, Incompatibilidades y Peticiones: 32 sesiones.
- Comisión de Administración y Función Pública, constituida en 1988: 27 sesiones.
- Comisión de Economía y Empleo, constituida en 1988: 64 sesiones.
- Comisión de Medio Ambiente, constituida en 1988: 74 sesiones.
- Comisión de Juventud, constituida en 1988: 30 sesiones
- Comisión de Igualdad de la Mujer, constituida en 1988: 19 sesiones.

La relación de Comisiones Permanentes No Legislativas es la que sigue¹³⁸:

- Comisión de Derechos Humanos, constituida con fecha de 23 de julio de 1987: 17 sesiones.
- Comisión de Reforma del Estatuto, creada con fecha de 4 de febrero de 1988, celebrando reuniones sólo durante el referido año: 3 sesiones.
- Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, constituida el 4 de febrero de 1988: 22 sesiones.
- Comisión de Seguridad Ciudadana, constituida con fecha de 4 de febrero de 1988: 17 sesiones.

¹³⁷ La constitución y composición originaria de las Comisiones Permanentes Legislativas de la II Legislatura fue publicada en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 3, de 31 de julio de 1987. La modificación de su estructura se recoge en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 30, de 11 de febrero de 1988.

¹³⁸ La constitución y composición de las Comisiones Permanentes No Legislativas de la II Legislatura fue publicada en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 3, de 31 de julio de 1987 y en el ulterior *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 30, de 11 de febrero de 1988.

La relación de las Comisiones de Investigación constituidas durante la II Legislatura es la siguiente:

- Comisión de Investigación del Archivo Histórico.
- Comisión de Investigación Actur Tres Cantos.
- Comisión de Investigación del Macizo de Peñalara.
- Comisión de Investigación de Vitrubio 30.
- Comisión de Investigación del Grupo Exter.

• III Legislatura: el número de sesiones se incrementó de nuevo de forma notable, ascendiendo a la cifra de 898 sesiones, sin computar las celebradas por las Comisiones de Investigación.

La relación de las 12 Comisiones Permanentes Legislativas constituidas es la que sigue, con detalle del número de sesiones celebradas por cada una de ellas¹³⁹:

- Comisión de Presidencia y Asuntos Institucionales: 27 sesiones.
- Comisión de Presupuestos y Hacienda: 180 sesiones.
- Comisión de Administración y Función Pública: 27 sesiones.
- Comisión de Economía y Empleo: 74 sesiones.
- Comisión de Política Territorial: 50 sesiones.
- Comisión de Medio Ambiente: 75 sesiones.
- Comisión de Salud e Integración Social: 108 sesiones.
- Comisión de Educación, Cultura y Deportes: 95 sesiones.
- Comisión de Juventud: 35 sesiones.
- Comisión de Agricultura y Ganadería: 41 sesiones.
- Comisión de Igualdad de la Mujer: 29 sesiones.
- Comisión de Reglamento, Incompatibilidades y Peticiones: 17 sesiones.

La relación de Comisiones Permanentes No Legislativas es la que sigue¹⁴⁰:

- Comisión de Derechos Humanos: 22 sesiones.
- Comisión de Medios de Comunicación Social: 19 sesiones.
- Comisión de Desarrollo Estatutario: 5 sesiones.
- Comisión de Seguridad Ciudadana: 25 sesiones.
- Comisión de Vigilancia de las Contrataciones: 29 sesiones.
- Comisión de Asuntos Europeos: 15 sesiones.
- Asimismo, como Comisión No Permanente de seguimiento, se constituyó, con fecha de 29 de noviembre de 1991, la Comisión de Reajuste y Erradicación del Chabolismo, la cual desarrolló su actividad durante todo el período de la Legislatura: 25 sesiones.

¹³⁹ La constitución y composición originaria de las Comisiones Permanentes Legislativas de la III Legislatura fue publicada en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 2, de 18 de julio de 1991.

¹⁴⁰ La constitución y composición de las Comisiones Permanentes No Legislativas de la III Legislatura fue publicada en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 3, de 25 de julio de 1991.

Por lo que respecta las Comisiones de Investigación, se constituyeron las que sigue:

- Comisión de Investigación sobre la actuación de empleados o autoridades de la Comunidad de Madrid sobre especulaciones de terrenos en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas.
- Comisión de Investigación creada por Resoluciones del Pleno de la Cámara de fechas 6 y 13 de octubre de 1994.
- IV Legislatura: 694 sesiones, de las cuales 261 corresponden a las Comisiones organizadas de conformidad con el Reglamento de 1984 y 433 a las establecidas a tenor del vigente Reglamento de 1997.

Las Comisiones existentes durante la IV Legislatura fueron un total de 31. El elevado número es tributario de la concurrencia de dos períodos nítidamente diferenciados, derivados de la aprobación en 1997 de un nuevo Reglamento, determinante del cambio de sistema durante la Legislatura.

Inicialmente, al amparo del artículo 46.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid de 18 de enero de 1984, la relación de Comisiones Permanentes Legislativas —12— fue la siguiente, con detalle de las sesiones celebradas:

- Comisión de Presidencia y Asuntos Institucionales: 13 sesiones.
- Comisión de Presupuestos y Hacienda: 51 sesiones.
- Comisión de Administración y Función Pública: 5 sesiones.
- Comisión de Economía y Empleo: 25 sesiones.
- Comisión de Política Territorial: 12 sesiones.
- Comisión de Medio Ambiente: 22 sesiones.
- Comisión de Salud e Integración Social: 21 sesiones.
- Comisión de Educación, Cultura y Deportes: 29 sesiones.
- Comisión de Juventud: 12 sesiones.
- Comisión de Agricultura y Ganadería: 15 sesiones.
- Comisión de Igualdad de la Mujer: 13 sesiones.
- Comisión de Reglamento, Incompatibilidades y Peticiones, establecida conforme al artículo 48 del Reglamento: 5 sesiones.

La relación de Comisiones Permanentes No Legislativas —7—, constituidas al amparo de los artículos 46.2 y 47 del Reglamento de 1984, es la que sigue:

- Comisión de Derechos Humanos: 4 sesiones.
- Comisión de Medios de Comunicación Social: 3 sesiones.
- Comisión de Desarrollo Estatutario: 2 sesiones.
- Comisión de Seguridad Ciudadana: 8 sesiones.
- Comisión de Vigilancia de las Contrataciones: 4 sesiones.
- Comisión de Asuntos Europeos: 11 sesiones.
- Comisión de Realojamiento y la Erradicación del Chabolismo y la Infravivienda en la Comunidad de Madrid: 6 sesiones.

Con posterioridad, al amparo del Reglamento de 30 de enero de 1997, actualmente en vigor, mediante Acuerdo de la Mesa de 4 de febrero de

1997¹⁴¹, se constituyeron las siguientes 10 Comisiones Permanentes Legislativas, cuya estructura se basa en una identidad del sistema de Comisiones con la estructura departamental del Gobierno —art. 72.2.a)—:

- Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado: 8 sesiones.
- Comisión de Presidencia: 49 sesiones.
- Comisión de Presupuestos y Hacienda: 71 sesiones.
- Comisión de Economía y Empleo: 42 sesiones.
- Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: 34 sesiones.
- Comisión de Sanidad y Servicios Sociales: 45 sesiones.
- Comisión de Educación y Cultura: 50 sesiones.
- Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Regional: 39 sesiones.
- Comisión de Mujer: 20 sesiones.
- Comisión de Juventud: 22 sesiones.

Junto a las anteriores, y de conformidad con el artículo 72.2.b), como Comisión Permanente No Legislativa, se constituyó la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, que celebró 15 sesiones.

Durante el desarrollo de la Legislatura, como Comisión de Investigación, de acuerdo con los artículos 74 y 75, se creó la Comisión de Investigación al objeto de esclarecer el presunto fraude en la venta de gasolina en la Comunidad de Madrid, que celebró un total de 30 sesiones, desde su constitución con fecha de 20 de febrero de 1998 y hasta la culminación de sus trabajos en la sesión de 3 de abril de 1998.

Conforme se ha indicado, de las 694 sesiones celebradas en total, 261 corresponden al período 1995-1996, es decir, a las Comisiones organizadas de conformidad con el Reglamento de 1984 y 433 al período 1997-1999, esto es, a las establecidas a tenor del vigente Reglamento de 1997. De estas últimas ha de destacarse, por un lado, que a las anteriormente referidas —425 en total— han de añadirse 8 sesiones conjuntas y, por otro, que en el seno de la Comisión de Presidencia se constituyó, con fecha de 14 de noviembre de 1996, una Ponencia para analizar las actuaciones perpetradas por grupos violentos; Ponencia creada, por ende, de acuerdo con el sistema del Reglamento de 1984, perviviendo luego tras la modificación de la estructura de Comisiones. Esta Ponencia, desde su constitución, celebró 42 sesiones, la última de las cuales tuvo lugar el 13 de abril de 1999.

Puede apreciarse *icto oculi* en esta IV Legislatura, frente a las precedentes —con excepción de la I—, una reducción significativa del número de sesiones. Así, la I Legislatura registró 462 sesiones de Comisión, 797 la II y 898 la III, sin computar las sesiones de las Comisiones de Investigación, mientras que en la IV la cifra global es de 694 sesiones, incluidas las 30 celebradas por la única Comisión de Investigación constituida. Esta reducción es consecuencia de la modificación del ilógico sistema de percepciones económicas de los Diputados, inicialmente articulado sobre la base del devengo de dietas

¹⁴¹ Cfr. *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 84, de 13 de febrero de 1997.

por asistencia a las sesiones de los órganos de la Cámara. Como ya he señalado, afortunadamente la lógica se impuso y, al amparo del artículo 11.3 del Estatuto de Autonomía, en su redacción vigente, los Diputados perciben una asignación fijada por la Cámara, en los términos que dispone el artículo 20 del Reglamento de 30 de enero de 1997. Esta trascendental modificación, sin menoscabo del desarrollo de las funciones inherentes a la institución, comportó un lógico reajuste del número de sesiones, de acuerdo con el calendario cíclico bisemanal que aprueba la Mesa de la Cámara. Calidad y no cantidad, como es propio de una institución representativa¹⁴².

• V Legislatura: durante el período transcurrido de la presente V Legislatura —junio de 1999 a junio de 2002—, la cifra de sesiones de Comisión celebradas asciende a 605, lo que permite intuir que la cifra global a su conclusión será similar a la de la IV Legislatura.

Las Comisiones inicialmente establecidas en la V Legislatura —cuya constitución, a partir del Acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara con fecha de 9 de julio de 1999, tuvo lugar con fecha de 15 de julio— fueron un total de 13. La relación de las mismas¹⁴³ es la siguiente:

- Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado.
- Comisión de Presidencia.
- Comisión de Presupuestos y Hacienda.
- Comisión de Economía y Empleo.
- Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
- Comisión de Educación.
- Comisión de Medio Ambiente.
- Comisión de Sanidad.
- Comisión de Cultura.
- Comisión de Servicios Sociales.
- Comisión de Mujer.
- Comisión de Juventud.
- Comisión Permanente No Legislativa de Vigilancia de las Contrataciones.

Desde su constitución, se han observado diversas incidencias, determinadas básicamente por las reformas operadas en la estructura departamental del Consejo de Gobierno; las siguientes:

- 1.^a El Pleno de la Asamblea de Madrid, en su sesión de 10 de febrero de 2000, procedió a aprobar la creación de la Comisión de Estudio de la Sociedad de la Información¹⁴⁴, cuya constitución tuvo lugar con fecha de 18 de mayo de 2000. Ulteriormente, mediante Acuerdo

¹⁴² Vid. Arévalo Gutiérrez, «La consolidación de una institución representativa...», *op. cit.*, pp. 213 a 215.

¹⁴³ Cfr. *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 1, de 22 de julio de 1999.

¹⁴⁴ Cfr. *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 32, de 2 de marzo de 2000.

de la Mesa de 16 de mayo de 2000, se procedió a la aprobación de las Normas de Funcionamiento, Organización y Composición de la Comisión¹⁴⁵, modificadas por el posterior Acuerdo de 23 de octubre de 2000, sobre inciso en la Norma Quinta de Funcionamiento, Organización y Composición de la Comisión¹⁴⁶. Esta Comisión está integrada por 9 miembros, 3 por cada uno de los Grupos Parlamentarios, según Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 13 de marzo de 2000, adoptando sus acuerdos en función del criterio del voto ponderado.

- 2.^a Con idéntica fecha se procedió a la creación de la Comisión Permanente No Legislativa de Control Parlamentario de Radio Televisión Madrid, consecuencia de la Ley 2/2000, de 11 de febrero, de modificación del artículo 19 de la Ley 13/1984, de 30 de junio, de Creación, Organización y Control Parlamentario del Ente Público «Radio Televisión Madrid»¹⁴⁷. Está integrada por 17 miembros, en proporción a la importancia numérica de cada grupo en la Cámara, de donde resulta una composición de 9 miembros del Grupo Popular, 6 del Grupo Socialista-Progresistas y 2 de Izquierda Unida, según Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 13 de marzo de 2000.
- 3.^a Con fecha de 5 de junio de 2000 se constituyó una nueva Comisión de Presidencia, Presupuestos y Hacienda, consecuencia de la modificación departamental operada en el Consejo de Gobierno, disolviéndose las precedentes Comisiones de Presidencia y de Presupuestos y Hacienda.
- 4.^a En la misma fecha se procedió a la constitución de una nueva Comisión, con la denominación de Comisión de Justicia, Función Pública y Administración Local. La meritada Comisión fue posteriormente disuelta, con fecha de 2 de octubre de 2001, instaurándose paralelamente una nueva Comisión, la de Justicia y Administraciones Públicas, cuya sesión constitutiva se celebró con fecha de 10 de octubre de 2001.
- 5.^a La reforma departamental operada tras el debate «sobre el estado de la región» del año 2001 comportó, con fecha de 2 de octubre de 2001, la disolución de la unificada Comisión de Presidencia, Presupuestos y Hacienda, y la paralela constitución, de nuevo, de las Comisiones de Presidencia y de Presupuestos y Hacienda, cuya respectiva sesión constitutiva tuvo lugar con fecha de 9 de octubre de 2001.
- 6.^a La originaria Comisión de Economía y Empleo, como consecuencia de la bifurcación en dos departamentos de las competencias atribuidas *ab initio* a la Consejería del mismo nombre, fue disuelta con fecha de 2 de octubre de 2001.

¹⁴⁵ Cfr. *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 42, de 18 de mayo de 2000.

¹⁴⁶ Cfr. *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 65, de 26 de octubre de 2000.

¹⁴⁷ Cfr. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, núm. 41, de 18 de febrero de 2000.

- 7.^a La referida disolución de la Comisión de Economía y Empleo comportó la constitución de dos nuevas Comisiones: de un lado, la Comisión de Economía e Innovación Tecnológica y, de otro, la Comisión de Trabajo; ambas con fecha de 2 de octubre de 2001, habiéndose celebrado la sesión constitutiva de la Comisión de Trabajo el día 8 de octubre, mientras que la correspondiente a la Comisión de Economía e Innovación Tecnológica tuvo lugar el siguiente día 9 de octubre de 2001.
- 8.^a La Comisión de Cultura originariamente constituida se disolvió con fecha de 2 de octubre de 2001, estableciéndose, en su ámbito de competencias, la Comisión de Las Artes, que celebró su sesión constitutiva el 8 de octubre de 2001.

En consecuencia, el esquema en vigor de los órganos funcionales o de trabajo de la Cámara es el que sigue, con detalle del día hábil y periodicidad fijados por la Mesa de la Cámara para sus sesiones ordinarias ¹⁴⁸:

A) Comisiones Permanentes:

a) Comisiones Permanentes Legislativas:

- Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado (jueves por la mañana; segunda semana de cada mes).
- Comisión de Presidencia (martes por la mañana; quincenal: primera y segunda semana de cada mes).
- Comisión de Presupuestos y Hacienda (martes por la mañana; quincenal: primera y tercera semana de cada mes).
- Comisión de Economía e Innovación Tecnológica (martes por la tarde; quincenal: segunda y tercera semana de cada mes).
- Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (viernes por la mañana; semanal).
- Comisión de Educación (lunes por la mañana; semanal).
- Comisión de Justicia y Administraciones Públicas (miércoles por la mañana; quincenal: primera y tercera semana de cada mes).

¹⁴⁸ De conformidad con el Acuerdo adoptado por la Mesa de la Asamblea, en su sesión de fecha 7 de septiembre de 1999, sobre criterios generales de ordenación temporal para la celebración de sesiones ordinarias del Pleno y de las Comisiones Permanentes de la Cámara, publicado en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 4, de 9 de septiembre de 1999. El meritado Acuerdo ha sido objeto de reforma por los ulteriores: Acuerdo de 14 de septiembre de 1999, de modificación del anterior, publicado en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 7, de 23 de septiembre de 1999; Acuerdo de 29 de mayo de 2000, sobre calendario para la celebración de sesiones ordinarias de las Comisiones de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid y de Estudio de la Sociedad de la Información, publicado en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 44, de 1 de junio de 2000; Acuerdo de 5 de junio de 2000, sobre régimen de Comisiones permanentes legislativas de la Cámara, publicado en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 45, de 8 de junio de 2000; y Acuerdo de 2 de octubre de 2001, sobre régimen de Comisiones Permanentes Legislativas de la Cámara, como consecuencia del Decreto 155/2001, de 20 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la denominación y estructura de las Consejerías, publicado en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 112, de 4 de octubre de 2001.

- Comisión de Medio Ambiente (martes por la tarde; quincenal: primera y tercera semana de cada mes).
- Comisión de Sanidad (miércoles por la tarde; semanal).
- Comisión de Las Artes (lunes por la tarde; quincenal: primera y tercera semana de cada mes).
- Comisión de Servicios Sociales (miércoles por la mañana; quincenal: primera y tercera semana de cada mes).
- Comisión de Trabajo (lunes por la tarde; semanal).
- Comisión de Mujer (viernes por la mañana; semanas alternas).
- Comisión de Juventud (viernes por la mañana; semanas alternas).
- b) Comisiones Permanentes No Legislativas:
 - Comisión de Vigilancia de las Contrataciones (jueves por mañana; primera semana de cada mes).
 - Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid (jueves por la mañana; quincenal: primera y tercera semana de cada mes).
- B) Comisiones No Permanentes:
 - Comisión de Estudio de la Sociedad de la Información (jueves por la mañana; mensual: tercera semana de cada mes).

5.3. La Mesa de la Asamblea de Madrid

La Mesa de la Asamblea es el órgano rector de la Cámara, al que corresponden, entre otras significativas funciones, la de calificar y admitir a trámite todos los escritos que se presenten en la misma, así como la de representar colegiadamente a la Institución.

La composición de la Mesa es amplia, lo que favorece la representación de todos los Grupos Parlamentarios presentes en la Cámara. Así, se integra por su Presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios.

Su regulación reglamentaria se contiene en los artículos 29 a 37 del Reglamento de 1984, así como en el Capítulo I, «De la Mesa», del Título IV, «De la organización de la Asamblea», artículos 48 a 57 del Reglamento de 1997, que han venido a destacar el rol de sus distintos miembros.

Durante el período considerado la Mesa de la Asamblea desarrolló una notable actividad. Así lo acreditan las 1.037 sesiones celebradas desde la constitución de la Cámara hasta el 30 de junio de 2002. En concreto, de acuerdo con el siguiente detalle:

- I Legislatura: 169 sesiones.

Los componentes de la Mesa en esta I Legislatura, con especificación del Grupo Parlamentario de adscripción, fueron:

- Presidente: Ramón Espinar Gallego (PSOE).
- Vicepresidente Primero: Luis Alejandro Cendrero Uceda (PSOE).
- Vicepresidente Segundo: Isaac Sáez González (AP-PDP-UL).

- Vicepresidente Tercero: Emilio Rodríguez Sánchez (PCE).
- Secretario Primero: Elvira Domingo Ortiz (PSOE).
- Secretario Segundo: José Ramón Pin Arboledas (AP-PDP-UL).
- Secretario Tercero: Emilio Sánchez Cuenca (PSOE).

• II Legislatura: 195 sesiones.

Integraron la Mesa de la Cámara en la II Legislatura:

- Presidente: Rosa Posada Chapado (CDS).
- Vicepresidente Primero: Francisco Javier Ledesma Bartret (PSOE).
- Vicepresidente Segundo: Pedro Núñez Morgades (AP).
- Vicepresidente Tercero: Pedro Díez Olazábal (IU).
- Secretario Primero: Emilio Sánchez Cuenca (PSOE).
- Secretario Segundo: Rosa Vindel López (AP).
- Secretario Tercero: Luis Rufilanchas Serrano (CDS).

• III Legislatura: 225 sesiones.

Los componentes de la Mesa en la III Legislatura fueron:

- Presidente: Pedro Díez Olazábal (IU).
- Vicepresidente Primero: Pedro Núñez Morgades (PP).
- Vicepresidente Segundo: Javier Ledesma Bartret (PSOE).
- Vicepresidente Tercero: Fernando Abad Bécquer (PSOE).
- Secretario Primero: Ángel Luis del Castillo Gordo (PSOE).
- Secretario Segundo: José López López (PP).
- Secretario Tercero: Jaime Ruiz Reig (IU).

• IV Legislatura: 243 sesiones, conformadas por las 239 de la Mesa, *stricto sensu*, y las 4 sesiones celebradas por la Mesa de la Diputación Permanente durante el mes de junio de 1999, hasta la constitución de la nueva Cámara.

Los componentes de la Mesa en esta IV Legislatura, de acuerdo con las votaciones celebradas en la sesión constitutiva —de 22 de junio de 1995—, fueron:

- Presidente: Juan Van-Halen Acedo (PP).
- Vicepresidente Primero: Pedro Núñez Morgades (PP).
- Vicepresidente Segundo: Fernando Abad Bécquer (PSOE).
- Vicepresidente Tercero: Jaime Ramón Ruiz Reig (IU).
- Secretario Primero: Tomás Burgos Beteta (PP).
- Secretario Segundo: Virgilio Cano de Lope (PSOE).
- Secretario Tercero: Esther García Romero-Nieva (PP).

• V Legislatura: hasta la fecha considerada, es decir, 30 de junio de 2002, la Mesa ha celebrado 205 reuniones, por lo que no resulta difícil concluir que el número de sesiones del órgano rector durante la V Legislatura será superior al de las restantes.

Los componentes de la Mesa en la V Legislatura son, a fecha de 30 de septiembre de 2002 ¹⁴⁹:

— Presidente:	Jesús Pedroche Nieto (PP).
— Vicepresidente Primero:	José Ignacio Echeverría Echániz (PP).
— Vicepresidente Segundo:	Francisco Cabaco López (PSOE-P).
— Vicepresidente Tercero:	José Guillermo Marín Calvo (IU).
— Secretario Primero:	Cristina Cifuentes Cuencas (PP).
— Secretario Segundo:	Marcos Sanz Agüero (PSOE-P).
— Secretario Tercero:	Sylvia Enseñat de Carlos (PP).

No puede cerrarse este epígrafe sin recordar que, a diferencia de la Presidencia de la Comunidad, ocupada las tres primeras Legislaturas por idéntico titular, el Excmo. Sr. D. Joaquín Leguina Herrán, y la IV y la V Legislaturas por el Excmo. Sr. D. Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, la Presidencia de la Asamblea ha sido desempeñada en cada Legislatura por una persona distinta. En efecto, la I Legislatura fue presidida por el Excmo. Sr. D. Ramón Espinar Gallego, del Grupo Socialista, la II por la Excma. Sra. D.^a Rosa Posada Chapado, del Centro Democrático y Social, la III por el Excmo. Sr. D. Pedro Díez Olazábal, del Grupo Izquierda Unida, la IV por el Excmo. Sr. D. Juan Van-Halen Acedo, del Grupo Popular, y, finalmente, la vigente por el Excmo. Sr. D. Jesús Pedroche Nieto.

5.4. La Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid

La Junta de Portavoces es un órgano esencialmente político, cuya finalidad es permitir que los Grupos Parlamentarios, auténticos protagonistas del parlamentarismo contemporáneo, puedan participar en la dirección y organización de los trabajos de la Cámara, especialmente por lo que respecta a la fijación del Orden del Día de las sesiones plenarias.

Su regulación reglamentaria es ciertamente parca, limitándose a establecer su régimen de convocatoria y la distribución de escaños en el salón de sesiones —arts. 52 y 53 del Reglamento de 1984 y Capítulo III, «De la Junta de Portavoces», del Título IV, «De la organización de la Asamblea», arts. 77 y 78 del Reglamento de 1997, prácticamente coincidentes en su literalidad—.

La Junta de Portavoces de la Cámara ha desarrollado una actividad ciertamente intensa, en el marco de ese «parlamentarismo de consenso» ante-

¹⁴⁹ La composición originaria de la Mesa, de acuerdo con las votaciones celebradas por el Pleno en la sesión constitutiva, de 30 de junio de 1999, se refleja en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 1, de 22 de julio de 1999.

Respecto de la composición inicial ha de tenerse en cuenta que, como consecuencia de su renuncia a la condición de Diputado con fecha de 18 de mayo de 2000, D. Julio César Sánchez Fierro, Secretario Primero, cesó en su puesto en la Mesa, siendo sustituido por D.^a Cristina Cifuentes Cuencas, nombrada con fecha de 1 de junio de 2000. La meritada Diputada, originariamente Secretaria Tercera, había renunciado previamente a su condición de miembro de la Mesa con fecha de 24 de mayo de 2000. En la propia fecha de 1 de junio de 2000 la vacante en la Secretaría Tercera fue cubierta con el nombramiento de D.^a Sylvia Enseñat de Carlos. Las referidas votaciones se reflejan en el *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 184, de 1 de junio de 2000.

riormente referido. Así lo acreditan las sesiones celebradas en el período considerado. En su funcionamiento, además, ha de destacarse que, como regla general, ha operado el principio de unanimidad en la adopción de acuerdos, rigiendo a gran altura la cortesía parlamentaria. En concreto, de acuerdo con el siguiente detalle:

- I Legislatura: 145 sesiones.
- II Legislatura: 164 sesiones.
- III Legislatura: 160 sesiones.
- IV Legislatura: 156 sesiones.
- V Legislatura: hasta el 30 de junio de 2002, 119 sesiones. Si extrapolamos el dato, el número total de sesiones a la conclusión de la misma podría situarse entre las 150 y las 160 reuniones, es decir, una cifra en línea con los períodos parlamentarios precedentes.

Por las múltiples variaciones registradas en su desarrollo, me limito aquí a dejar constancia de la relación de portavoces durante la vigente V Legislatura. Los portavoces de los Grupos Parlamentarios, de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de fecha 2 de julio de 1999¹⁵⁰, fueron, con sus respectivos portavoces adjuntos:

• Grupo Popular:

- Portavoz: Pedro Calvo Poch.
- Portavoz Adjunto: Miguel Ángel Villanueva González.
- Secretaria General: Paz González García.

• Grupo Socialista-Progresistas:

- Portavoz: Jaime Lissavetzky Díez.
- Portavoces Adjuntos: Helena Almazán Vicario.
Jorge Gómez Moreno.

• Grupo Izquierda Unida.

- Portavoz: Ángel Pérez Martínez.
- Portavoces Adjuntos: Juan Ramón Sanz Arranz.
María Luisa Sánchez Peral.

Con posterioridad se han producido diversas modificaciones.

Por un lado, en el Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas, la toma de posesión como Diputado en el Congreso de los Diputados del Excmo. Sr. D. Jaime Lissavetzky Díez comportó su sustitución como Portavoz, en virtud del Acuerdo de la Mesa de 4 de abril de 2000, por el Ilmo. Sr. D. Pedro Feliciano Sabando Suárez.

Por otro, en el Grupo Popular, el nombramiento del Excmo. Sr. Calvo Poch y de la Ilma. Sra. González García como Consejero y Viceconsejera de Medio Ambiente, respectivamente, comportó su sustitución por los siguientes cargos, en virtud del Acuerdo de la Mesa de 5 de junio de 2000:

¹⁵⁰ Cfr. *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 1, de 22 de julio, p. 6.

- Grupo Popular:

- Portavoz: Miguel Ángel Villanueva González.
- Portavoz Adjunto: Pedro Muñoz Abrines
- Secretaria General: Elena González Moñux.

5.5. La Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid

La Diputación Permanente es el órgano tipo de continuidad parlamentaria. Se trata de un órgano colegiado de vida transitoria, cuya principal función es garantizar el funcionamiento de la Cámara cuando ésta hubiere sido disuelta o hubiere expirado su mandato, velando por los poderes de la Cámara cuando no esté reunida, es decir, le corresponde garantizar la permanencia del ejercicio, aunque limitado, de las funciones propias de la Institución. En todo caso, desempeña sus atribuciones fuera de los plazos propios de los períodos ordinarios de sesiones y en los casos de caducidad del mandato o de disolución, concluyendo su actividad con la constitución de la nueva Cámara, a la que debe dar cuenta de los asuntos considerados y acuerdos adoptados.

Su composición, determinada conforme al principio de proporcionalidad, varía en función de las consideraciones reglamentarias. Así, en tanto algunos Parlamentos fijan un número concreto de miembros¹⁵¹, otros remiten su concreción a un acuerdo ulterior, pudiendo, por consiguiente, variar en cada Legislatura¹⁵², mientras que un tercer grupo de reglamentos se limita a disponer el número mínimo de miembros que pueden formar parte de la Diputación. Este último es el modelo al que responde el artículo 80 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, cuyo apartado 2 prescribe una composición ciertamente amplia:

«La Diputación Permanente estará compuesta por el Presidente, por los restantes miembros de la Mesa y por el número de Diputados que, con un mínimo de veinte, establezca la Mesa, oída la Junta de Portavoces.»

Presupuesto lo anterior, el Reglamento de la Asamblea de Madrid disciplina sus principios esenciales en el Capítulo VI, «De la Diputación Permanente», del Título IV, «De la organización de la Asamblea», artículos 79 a 83, delimitando su ámbito temporal, su composición y el procedimiento de designación de sus miembros, el régimen de convocatoria y desarrollo de sus sesiones, sus competencias y el régimen de rendición de cuentas al Pleno.

Por lo que respecta a su actividad han de tenerse en cuenta los siguientes datos:

¹⁵¹ *Ad exemplum*, el artículo 54 del Reglamento de las Cortes Valencianas.

¹⁵² Éste es el caso del Reglamento del Parlamento de Andalucía, en su artículo 58, o del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, en su artículo 53.

- I Legislatura: 5 sesiones, celebradas con las siguientes fechas:
 - 4 de julio de 1984¹⁵³.
 - 12 de julio de 1984¹⁵⁴.
 - 17 de enero de 1985¹⁵⁵.
 - 23 de julio de 1985¹⁵⁶.
 - 29 de junio de 1987¹⁵⁷.
- II Legislatura: 3 sesiones, de acuerdo con el siguiente detalle:
 - 16 de septiembre de 1987¹⁵⁸.
 - 16 de enero de 1991¹⁵⁹.
 - 31 de enero de 1991¹⁶⁰.
- III Legislatura: 4 sesiones.
 - 6 de septiembre de 1991¹⁶¹.
 - 17 de septiembre de 1992¹⁶².
 - 21 de septiembre de 1993¹⁶³.
 - 30 de mayo de 1995¹⁶⁴.
- IV Legislatura: no se celebró ninguna sesión, si bien la Mesa de la Diputación Permanente se reunió en cuatro ocasiones, conforme se ha detallado con anterioridad.
- V Legislatura: durante la vigente Legislatura la Diputación Permanente está compuesta por 32 miembros —frente a los 29 de la IV Legislatura—, de los cuales 17 corresponden al Grupo Popular, 12 al Grupo Socialista-Progresistas y 3 al Grupo Izquierda Unida, procediendo el Pleno de la Cámara a la designación de miembros en su sesión extraordinaria de fecha 15 de julio de 1999¹⁶⁵. No obstante, ha de tenerse presente con fecha de 14 de junio de 2000, el Pleno, en sesión ordinaria, de conformidad con lo previsto por el artículo 80.4 del Reglamento, procedió a la designación de nueva composición global de miembros titulares y suplentes de la Diputación¹⁶⁶.

¹⁵³ Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 146, de 14 de agosto de 1984.

¹⁵⁴ Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 149, de 16 de agosto de 1984.

¹⁵⁵ Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 208, de 25 de marzo de 1985.

¹⁵⁶ Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 286, de 25 de septiembre de 1985.

¹⁵⁷ Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 581, sin fecha.

¹⁵⁸ Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 13, de 5 de octubre de 1987.

¹⁵⁹ Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 867, de 7 de marzo de 1991.

¹⁶⁰ Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 873, de 12 de marzo de 1991.

¹⁶¹ Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 23, de 6 de septiembre de 1991.

¹⁶² Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 309, de 17 de septiembre de 1992.

¹⁶³ Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 550, de 21 de septiembre de 1993.

¹⁶⁴ Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 1029, de 30 de mayo de 1995.

¹⁶⁵ Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 12, de 15 de julio de 1999. La relación de miembros originarios se reproduce en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 1, de fecha 22 de julio de 1999.

¹⁶⁶ Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 200, de 14 de junio de 2000. La relación de miembros titulares y suplentes aprobada se reproduce en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 49, de fecha 22 de junio de 2000.

Hasta la fecha considerada, esto es, el 30 de junio de 2002, se han celebrado 5 reuniones, las siguientes:

- 28 de julio de 1999¹⁶⁷.
- 18 de julio de 2000¹⁶⁸.
- 15 de enero de 2001¹⁶⁹.
- 12 de julio de 2001¹⁷⁰.
- 16 de enero de 2002¹⁷¹.

Aunque el período de estudio considerado en el presente trabajo se cierra con fecha de 30 de junio de 2002, ha de tenerse en cuenta que la Diputación Permanente ha celebrado durante el presente año 2002 otra sesión, concretamente:

- 17 de julio de 2002¹⁷².

VI. LAS FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID

6.1. El elenco funcional

A imagen de los restantes Parlamentos autonómicos, las competencias de la Cámara regional responden al esquema diseñado por el texto constitucional para el supuesto de las Cortes Generales.

Consecuentemente, y a tenor del artículo 9 del Estatuto, le corresponde, básicamente, el ejercicio de la potestad legislativa, la aprobación y control del Presupuesto de la Comunidad, el impulso, orientación y control de la acción de gobierno —de las referidas funciones me ocupo sincréticamente en los epígrafes que siguen—, así como las demás competencias que le atribuyen la Constitución, el presente Estatuto y el resto del ordenamiento jurídico.

Dicho elenco resulta complementado, en la vigente redacción del Estatuto de Autonomía, por el tenor de su artículo 16, cuyo apartado 1 le confiere,

No obstante lo anterior, ha de tenerse en cuenta que desde dicha fecha se han producido 3 modificaciones. Primera, con fecha de 13 de marzo de 2001, la sustitución, por fallecimiento, de D.^a Pilar García Peña, resultando designado D. Francisco Garrido Hernández (*Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 366, de 5 de abril de 2001; *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 91, de 19 de abril de 2001). Segunda, la baja de D.^a Elena González Moñux, sustituida por D.^a Paz González García con fecha de 25 de septiembre de 2001 (*Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 448, de 4 de octubre de 2001; *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 114, de 18 de octubre de 2001). Tercera, la sustitución de D.^a Carmen Martínez Ten, tras su renuncia a la condición de Diputada, por D. Antonio Chazarra Montiel con fecha de 19 de octubre de 2001 (*Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 500, de 15 de noviembre de 2001; *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 123, de 22 de noviembre de 2001).

¹⁶⁷ Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 17, de 28 de julio de 1999.

¹⁶⁸ Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 214, de 18 de julio de 2000.

¹⁶⁹ Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 299, de 15 de enero de 2001.

¹⁷⁰ Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 443, de 12 de julio de 2001.

¹⁷¹ Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 541, de 16 de enero de 2002.

¹⁷² Cfr. *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid*, núm. 707, de 17 de julio de 2002.

de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 152 de la Constitución, la competencia para elegir, entre sus miembros, al Presidente de la Comunidad.

De otro lado, el apartado 2 del meritado precepto, en los términos anteriormente analizados, se ocupa de establecer una reserva en favor del Reglamento parlamentario.

Por último, el apartado 3 del artículo 16 del Estatuto establece una prolija enumeración casuística de competencias, reiterando algunas de las ya citadas; la siguiente:

«Corresponde, igualmente, a la Asamblea:

a) La aprobación y el control de los Presupuestos de la Comunidad y el examen y aprobación de sus cuentas.

b) El conocimiento y control de los planes económicos.

c) Acordar operaciones de crédito y deuda pública.

d) La ordenación básica de los órganos y servicios de la Comunidad.

e) El control de los medios de comunicación social dependientes de la Comunidad.

f) La potestad de establecer y exigir tributos.

g) La interposición del recurso de inconstitucionalidad y la personación ante el Tribunal Constitucional, en los supuestos y términos previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

h) La solicitud al Gobierno de la Nación de la adopción de proyectos de ley y la remisión a la Mesa del Congreso de los Diputados de proposiciones de ley, delegando ante dicha Cámara a los miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

i) La designación de los Senadores que han de representar a la Comunidad, según lo previsto en el artículo 69.5 de la Constitución. Los Senadores serán designados en proporción al número de miembros de los grupos políticos representados en la Asamblea. Su mandato en el Senado estará vinculado a su condición de miembros de la Asamblea.

j) La ratificación de los convenios que la Comunidad de Madrid concluya con otras Comunidades Autónomas, para la gestión y prestación de servicios propios de la competencia de las mismas.

Estos convenios serán comunicados de inmediato a las Cortes Generales.

k) La ratificación de los acuerdos de cooperación que, sobre materias distintas a las mencionadas en el apartado anterior, concluya la Comunidad de Madrid con otras Comunidades Autónomas, previa autorización de las Cortes Generales.

l) La recepción de la información que facilitará el Gobierno de la Nación sobre tratados y convenios internacionales y proyectos de normativa aduanera en cuanto se refieran a materias de específico interés para la Comunidad de Madrid.

m) La fijación de las previsiones de índole política, social y económica que, de acuerdo con el artículo 131.2 de la Constitución, haya de suministrar la Comunidad de Madrid al Gobierno de la Nación para la elaboración de proyecto de planificación.

n) La aprobación de planes generales de fomento relativos al desarrollo económico de la Comunidad de Madrid, en el marco de los objetivos señalados por la política económica nacional.

ñ) Cuantos otros poderes, competencias y atribuciones le asignen la Constitución, el presente Estatuto y las leyes.»

No pudiendo abordarse un análisis exhaustivo de dichas funciones, me limito en lo que sigue a destacar, de la forma más sincrética posible, algunos extremos relevantes de las más significativas.

6.2. La potestad legislativa¹⁷³

La Asamblea de Madrid goza de la potestad legislativa en aquellas materias que sean de su exclusiva competencia, así como en aquellas en que le corresponda el desarrollo de las competencias compartidas con el Estado.

Como tuve ocasión de resaltar en otro lugar, la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, afirma de forma expresa tanto la potestad legislativa como la potestad reglamentaria —correctamente escindida de la función ejecutiva— de la Comunidad de Madrid, distinguiendo nítidamente el respectivo ámbito de las dos facetas de la potestad normativa.

Presupuesto lo anterior, ha de subrayarse que en su redacción vigente —tras la última de las reformas, la operada en 1998—, el artículo 9 determina que es la Asamblea de Madrid la institución de autogobierno que representa al pueblo de Madrid y ejerce la potestad legislativa de la Comunidad.

Esta atribución genérica resulta ulteriormente precisada por el artículo 15, cuyo apartado 1 delimita el ámbito material de la misma:

«La Asamblea ejerce la potestad legislativa en las materias de competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid, recogidas en el artículo 26 del presente Estatuto.

Igualmente ejerce la potestad legislativa en las materias previstas en el artículo 27 de este Estatuto, así como en aquellas que se le atribuyan, transfieran o deleguen en virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución.»

En el propio precepto se disciplina la iniciativa legislativa, determinando su apartado 2:

¹⁷³ Respecto del reconocimiento de la potestad legislativa de la Asamblea de Madrid y su ejercicio durante las tres primeras legislaturas de la Cámara me remito a un estudio anterior. *Vid.* Arévalo Gutiérrez, «Las leyes de la Asamblea de Madrid», *op. cit.* Asimismo, véase otro trabajo anterior sobre la materia, «La fuerza de ley de las leyes emanadas de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas», *op. cit.*

De consulta fructífera sigue resultando el pionero trabajo de José Luis Villar Palasí, «Potestad normativa de la Comunidad de Madrid», en la obra colectiva *Estudios sobre el Derecho de la Comunidad de Madrid*, *op. cit.*, pp. 221 a 252.

Sobre el procedimiento legislativo, en la misma obra colectiva, *vid.* el estudio descriptivo de Saíenz Moreno, «La Asamblea de Madrid», concretamente pp. 52 a 66; no obstante, ha de tenerse presente que las referencias normativas del mismo lo son al originario Reglamento de la Cámara, de 18 de febrero de 1984, hoy derogado y sustituido por el vigente Reglamento, de 30 de enero de 1997.

De igual forma, puede consultarse la narración circunstanciada de Piñar Mañas, «Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid», en *Madrid Comunidad Autónoma Metropolitana*, *op. cit.*, especialmente pp. 75 a 86.

Por lo que respecta al control por el Tribunal Constitucional de las leyes de la Asamblea, *vid.* Martín Bassols Coma, «El control de la Comunidad de Madrid», Capítulo 30 de la obra colectiva *Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid*, *op. cit.*, específicamente pp. 816 a 824.

«La iniciativa legislativa corresponde a los Diputados, a los Grupos Parlamentarios y al Gobierno, en los términos que se establezcan en el Reglamento de la Asamblea. Por ley de la Asamblea se podrá regular el ejercicio de la iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos, para las materias a que se refiere el apartado 1»¹⁷⁴.

Lo anterior ha de complementarse, necesariamente, con la delimitación del ámbito competencial del Parlamento regional que efectúa el artículo 34.2 del Estatuto, del siguiente tenor:

«En las materias de su competencia, le corresponde a la Asamblea de Madrid la potestad legislativa en los términos previstos en el Estatuto, correspondiéndole al Consejo de Gobierno la potestad reglamentaria y la función ejecutiva.»

Su ejercicio se canaliza conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 1997 por el Título VII, «Del procedimiento legislativo», artículos 139 a 174, donde, al margen de la iniciativa legislativa —art. 139— y del procedimiento legislativo común para los proyectos y proposiciones de ley —arts. 140 a 154—, se establecen de forma expresa diversas especialidades en el procedimiento legislativo, relativas a la reforma del Estatuto de Autonomía —arts. 155 y 156—, el procedimiento con mayorías especiales —art. 157—, la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad —arts. 154 a 164—, la competencia legislativa plena de las Comisiones —arts. 165 y 166— y la tramitación en lectura única —arts. 167 a 170—.

En cuanto a los trámites precisos para la integración de la eficacia de las leyes autonómicas, el artículo 40 establece el régimen de publicación de las leyes y reglamentos emanados de la Comunidad, con la significativa —y acertada— peculiaridad de constituir en el ámbito comparado, junto con el Estatuto del Principado de Asturias, las únicas normas institucionales básicas que exigen con carácter preceptivo la publicación de todas las disposiciones generales en el *Boletín Oficial del Estado*. Dispone su apartado 1:

«Las leyes aprobadas por la Asamblea serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad, que ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial del Estado, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en aquél, salvo que en las mismas se disponga otra cosa.»

De acuerdo con lo dispuesto en el reproducido apartado, debe destacarse la pintoresca particularidad —en este supuesto no acertada— de la entrada en vigor inmediata de las leyes, es decir, al día siguiente de su publicación.

¹⁷⁴ La reserva de ley estatutaria establecida por el art. 26.2 fue cumplimentada por la Ley 6/1986, de 25 de junio, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, en cuyo art. 8 se establece el requisito de la firma de, al menos, 50.000 electores madrileños, y en su artículo 14 se precisa la concurrencia, bien de tres o más Ayuntamientos cuyos municipios cuenten en conjunto con un censo superior a 50.000 electores, o bien de diez o más Ayuntamientos de municipios limítrofes entre sí, cualquiera que sea el número de electores de los mismos.

Semejante prescripción comporta que en la práctica no exista un plazo de *vacatio legis* que permita el conocimiento de la norma por los distintos operadores jurídicos, lo que resulta cuando menos sorprendente desde el punto de vista de la seguridad jurídica: y eso que «hemos mejorado», pues el texto originario del artículo 41 del Estatuto prescribía la entrada en vigor el propio día de su publicación oficial; lo que implicaba la vigencia de la ley desde las cero horas del mismo, esto es, incluso con antelación al momento real en que el periódico oficial ha visto la luz y se ha procedido a su distribución. Piénsese en el efecto que dicha configuración puede producir en determinados sectores de especial trascendencia socioeconómica, como puede ser el urbanismo y la vivienda¹⁷⁵.

Por último, ha de recordarse que, conforme a lo dispuesto por el artículo 15.3 del Estatuto, la Asamblea puede delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido para el supuesto de delegación de las Cortes Generales en el Gobierno de la Nación. El procedimiento parlamentario específico para la tramitación de la delegación legislativa en el Consejo de Gobierno es regulado por los artículos 171 a 174 del Reglamento, preceptos que prescriben la adopción de formas de control de la legislación delegada por la Cámara. No cabe, por el contrario, que el Gobierno aprueba decretos-leyes, habida cuenta de que no está prevista estatutariamente la legislación de urgencia.

Para un análisis pormenorizado de la actividad legislativa de la Cámara, incluyendo una relación de todas las leyes aprobadas, me remito a un trabajo anterior del autor de estas líneas, citado en nota al presente epígrafe.

6.3. La competencia presupuestaria¹⁷⁶

El Parlamento autonómico ostenta la, nunca suficientemente ponderada, competencia de aprobación de los Presupuestos de la Comunidad.

A su reconocimiento estatutario hice alusión al analizar la autonomía financiera de la Cámara, remitiéndome a lo entonces señalado.

Por lo que respecta al *iter legis*, su disciplina se establece como una especialidad del procedimiento legislativo en los artículos 158 a 164 del Reglamento de la Asamblea.

¹⁷⁵ Sobre el particular, *vid.* Arévalo Gutiérrez, «La publicación de las leyes y su conocimiento por la opinión pública», en el colectivo *Parlamento y Opinión Pública*, coordinado por Pau Vall, editado por la Asociación Española de Letrados de Parlamentos en Editorial Tecnos, Madrid, 1995, pp. 141 a 187. Respecto del específico supuesto del urbanismo, Arévalo Gutiérrez, «El proceso de nomogénesis del ordenamiento urbanístico de la Comunidad de Madrid», Capítulo Preliminar de la obra dirigida por Luciano Parejo Alfonso, *Derecho urbanístico de la Comunidad de Madrid*, 2.ª ed., adaptada a la nueva Ley del Suelo, editada por el Instituto Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente en Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S. A., Madrid, 2002, pp. 69 y 70.

¹⁷⁶ Respecto del régimen presupuestario *vid.* Salvador Montejo Velilla, «La Hacienda de la Comunidad de Madrid», Capítulo 14 de la obra colectiva *Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid*, *op. cit.*, pp. 343 a 364.

6.4. El control político¹⁷⁷

Se trata de la función que llena auténticamente de contenido la actividad de la Cámara, no obstante la intensa actividad legislativa desarrollada, canalizándose, básicamente, mediante las sesiones de control, en las que se sustancian preguntas de contestación oral —arts. 193 a 195 del Reglamento para las preguntas orales en Pleno y arts. 196 y 197 para las preguntas orales en Comisión—, interpelaciones —arts. 199 a 204— y comparecencias —arts. 208 y 209 ante el Pleno y 210 ante las Comisiones—.

En mérito de la misma, la Asamblea lleva a cabo el control político del Presidente de la Comunidad, al que elige, así como de los miembros del Consejo de Gobierno designados por el Presidente, aunque no cabe la repro-bación individual, circunscribiéndose tanto la cuestión de confianza como la moción de censura a la exigencia de responsabilidad política del Presidente de la Comunidad —arts. 19 del Estatuto y 185 y 186 del Reglamento, y arts. 20 del Estatuto y 187 a 190 del Reglamento, respectivamente—.

6.5. Participación en el procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía¹⁷⁸

Conforme a lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de Autonomía, la redacción de cuyo apartado 1 responde a la introducida por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio:

«1. La reforma del Estatuto se ajustará al siguiente procedimiento:

La iniciativa de la reforma corresponderá al Gobierno o a la Asamblea de Madrid, a propuesta de una tercera parte de sus miembros, o de dos tercios de los municipios de la Comunidad cuya población represente la mayoría absoluta de la Comunidad de Madrid.

La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación de la Asamblea por mayoría de dos tercios y la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica.

2. Si la propuesta de reforma no es aprobada por la Asamblea o por las Cortes Generales, no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación de la Asamblea hasta que haya transcurrido un año.»

¹⁷⁷ Desde que elaboré mi Tesis de Licenciatura, he tenido ocasión de exponer el concepto del control parlamentario del que parto, como control político, en diversas publicaciones, a las que, obviamente, me remito. Sin ánimo exhaustivo, *vid.* Arévalo Gutiérrez, «Reflexiones sobre las Comisiones de Investigación o Encuesta Parlamentaria en el Ordenamiento Constitucional Español», en *Revista de las Cortes Generales*, núm. 11, segundo cuatrimestre de 1987, pp. 159 a 192; *Idem.*, «Las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas», *op. cit.*; y Arévalo Gutiérrez, Marazuela Bermejo y Del Pino Carazo, epígrafe VIII, «La función de control político como núcleo de la actividad de los Parlamentos autonómicos», del Estudio Preliminar de la obra *Los Reglamentos de los Parlamentos autonómicos*, *op. cit.* Asimismo, con amplias referencias al supuesto específico de la Comunidad de Madrid, mi propia intervención en el «Debate» sobre las peculiaridades del control parlamentario en las Comunidades Autónomas, reproducido en la obra colectiva *Nuevos retos del control parlamentario: Comunidades Autónomas y Unión Europea*, *op. cit.*

¹⁷⁸ Sobre el particular, *vid.* Ángel Sánchez Navarro, «La reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid», Capítulo 3 de la obra colectiva *Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid*, *op. cit.*, pp. 837 a 865.

Consecuentemente, la Asamblea de Madrid no es competente para proceder a la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía, en cuanto ley orgánica estatal, sino sólo para proponer su modificación. En las certeras palabras de Aguado Renedo, la resolución de la Cámara es «un texto-iniciativa del *iter* que ha de tener lugar en las Cortes Generales»¹⁷⁹.

A la concreta tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid, dentro de su Título VII, «Del Procedimiento legislativo», dedica el Reglamento de 1997 uno de los procedimientos especiales comprendidos en su Capítulo III, concretamente en la Sección Primera, «De la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid», artículos 155 y 156. Las especialidades básicas se centran en la capacidad de iniciativa —circunscrita al Consejo de Gobierno y a la Asamblea, a propuesta de una tercera parte de sus miembros o de dos tercios de los municipios de la Comunidad, cuya población represente la mayoría absoluta de la misma— y en la exigencia de una mayoría cualificada para su aprobación —la propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación por mayoría de dos tercios de la Asamblea—.

6.6. Otras competencias constitucionalmente establecidas

Como vimos, al margen de las referidas, ostenta la Asamblea de Madrid, asimismo, todas aquellas otras competencias que le atribuyen diversos preceptos constitucionales y las que le han sido atribuidas estatutariamente. Entre las primeras destacan las siguientes:

6.6.1. Elección del Presidente de la Comunidad de Madrid¹⁸⁰

La elección del Presidente de la Comunidad de Madrid, de entre los miembros de la Asamblea, prevista por el artículo 152 de la Constitución y por el artículo 16.1 del Estatuto de Autonomía, se desarrolla por el artículo 18 del propio Estatuto, disciplinando la investidura el Reglamento de la Cámara en el Capítulo Primero, «De la investidura», del Título X, «Del otorgamiento y de la retirada de confianza», arts. 181 a 184.

6.6.2. Designación de los Senadores de la Comunidad de Madrid

El artículo 69.5 de la Constitución dispone lo que sigue:

«Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea

¹⁷⁹ Cfr. Aguado Renedo, «El Estatuto de Autonomía...», *op. cit.*, p. 418.

¹⁸⁰ Al respecto, véase Torres del Moral, «El Presidente de la Comunidad de Madrid», Capítulo 9 de la obra colectiva *Comentarios al Estatuto de la Comunidad de Madrid*, *op. cit.*, específicamente pp. 168 a 175. En la propia publicación, Aguiar de Luque, «El Gobierno de la Comunidad de Madrid», *op. cit.*, pp. 197 a 202.

Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.»

De conformidad con el meritado precepto, la relación de Senadores en representación de la Comunidad de Madrid designados por la Asamblea de Madrid es la que sigue:

• I Legislatura: en la sesión plenaria celebrada por la Cámara los días 13 y 14 de junio de 1983 se designó a los siguientes 5 Senadores.

- Flores Valencia, Elena.
- Perinat Elio, Luis Guillermo.
- Gómez Pérez, Sócrates.
- Robles Piquer, Carlos.
- Sauquillo Pérez del Arco, Francisca.

• II Legislatura: la Cámara, en su sesión plenaria de fecha 28 de julio de 1987, procedió a la designación de los siguientes 5 Senadores.

- Flores Valencia, Elena.
- Ruiz-Gallardón Jiménez, Alberto.
- Castedo Álvarez, Fernando.
- Sauquillo Pérez del Arco, Francisca.
- Cortés Muñoz, Luis Eduardo.

Con fecha de 15 de noviembre de 1989 el Pleno procedió a realizar 3 sustituciones, con los oportunos nombramientos. En concreto:

Senador sustituido	Senador nombrado
Flores Valencia, Elena	Sanz Agüero, Marcos
Ruiz-Gallardón Jiménez, Alberto	Van-Halen Acedo, Juan
Castedo Álvarez, Fernando	Harguindey Banet, Gerardo

• III Legislatura: en su sesión plenaria de fecha 16 de julio de 1991 se procedió por el Parlamento regional a la designación de los siguientes 5 Senadores.

- Cortés Muñoz, Luis Eduardo.
- Van-Halen Acedo, Juan.
- Serrano Beltrán, José Teófilo.
- Sanz Agüero, Marcos.
- Vilallonga Elviro, Isabel.

A lo largo de la Legislatura se produjeron diversas sustituciones, con los oportunos nombramientos, concretamente 4. La primera lo fue con fecha

de 17 de octubre de 1991, la segunda con fecha de 16 de junio de 1993, y las dos últimas en sesión plenaria de 2 de junio de 1994. En concreto:

Senador sustituido	Senador nombrado
Sanz Agüero, Marcos	Sauquillo Pérez del Arco, Francisca
Cortés Muñoz, Luis Eduardo	Pedroche Nieto, Jesús
Sauquillo Pérez del Arco, Francisca	Abad Bécquer, Fernando
Serrano Beltrán, Teófilo	García-Hierro Caraballo, Dolores

• IV Legislatura: los Senadores designados en la IV Legislatura fueron:

- Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero Márquez.
- Excmo. Sr. D. Pedro Calvo Poch.
- Excmo. Sr. D. Luis María Huete Morillo.
- Excma. Sra. D.^a Dolores García-Hierro Caraballo.
- Excmo. Sr. D. José Luis Nieto Cicuéndez.

A lo largo de la Legislatura D.^a Dolores García-Hierro Caraballo, que renunció a su acta de Diputada en la Asamblea, al tomar posesión de su escaño en el Congreso de los Diputados, fue sustituida por D. Jaime Lissavetzky Díez.

• V Legislatura: en su sesión plenaria de fecha 15 de julio de 1999 se procedió por el Parlamento regional a la designación de los siguientes 5 Senadores¹⁸¹:

- García-Escudero Márquez, Pío.
- Van-Halen Acedo, Juan.
- Posada Chapado, Rosa.
- Álvarez-Arenas Cisneros, Carmen.
- Almeida Castro, Cristina.
- Lissavetzky Díez, Jaime.

Como consecuencia de la renuncia a su condición de Diputado formulada por D. Jaime Lissavetzky Díez, mediante Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 3 de abril de 2000¹⁸², a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas se procedió al nombramiento de D. Pedro Sabando Suárez.

¹⁸¹ Cfr. *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 1, de 22 de julio de 1999.

¹⁸² Cfr. *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 37, de 6 de abril de 2000.

6.6.3. *La propuesta de iniciativa legislativa ante el Gobierno y las Cortes Generales*

De conformidad de con el artículo 87.2 de la Constitución, la Asamblea de Madrid puede ejercitar la propuesta de iniciativa legislativa. En virtud del meritado precepto constitucional:

«Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.»

El vigente Reglamento procede a su disciplina específica en el Título VIII, «De la solicitud al Gobierno de la adopción de proyectos de ley y de la remisión al Congreso de los Diputados de proposiciones de ley», artículos 175 a 177.

Conviene destacar tres extremos de la disciplina reglamentaria:

- 1.º Ambos tipos de iniciativas se sustancian por el procedimiento legislativo común, con la singularidad de que su aprobación requiere el voto favorable de la mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto del texto.
- 2.º Por lo que respecta a las iniciativas ante el Congreso, la designación de los Diputados encargados de la defensa de la proposición de ley se realiza en Pleno, mediante votación secreta por papeletas.
- 3.º En relación con las iniciativas en curso al producirse la terminación del mandato de la Asamblea, el artículo 245 establece una regla específica frente a la general de caducidad:

«Si se extinguiera el mandato, al caducar el plazo o disolverse la Asamblea, antes de que se hubiera procedido al trámite de defensa en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley remitida a la Mesa de esta Cámara, el Pleno podrá designar nuevos Diputados encargados de su defensa de acuerdo con lo dispuesto en el art. 176.3 de esta Reglamento, o, a propuesta de la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, acordar por mayoría absoluta la retirada de la proposición de ley.

La iniciativa para la adopción de los acuerdos a los que se refiere el párrafo anterior podrá ser ejercida por dos Grupos Parlamentarios o la quinta parte de los Diputados.»

6.6.4. *La iniciativa de reforma constitucional*

La Asamblea de Madrid puede ejercitar la iniciativa para la reforma de la Constitución, a tenor de lo dispuesto por los artículos 166 y 87.2 de la Carta Magna, en relación con el artículo 15 del Estatuto de Autonomía, en la redacción de este precepto operada por la Ley 5/1998, de 7 de julio.

6.6.5. *El planteamiento de recursos de inconstitucionalidad*

El Parlamento regional, a tenor de lo dispuesto por el artículo 162 de la *Norma normarum*, ostenta la posibilidad de interponer recursos de inconstitucionalidad ante el supremo intérprete de la Constitución.

El vigente Reglamento de la Cámara ha procedido a su disciplina, dedicándole el Título XVIII, «De los recursos de inconstitucionalidad», comprensivo del artículo 222, del siguiente tenor:

«De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, llegado el caso, el Pleno, a propuesta de la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, o, en su caso, la Diputación Permanente, podrán acordar interponer recurso de inconstitucionalidad, personarse y formular alegaciones ante el Tribunal Constitucional en los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad en los supuestos y términos previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.»

Recuérdese a este respecto lo establecido por el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.